



**Visiones de la paz y el desarrollo en la comunidad de la vereda el Tabor de Granada,
Antioquia**

Lina María Vélez Sepúlveda

Tesis de maestría presentada para optar al título de Magíster en Intervención Social

Asesor

Gerardo Vásquez Arenas, candidato a Doctor (PhD) en Estudios Culturales Latinoamericanos

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Maestría en Intervención Social
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

| | |
|----------------------------|---|
| Cita | (Vélez Sepúlveda, 2024) |
| Referencia | Vélez Sepúlveda, L. M. (2024). <i>Visiones de la paz y el desarrollo en la comunidad de la vereda El Tabor de Granada, Antioquia</i> . [Tesis de maestría]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. |
| Estilo APA 7 (2020) | |



Maestría en Intervención Social, Cohorte II.

Grupo de Investigación Estudios Interculturales y Decoloniales.

Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (CISH).



CRAI María Teresa Uribe (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

Quiero dedicar este trabajo al comité de deporte de la vereda El Tabor por hacer posible este camino, por el cariño sincero y los valiosos momentos que compartimos.

A la comunidad de El Tabor por acogerme como una hija más de la vereda.

A los campesinos y las campesinas que desde diferentes lugares y en su quehacer cotidiano, a veces invisible, tejen estrategias para construir una vida digna y darle un sentido *otro* a la paz.

Agradecimientos

A Clau, por maternarme a mí y a mis hijos para que yo pudiera andar este camino. A Isa y a Tomás por acompañarme y esperar con paciencia a que mamá pudiera tener el tiempo necesario para estar con ellos. A Luis Antonio, mi compañero de vida y de viaje, por su amor incondicional, acompañamiento y escucha atenta.

A Gerardo, cuyo acompañamiento tranquilo y sereno me permitió encontrar mi propio camino.

A Viole, mi hermana de la vida, por acompañarme en el trabajo de campo.

Y Edgar, a quien la vida nos juntó y nos permitió soñar juntos. A él le agradezco hacer posible la historia de la vereda en un vídeo.

Tabla de contenido

| | |
|---|----|
| Resumen | 9 |
| Abstract | 10 |
| Introducción | 12 |
| 1 El comité-ando como estrategia de investigación/intervención: memoria metodológica..... | 25 |
| 1.1 El momento de acercarnos | 25 |
| 1.1.1 De camino a Granada. Una nota necesaria | 25 |
| 1.1.2 De camino a la academia | 28 |
| 1.1.3 Y de la academia a la vereda..... | 28 |
| 1.1.4 Y de la vereda a la propuesta | 29 |
| 1.2 El momento del comité-ando | 31 |
| 1.2.1 El tiempo de la coordinación | 32 |
| 1.2.2 El tiempo del trabajo..... | 34 |
| 1.2.3 El tiempo del goce y el disfrute | 37 |
| 1.3 El momento para reflexionarnos | 42 |
| 1.4 El momento de la valoración, socialización y devolución | 44 |
| 2 El lugar de la vereda El Tabor en el metarrelato del Oriente antioqueño | 48 |
| 2.1 El desarrollo como expresión de la modernidad y su impacto en el Oriente antioqueño | 54 |
| 2.2 Del desarrollo al conflicto armado | 60 |
| 2.3 Del conflicto armado a la paz..... | 66 |
| 2.4 Las nuevas viejas promesas de desarrollo y paz | 71 |
| 3 “Campesino a mucho honor”. Trayectorias por el reconocimiento de la subjetividad campesina | 77 |
| 4. “Éramos ricos y no lo sabíamos y nosotros pensando que éramos pobres”: el modo de vida campesina como forma de dignificar la vida y configurar pazes otras | 90 |

4.1 “Las raíces de donde uno es, eso no se olvida”: dimensión territorial.....92

4.2 “Cuando una comunidad trabaja unidad no le queda grande nada”: dimensión político-organizativa96

4.3 “Siempre venimos los domingos y los lunes a la escuela a integrarnos” dimensión cultural102

4.4 “Campesinos trabajando en sus altares”: dimensión productiva.....106

4.5 El ámbito comunitario como una forma de vida posible111

5 Las prácticas comunitarias como formas de inter-versión122

5.1 Las intervenciones de desarrollo, de los actores armados y en respuesta al conflicto122

5.2 El boom de las intervenciones y la búsqueda de la paz.....126

5.3 La institucionalidad llegó a El Tabor después del conflicto133

5.4 De la intervención a la inter-versión142

6 Para seguir conversando.....148

Referencias153

Anexos.....166

Lista de figuras

| | |
|--|----|
| Figura 1 Visita de aproximación..... | 31 |
| Figura 2 Acompañamiento torneo relámpago..... | 31 |
| Figura 3 Formalización de la participación en el Comité | 34 |
| Figura 4 Retroalimentación de la chocolatada con una espiral de la memoria..... | 35 |
| Figura 5 Retroalimentación sancocho y paseo al río. | 35 |
| Figura 6 Vinculación de Edgar Romero al proceso | 37 |
| Figura 7 Entrevista Pablo Enrique Giraldo (qepd)..... | 37 |
| Figura 8 Espectadores torneo. | 38 |
| Figura 9 Partido torneo relámpago..... | 38 |
| Figura 10 Chocolatada recuperemos nuestra historia | 39 |
| Figura 11 Paseo al río Tafetanes sector Charco Vueltas..... | 40 |
| Figura 12 Caminata | 41 |
| Figura 13 Celebración día de la familia y el campesino | 41 |
| Figura 14 Presentación de los niños y las niñas..... | 46 |
| Figura 15 Presentación documental a la comunidad..... | 46 |
| Figura 16 Exposición gráfica. | 47 |
| Figura 17 Subregión Oriente antioqueño | 48 |
| Figura 18 Localización de la vereda El Tabor. | 49 |
| Figura 19 Licencias/concesiones para proyectos de generación eléctrica. | 73 |
| Figura 20 Licencias para proyectos mineros..... | 73 |
| Figura 21 Finca campesina..... | 93 |
| Figura 22 Cancha vereda El Tabor..... | 94 |
| Figura 23 Cartografía social comité de deportes..... | 95 |

| | |
|--|-----|
| Figura 24 Cartografía social niños y niñas de El Tabor..... | 95 |
| Figura 25 Asamblea comunitaria. | 97 |
| Figura 26 Participación adultos en el convite. | 99 |
| Figura 27 Participación de los niños en el convite..... | 99 |
| Figura 28 Celebración de la eucaristía. | 102 |
| Figura 29 Paseo Charco Vueltas. | 104 |
| Figura 30 Sancocho para el convite. | 105 |
| Figura 31 Juego de mujeres..... | 106 |
| Figura 32 Equipo femenino El Tabor..... | 106 |
| Figura 33 Roles dentro del proceso de producción panelera. | 109 |
| Figura 34 Vivienda Familia López Giraldo. | 135 |
| Figura 35 Puente reconstruido por la Unidad de Víctimas. | 135 |
| Figura 36 Torneo relámpago. | 140 |

Siglas, acrónimos y abreviaturas

| | |
|----------------------|---|
| ACCIÓN SOCIAL | Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional |
| AMOR | Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño |
| ASOVIDA | Asociación de Víctimas Unidas de Granada |
| CICR | Comité Internacional de la Cruz Roja |
| CINEP | Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz de la Compañía de Jesús |
| CONCIUDADANÍA | Corporación para la Participación Ciudadana |
| CORNARE | Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare |
| DPS | Departamento de la Prosperidad Social |
| ELN | Ejército de Liberación Nacional |
| FARC-EP | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo |
| JAC | Junta de Acción Comunal |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| ONG | Organización No Gubernamental |
| PASPSIVI | Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas |
| PCH | Pequeña Central Hidroeléctrica |
| PDC | Programa de Desarrollo Comunitario |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PRODEPAZ | Programa de Desarrollo para la Paz del Oriente Antioqueño |
| PROVISAME | Promotoras de Vida y Salud Mental |
| UARIV | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas |
| UE | Unión Europea |
| URT | Unidad de Restitución de Tierras |
| VIVA | Programa de Vivienda de Antioquia |

Resumen

Desde el punto de vista investigativo, este trabajo pretende problematizar la relación entre la paz y el desarrollo a partir de las intervenciones institucionales realizadas en la vereda El Tabor de Granada (Antioquia) entre el año 2005-2020. Así mismo, indaga por las prácticas comunitarias sustentadas en el modo de vida campesina, encontrando que dichas prácticas cuestionan e interpelan los discursos hegemónicos de la paz y el desarrollo. A su vez, asume que las prácticas comunitarias se configuran en formas de *inter-versión*. En clave de intervención, el propósito es reconstruir colectiva y colaborativamente la historia de la vereda El Tabor y visibilizarla para promover y fortalecer los vínculos comunitarios. Este trabajo se sitúa desde un enfoque decolonial e intercultural y propone el *comité-ando* como estrategia de investigación/intervención.

Palabras clave: campesinado, modo de vida campesina, Oriente antioqueño, desarrollo, paces, intervención social, inter-versión

Abstract

From a research point of view, this thesis aims to problematize the relationship between peace and development based on the institutional interventions carried out in El Tabor (a rural area in the municipality of Granada, Antioquia) between 2005-2020. It also investigates community practices based on the peasant way of life, finding that these practices question and challenge the hegemonic discourses of peace and development. At the same time, it assumes that community practices are configured in forms of *inter-version*. In terms of intervention, the purpose is to collectively and collaboratively reconstruct the history of El Tabor and make it visible in order to promote and strengthen community ties. This work is based on a decolonial and intercultural approach and proposes the *committee-walk* as a research/intervention strategy.

Keywords: peasants, peasant way of life, Antioquian East sub-region, development, peaces, social intervention, inter-version.

Las historias importan.

Importan muchas historias. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla.

Cimamanda Ngozi Adichie

Introducción

Visiones de la paz y el desarrollo en la comunidad de la vereda El Tabor de Granada, Antioquia, es el resultado del proceso de investigación/intervención que se realizó en el marco del trabajo de la maestría en Intervención Social con énfasis en Posconflicto y Paz durante dos años y medio en la vereda El Tabor del municipio de Granada, Antioquia.

Partimos de asumir que la investigación no es un proceso aislado de la intervención social y viceversa, son las dos caras de la misma moneda (Falla, 2019). La investigación y la intervención sociales, aunque puedan tener alcances diferentes, son dos dimensiones inseparables y complementarias en las ciencias sociales. La investigación proporciona el conocimiento teórico y empírico necesario para comprender los fenómenos sociales, mientras que la intervención social aplica este conocimiento para generar cambios y mejoras en la realidad social.

En clave de investigación, el propósito de este trabajo es problematizar la relación entre las nociones de paz y desarrollo a partir del análisis de las intervenciones institucionales realizadas en la subregión del Oriente antioqueño y, particularmente, las ejecutadas en la vereda El Tabor entre el año 2005-2020. Así mismo, indaga por las visiones que han emergido en la comunidad a partir de estas. También se pregunta por las prácticas comunitarias sustentadas en el modo de vida campesina, encontrando que dichas prácticas cuestionan e interpelan los discursos hegemónicos de la paz y el desarrollo. A su vez, asume que las prácticas comunitarias se configuran en formas de *inter-versión*. (objetivo general y específicos).

En clave de intervención, el propósito es reconstruir colectiva y colaborativamente la historia de la vereda El Tabor y visibilizarla para promover y fortalecer los vínculos comunitarios (objetivo proyectivo). La reconstrucción de la historia de la vereda fue a la vez el pretexto para intervenir y para investigar.

La situación

La historia de la vereda El Tabor se inserta en dinámicas sociopolíticas y económicas en un territorio más amplio denominado el Oriente antioqueño¹ y el devenir de sus habitantes no ha sido ajeno a éstas. Esta región adquirió importancia como foco de desarrollo económico a partir de la segunda mitad del siglo XX con la construcción de megaproyectos hidroeléctricos, la autopista Medellín – Bogotá y el aeropuerto José María Córdova con los cuales desde el gobierno central se pretendió incorporarla a la economía nacional. A los conflictos socioambientales que generó la implantación de estos proyectos está asociado el advenimiento de la conflictividad armada en el Oriente antioqueño (García, 2007; García, 2008; García & Aramburo, 2011; PNUD, 2010).

A pesar de ser considerada una importante zona agrícola y estar ubicada dentro del complejo hídrico del Oriente antioqueño, Granada enfrenta altos niveles de pobreza (CNMH, 2016). Este contraste convirtió al municipio en zona de interés para las guerrillas, quienes buscaron establecerse y controlar regiones que, pese a su índice de pobreza, están integradas a la economía nacional (González F., 2011) y por su estratégica posición geográfica, pues Granada cuenta con una fácil conexión hacia otras zonas de la subregión: la autopista Medellín-Bogotá y la región del Magdalena Medio. En este sentido, es que existe un consenso en atribuir el origen del conflicto armado a la importancia que adquirió como foco de desarrollo económico.

Hacia finales de la década de 1990, el conflicto se intensificó debido a la disputa territorial protagonizada por todos los actores armados, la cual se prolongó hasta 2003. Esto se debió al recrudecimiento de las acciones bélicas por parte de la guerrilla, la presencia y arremetida paramilitar y las operaciones militares en el marco de la Política de Seguridad Democrática (CNMH, 2011; PNUD, 2010; CNMH, 2016). Como resultado, el 95% de la población de la vereda El Tabor se desplazó hacia la cabecera municipal de Granada y a Medellín, Barranquilla y Cali, donde fueron acogidos principalmente por las colonias granadinas establecidas en estas ciudades.

¹ El departamento de Antioquia está zonificado político administrativamente en nueve subregiones que comparten ciertas similitudes geográficas, ambientales, sociales, culturales y económicas. Las subregiones son Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste, Valle de Aburrá y Oriente; a su vez cada subregión se subdivide en zonas con características relativamente homogéneas en términos geográficos y ambientales, proximidad y afinidad cultural. Específicamente el Oriente antioqueño está conformado por la zona del Altiplano o Valle de San Nicolás, Bosques, Páramos y Embalses.

Tras la desmovilización de los paramilitares y la presunta estabilización de los avances obtenidos por la Política de Seguridad Democrática, impartida en el gobierno de Álvaro Uribe entre el 2005-2006, se da un cierre de la conflictividad armada en esta subregión; hecho que posibilitó la implementación de diferentes programas de retorno al territorio, agenciadas por diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como acciones de retorno individuales y colectivas (Ramírez, L. 2015). De manera particular, el proceso de retorno a la vereda El Tabor de las familias desplazadas se presentó en su gran mayoría a los pocos meses de haber salido de la vereda y un menor número de familias terminó de retornar entre los años 2006 y 2007.

En este contexto se presentan una serie de intervenciones, en principio, dirigidas a la atención humanitaria en los momentos más críticos del conflicto armado y, posteriormente, a través de la atención psicosocial y la reparación integral a las víctimas, la reconstrucción de memoria colectiva, proyectos productivos, entre otros, en aras de restablecer el derecho de las víctimas en una apuesta por la construcción de paz. En El Tabor, la institucionalidad comenzó a hacer presencia sólo desde el 2005 con la ejecución de programas y proyectos que partieron de la base de que estaban dirigidos a la población vulnerable. Estos programas se enfocaron principalmente en temas de infraestructura, proyectos productivos y de seguridad alimentaria, y algunas formaciones para los habitantes.

En estas iniciativas de carácter regional y local aparece, tanto tácita como explícitamente, el propósito de que estas contribuyan a la reparación o restitución de derechos de la población víctima del conflicto armado, así como a la construcción de paz y el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. El desarrollo aparece en la configuración sociopolítica de la subregión, primero vinculado al origen de la conflictividad armada, y, más recientemente, vuelve a emerger en las apuestas y visiones en clave de paz.

Al indagar en la comunidad sobre lo que para ellos significa el desarrollo y la paz, emergen visiones que incluyen miradas donde la paz y el desarrollo no pueden pensarse la una sin el otro, pero también ideas sobre ambos que están relacionadas con el hacer colectivo, donde el trabajo comunitario a través del convite, los espacios para compartir, ser solidarios entre los habitantes de la vereda, sentir el dolor del otro, es lo que les permite como comunidad avanzar y organizarse, y donde la paz además de ser un estado personal se construye de manera colectiva (Conversación grupal, 15 de noviembre de 2020). De ahí el interés de problematizar las nociones de paz y desarrollo.

Así mismo, pese a que el Oriente antioqueño no fue una zona priorizada en los acuerdos de paz de 2016, gracias al enfoque territorial de su implementación -donde se pretende que el desarrollo agenciado desde allí sirva como base para la construcción de una paz estable y duradera- se reforzó más el vínculo entre paz y desarrollo. Lo cual resulta paradójico, pues en diferentes contextos del ámbito nacional ha sido precisamente la implementación e imposición de un modelo de desarrollo una de las causas que ha dado origen a la conflictividad armada (Serje, 2010; García & Aramburo, 2011). Por lo tanto, se hizo necesario indagar por las visiones que la comunidad tiene alrededor de la paz y el desarrollo, tratando de establecer si distan o no del discurso hegemónico sobre estas dos categorías.

En este sentido, se encontró pertinente indagar sobre cómo las intervenciones institucionales y las prácticas comunitarias configuran visiones de desarrollo y paz en la comunidad de la vereda El Tabor, centrándonos en aquellas que tensionan dicha relación y proporcionan elementos argumentativos para la configuración de pazes otras en el país. Para lo anterior, se formularon una serie de preguntas que nos permitieron evidenciar las visiones que subyacen en la comunidad al momento de hacer referencia a la paz y el desarrollo. Algunas de éstas son ¿Qué visiones sobre la paz y el desarrollo se expresan o subyacen en los programas de desarrollo ejecutados en la comunidad de la vereda El Tabor? ¿Cómo la comunidad ha asimilado y/o interpelado dichas visiones?, ¿Cuál y cómo ha sido el nivel de relacionamiento que la comunidad ha venido estableciendo en torno a la paz y el desarrollo? ¿Cómo las prácticas comunitarias han configurado formas de intervención alternas y/o paralelas en la búsqueda del bienestar y de la paz?

Situando el enfoque

La elección teórico-metodológica que orientó el trabajo de investigación/intervención fue la perspectiva decolonial e intercultural. Esta opción se sitúa en la crítica al establecimiento del poder moderno colonial en donde el eurocentrismo impuso los ideales de progreso y desarrollo como paradigmas a través de los cuales se ha nombrado y cosificado el mundo. La perspectiva decolonial e intercultural surge del pensamiento crítico latinoamericano y se alimenta de aportes de pensadores y experiencias subalternizadas de otras latitudes a lo largo de la historia (Gómez-Hernández, 2016) y ubica el origen de la modernidad en el descubrimiento de América, la conquista y la colonización mediante la clasificación racial.

El conocimiento hegemónico conllevó la universalización de la cultura de occidente que sitúa a Europa como el centro del mundo; el eurocentrismo se convirtió así en una postura ideológica que ubica la experiencia de Europa occidental como *el punto cero* (Castro-Gómez, 2010) a partir del descubrimiento y conquista de América. Esto implicó la construcción de una subjetividad moderna superior, en relación con lo no europeo, y determinó la unilinealidad de la historia por la cual todas las sociedades deben transitar en dirección hacia el progreso. En este sentido, las historias no europeas son consideradas inacabadas, inferiores e incompletas (Lander, y otros, 1993; Dussel, 1994; Grosfoguel & Mignolo, 2008). En el marco modernidad/colonialidad “la postulación del conocimiento científico como única forma válida de producir verdades sobre la vida humana, como conocimiento que se crea ‘universal’, oculta, invisibiliza y silencia las otras epistemes” (Walsh, 2005, p. 17), es decir, que se ha subalternizado e invisibilizado otras racionalidades.

Así pues, esta perspectiva cuestiona las formas de la racionalidad moderna que oculta, margina e invisibiliza grupos y pueblos (colonialidad del poder), separará las ideas de los hechos, la teoría de la práctica y el sujeto de aquello que desea conocer (colonialidad del saber), traza el imaginario cultural nor-europeo moderno como una aspiración (colonialidad del ser) y separa al hombre de la naturaleza, estableciendo la superioridad del primero sobre la segunda, sometiéndola a su dominio para el control y la explotación de recursos (colonialidad de la naturaleza).

La producción de conocimiento desde la lógica moderna/colonial ha servido para la producción y reproducción de discursos “autorizados” y “expertos” sobre lo social, que han favorecido y posibilitado la construcción e imposición de imaginarios y visiones del mundo a través de la construcción de supuestos que, de manera explícita, y otras veces más sutil, se instauran como realidad, como verdad, como una historia única. Este reconocimiento no cambia la eurocentricidad o las relaciones de poder, pero sí permite un nuevo relacionamiento a partir del dialogo de saberes y el cambio en los términos de la conversación que establece relaciones más dialógicas y equitativas (Walsh, 2005).

La alternativa decolonial e intercultural se presenta, no como un paradigma, sino como una perspectiva que atraviesa las dimensiones de lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico y lo ético-político (Gómez-Hernández, 2016). En este horizonte, las dimensiones se encuentran relacionadas entre sí y parten de que el conocimiento se encuentra imbricado en las relaciones sociales y la vida misma.

Esta elección teórica y metodológica parte de entender que la intervención es una práctica social que no se restringe ni es exclusiva de los ámbitos institucionales y externos, sino que también puede ser agenciada por las comunidades en diferentes procesos participativos en aras de transformar sus propias realidades (Montero, 2012).

Como ya se advirtió, para el caso del presente trabajo, la investigación se vuelve un pretexto para la intervención y viceversa. Intervención que nació del consenso, así como de la expectativa e interés de la comunidad de generar sentido de pertenencia y fortalecer los lazos comunitarios a partir del reconocimiento y recuperación de su historia. Se trata pues de comprender modos de existencia diversos que configuran las comunidades en su cotidianidad y que les permite subsistir y re-existir pese a las imposiciones de la cultura moderna occidental (Vásquez & Muñoz, 2020).

En clave decolonial e intercultural, lo metodológico es entendido a partir de las relaciones intersubjetivas que se construyen de manera reflexiva y flexible entre quienes participamos del proceso, situados en la experiencia cotidiana, en el ámbito comunitario donde la vida misma es escenario de significación (Ghiso, 2013). La perspectiva decolonial e intercultural posibilita desarrollar la intervención/investigación al margen de las formas disciplinares tradicionales, esto es, desobedecer la metodología (Ortiz & Arias, 2019). Pues apelar a teorías y métodos determinados a priori sería reproducir el modelo moderno/colonial en la producción de conocimiento (Suárez Krabbe, 2011).

Si quisiera ubicar este ejercicio dentro de los cánones tradicionales de la investigación, sin lugar a dudas se trataría de una investigación cualitativa en tanto se trata de la comprensión de un grupo en particular en su marco de referencia (Bonilla & Rodríguez, 1997); está inserta la relación con otros actores, el reconocimiento del otro como portador de conocimiento y la comprensión dialógica en la construcción de significados que los actores tienen sobre su propia vida, como una forma de rescatar la heterogeneidad de la sociedad en su particularidad e historicidad; una producción de conocimiento que está atravesada por normas y valores que se insertan en la vida cotidiana (Galeano, 2014). Y aunque hay apuestas sociocríticas de la investigación cualitativa que interpelan la relación sujeto – objeto y abogan por la flexibilidad de los métodos enfatizando en las experiencias particulares y contextualizadas, muchas de ellas aún se enmarcan en los cánones institucionales modernos manteniendo la división entre el saber popular y el saber experto.

Para el desarrollo de este trabajo se avizoraron tres momentos que no son lineales y se presentan de manera simultánea y en constante relación: Acercándonos – Conversándonos –

Reflexionándonos. El Acercándonos como el momento en el que nos observamos, nos reconocemos en nuestras intencionalidades, acuerdos y en el que se construye la confianza y se teje la amistad. El Conversándonos como el momento en que valiéndonos del lenguaje se posibilita la comunicación a través del diálogo intercultural que surge de manera espontánea, “es un conversar afectivo y reflexivo, sin supuestos, sin expectativas, *sin a priori*, sin condiciones, permitiendo que “el otro” también pregunte y exprese sus emociones, juicios y valoraciones” (Ortiz & Arias, 2019). Y el Reflexionándonos como un momento de sentipensar y corazonar el proceso, que se vale del acercamiento y la conversación para comprender, visibilizar y reconocer saberes y prácticas. Es decir, reconocer otros lugares de enunciación que promueven sentidos de vida y relaciones al margen del establecimiento (Torres, 2019).

Dada la significatividad de la labor que cumplen los comités que integran la Junta de Acción Comunal JAC al interior de la comunidad, la estrategia para el desarrollo de la intervención/investigación fue el *Comité-ando*; específicamente, el comité de deporte, que se reúne el primer domingo de cada mes, fue el espacio primordial para ir acercando-*nos*, conversando-*nos* y reflexionando-*nos*. Desde allí y de manera colaborativa se definieron las estrategias a utilizar para hacer la recuperación de la historia de la vereda. En consecuencia, el *comité-ando* como estrategia de investigación/intervención privilegió el campo relacional y experiencial que se construye en la interrelación de los actores involucrados en el proceso atravesados por la acción y la reflexión, no partió en una dirección prefijada, sino que en el mismo proceso de interacción se eligió el camino a seguir.

La comunidad: entre la paz y el desarrollo

El desarrollo, intrínsecamente relacionado con la civilización y el progreso, aparecen como expresiones de la modernidad en la que subyacen principios homogenizantes, universalistas y eurocéntricos; se imponen visiones del mundo y modos de relacionamiento con los otros y con el entorno a partir de los cuales se objetivaban prácticas e intervenciones en aras de alcanzar el “desarrollo”. Desde esta perspectiva es un estado deseable al que toda sociedad ha de aspirar. El discurso del desarrollo se articula y emerge desde el paradigma de la modernidad, el cual es básicamente un proyecto ideológico donde una de sus principales características es el privilegio del aspecto económico sobre otros aspectos de la vida; es un constructo sociocultural inscrito en el

marco de la modernidad, desde donde se consolidan representaciones sociales, prácticas y relaciones de poder que inciden no solo en la vida de personas y colectivos, sino también en las realidades sociales, los procesos y los contextos que se configuran en el marco de un “mundo global” intervenido y determinado por las lógicas del mercado (Escobar, 2012).

El despliegue del proyecto desarrollista, que ha sido y es la occidentalización del mundo (Latouche, 2009), puso en evidencia las relaciones desiguales entre los países norte-sur, occidente-oriental, así como el recrudecimiento de la pobreza, el impacto al medio ambiente derivado del sistema capitalista basado en la acumulación y el consumo, y una decepción generalizada de la idea de progreso y desarrollo que no es sino el privilegio de unos pocos.

El fracaso del proyecto desarrollista, principalmente en América Latina, dio origen a enfoques más heterodoxos que trataron de desenmarcarse de la linealidad espacio-temporal y el reduccionismo económico del enfoque clásico o convencional y le aparecen adjetivos que buscan incorporar otras dimensiones como las necesidades humanas, el ambiente, la región, entre otros (Boisier, 2003; Múnera, 2007), a los que le subyace aún la idea de alcanzar un mejor desarrollo. Desde el posdesarrollo, se apela a un desarrollo “alternativo” que se plantea en clave de superar el énfasis economicista. Estas concepciones alternativas apuntan a la construcción de un enfoque del desarrollo desde una mirada “integral” que incluye dimensiones como lo político, lo cultural, lo económico, lo territorial y pone énfasis –de acuerdo con Amartya Sen- en las capacidades y agencia de los sujetos en la transformación de sus realidades; proponiendo en últimas un “giro del lenguaje” en pos de la de-construcción de esa mirada totalizante del desarrollo (Sen, 2000). Si bien cuestionan el lugar de enunciación y tratan de visibilizar los grupos subalternos y los conocimientos locales, conservan la idea de desarrollo, otro desarrollo y no una alternativa al mismo (Reverón, 2010).

No obstante -y a pesar del carácter supuestamente alternativo de las acepciones del desarrollo a una escala más local, inclusivo, participativo-, el proyecto desarrollista del sistema capitalista ha cooptado, reinterpretado y adaptado estas propuestas a las lógicas economicistas (Peña, 2001) y ha sido instrumentalizado por los organismos multilaterales y agencias del desarrollo. Esto se explica porque el discurso del desarrollo como expresión de la modernidad/colonialidad se ha instalado y naturalizado, dominando los ámbitos del poder, el conocer y el ser a través de los cuales se ha mantenido y reproducido el orden impuesto por el sistema mundo euro-norteamericano (Gómez-Hernández, 2007; Cuestas-Caza, 2019).

Si algo se ha pretendido imponer como historia única, ha sido el discurso del desarrollo como máxima expresión del capitalismo y del paradigma de la modernidad, pese a las corrientes heterodoxas que buscan darle forma al desarrollo llenándolo de adjetivos y a las corrientes postmodernas que abogan por *otro* desarrollo. Encontramos autores como Arturo Escobar, Gustavo Esteva, Wolfgang Sachs y Serge Latouche, entre otros, que señalan -desde una orilla completamente opuesta- que el discurso del desarrollo no es más que un mito y que los conceptos que lo sustentan no son otra cosa más que la imposición y refuerzo de la visión occidentalizada del mundo y, por lo tanto, es necesario abandonar la idea de desarrollo. Proponen la descolonización del imaginario en el cual la economía es el centro de las relaciones sociales y, en su lugar, apelan a la construcción de una sociedad alternativa donde lo económico sea un aspecto más del entramado y las relaciones sociales, basándose más en la reciprocidad que en el mercado; se trata pues de descolonizar y desmercantilizar las mentes y la vida (Sachs, 1996).

La crisis planetaria generada por el sistema económico neoliberal ha hecho que los defensores del proyecto moderno se reinventen nuevas formas de desarrollo a partir de múltiples adjetivaciones. El desarrollo también emerge en lo local y comunitario como dispositivo para mejorar las condiciones de vida de las personas. Es así como la paz -en tanto componente del proyecto hegemónico moderno liberal- se ha convertido también en el pretexto para mantener y justificar el proyecto desarrollista, en el cual la paz se logra gracias al desarrollo.

De acuerdo con Ilich (2008), la manera como se relaciona la paz y el desarrollo pone en evidencia que los efectos esperados son contrarios a las promesas de una vida mejor y por lo tanto es urgente y necesario desvincular la paz del desarrollo y dejar de promover este último como camino necesario para alcanzar la paz, ya que el “el desarrollo impone pues inevitablemente la *pax económica* en detrimento de todas las formas de la paz popular” (Ilich, 2008, p. 435).

La paz, al igual que el desarrollo, ha pasado por diversas acepciones a lo largo del tiempo. Las comprensiones y estudios sobre la paz, en su esfuerzo de entender los diferentes conflictos en la sociedad, también han transitado por diferentes escuelas de pensamiento. Entre ellos se destaca la polemología y la violentología que devienen de los periodos de postguerra (primera y segunda guerra mundial y la guerra fría), orientadas a la contención y prevención de escenarios bélicos a nivel internacional y la resolución de conflictos (Jaime-Salas, 2019) a los que le subyace la ideología del proyecto civilizatorio mediante la concepción de una democracia moderna/liberal-capitalista (Sandoval-Forero & Capera, 2020). Es así como se imponen narrativas sobre la paz a

través de protocolos, consensos y acuerdos emanados del Norte-Global con la creación de institutos y centros de pensamiento especializados sobre la paz que también son el correlato del saber/poder del sistema moderno/colonial.

En consecuencia, las narrativas de la paz se basan en relaciones binarias paz negativa/paz positiva, paz imperfecta/paz perfecta, y ha sido abordada desde diferentes paradigmas y enfoques que incluyen la resolución de conflictos, la construcción de paz, la no violencia, la cultura de paz, entre otras. La paz liberal hegemónica está fundada en las representaciones discursivas asociadas al patrón mundial de poder, esto es, al uso legítimo de la fuerza, el advenimiento del Estado-nación, la supremacía de la razón, la consolidación de los principios liberales, la democracia y la economía de mercado.

En este sentido, la paz ha sido entendida como el pacto que pone fin a la guerra; su estudio se ha enfocado en definirla e idealizarla desde una visión positivista, hegemónica y occidentalizada que lleva implícito la necesidad de ejercer el control, el sometimiento y la seguridad por parte del Estado (Sandoval-Forero & Capera, 2020); es decir, el Estado es el responsable del mantenimiento del orden y de instaurar la paz. Es así como las intervenciones –militares, sociales y humanitarias– para promover la paz se han convertido en la instrumentalización de ésta para posibilitar el despliegue de los intereses del capital transnacional y el sistema neoliberal.

Así mismo, en las investigaciones sobre la paz se han configurado dos tendencias que, a la larga, han posibilitado la reproducción de la visión occidentalizada del mundo. A saber, una corriente que paradójicamente centra su atención en los repertorios de violencia más que en la misma paz; y la otra corriente que ha fijado su análisis en la resolución de conflictos. Al respecto (Vásquez Arenas, 2020) señala cómo dichas corrientes han invisibilizado formas cotidianas de relacionamiento pacífico y propone el término paz(es) para pensar la paz en clave de paz y no de guerra. En este sentido, es que se propone descolonizar los estudios de la paz.

La paz popular, la paz de la gente simple (Illich, 2008), configura acciones, emociones y narrativas que tienen lugar en los ámbitos comunitarios al margen de la visión hegemónica y occidentalizada sobre la paz. El desarrollo y más recientemente la paz, constituyen poderosos dispositivos discursivos, sociales, culturales, tecnológicos e institucionales para la reproducción y mantenimiento del patrón mundial de poder. Así pues, en clave decolonial e intercultural, las interpelaciones al desarrollo y la paz confluyen en lo comunitario. Se trata de resignificar el sentido comunitario y potenciar las relaciones y sentidos de vida que allí se tejen; lo comunitario, que desde

la lógica hegemónica se ha considerado premoderno y se ha reducido a lo geográfico, instrumental y a lo carente. O, por el contrario, se ha reafirmado una idea romántica e idealizada de la comunidad.

Es pues es en la escala local -en el ámbito de lo comunitario y de manera situada- donde pueden emerger otras maneras, otras historias, construidas comunitaria y colaborativamente, de forma creativa, que puedan trascender lo estrictamente económico y resignificarse, pese al desarrollo (Esteva, 1996). Se trata así de comprender los repertorios que tienen las comunidades gracias al acervo cultural –que no está exento de conflicto- y a las relaciones que se tejen en su interior para transformar los conflictos y establecer una convivencia pacífica. Maneras de sobrevivir y de re-existir de los subalternizados, marginalizados, estigmatizados y excluidos a pesar del Estado y del mercado.

En este horizonte, lo comunitario es el reconocimiento de una forma concreta y una posibilidad humana de existencia; a las prácticas y relaciones que se tejen en este ámbito, los pueblos ancestrales de Oaxaca las han denominado *comunalidad* (Esteva, 2015; Esteva & Guerrero, 2018) que hace referencia a la construcción colectiva -siempre ligada a la experiencia en un contexto determinado- mediante la cual los miembros se organizan y asumen roles en un trabajo colaborativo, privilegiando lo común en aras de garantizar la reproducción material y simbólica de la vida más allá de las lógicas que impone el Estado y la acumulación de capital (Gutiérrez, 2018a).

El camino del informe

Este trabajo intenta hacer una descripción contextual, histórica y etnográfica a partir de ubicar la experiencia de los habitantes de la vereda El Tabor con relación a una escala geográfica mayor en cuyo contexto la transición del conflicto a la paz está permeada de manera transversal por las intervenciones institucionales para el desarrollo y la paz.

La manera como está estructurado y ordenado este informe obedece a una intencionalidad propia de la elección teórico-metodológica para el abordaje de este ejercicio. En este sentido, el capítulo 1, “El *Comité-ando* como estrategia de investigación/intervención: memoria metodológica”, ubica la trayectoria de los sujetos con quienes se anduvo este camino y nos posiciona de manera activa, participativa y reflexiva en el proceso de investigación/intervención reconociendo en ellos sus saberes, experiencias y expectativas. Pero además da cuenta del resultado

del proceso de intervención a partir de la reconstrucción de la historia de la vereda y los productos contruidos colectivamente.

El capítulo 2 “El lugar de la vereda El Tabor en el metarrelato del Oriente antioqueño”, no sólo es el contexto de la investigación/intervención, sino que posiciona la microhistoria de la vereda en el metarrelato regional sobre el cual se han construido representaciones hegemónicas que invisibilizan acciones y prácticas comunitarias. Dichas prácticas también configuran una territorialidad que coexiste en la región y que tienen una materialidad en un lugar concreto (la vereda) y con un grupo humano específico (una comunidad campesina). Aunado a esto, el capítulo siguiente (3) “*Campesino a mucho honor: trayectorias por el reconocimiento de la subjetividad campesina*”, pretende situar y entender en su carácter histórico e ideológico la construcción de la subjetividad campesina y, con relación a ésta, dar respuesta a la emergencia que sobre lo campesino devino en el momento del *comité-andó*. El reconocimiento de estas trayectorias le da sentido al capítulo 4 “*Éramos ricos y no lo sabíamos y nosotros pensando que éramos pobres: el modo de vida campesina como forma de dignificar la vida y configurar pazes otras*”, aborda la noción de modo de vida campesina y sus dimensiones: territorial, político-organizativa, cultural y productiva. A través de una narración descriptiva y etnográfica, se presentan estas dimensiones en la historia de la vereda El Tabor, destacando las prácticas cotidianas que ocurren en el ámbito comunitario y que van más allá de la racionalidad económica. Estas prácticas no solo contribuyen a vivir bien, sino también a crear y recrear la paz en la cotidianidad. Estas prácticas, sustentadas en el modo de vida campesina, aportan elementos que dan sentidos otros a los discursos hegemónicos de la paz y el desarrollo. La identificación de dichas prácticas es lo que permite en el siguiente capítulo (5) “Las prácticas comunitarias como formas de *inter-versión*”, plantear que no sólo desde los ámbitos institucionales se interviene y que incluso se presenta hibridez entre la una y la otra de manera intencionada, donde los sujetos no se quedan en un rol pasivo, sino que resignifican y acomodan las intervenciones a su favor apelando a la noción de *inter-versión*; también se analizan las intervenciones realizadas en la vereda y cómo éstas configuran visiones de paz y desarrollo.

El capítulo 6 “Para seguir conversando”, más que conclusiones se propone reflexionar sobre diversos asuntos relacionados con la investigación y la intervención en clave decolonial e intercultural que permita enriquecer la discusión. Cabe anotar que la narración de este informe toma como hilo conductor la historia de la vereda; apelando a la metáfora del texto *El peligro de*

la historia única (Adichie, 2018), trata en todo momento de visibilizarla y darle un lugar a dicha historia.

Finalmente, y no menos importante, es preciso aclarar que los nombres de las personas se conservaron tal cual, por decisión de ellos, así como la autorización para incorporar en el informe sus testimonios e imágenes a lo largo de todo el trabajo, tal como se indica en el Anexo 1 (consentimiento informado) y Anexo 2 (memoria de trabajo en campo que recoge los acuerdos) de este informe.

1 El comité-ando como estrategia de investigación/intervención: memoria metodológica

En coherencia con el posicionamiento y el lugar desde el cual se abordó la investigación e intervención fue necesario también ubicar mi lugar dentro del proceso. Para ello se ahondó en la metáfora de *andar el camino*; un camino que no es lineal y que se recorrió en espiral, que va y viene de manera reflexiva y sentipensada. La idea de escribir este capítulo en primera persona es también resultado de este proceso reflexivo, pues me permitió situarme ante el grupo con quien anduve este camino. Comprendí que es vano pretender partir de un punto cero y que no quiero ni deseo despojarme de las experiencias y circunstancias que, por un lado, me llevaron a tomar la decisión de hacer el trabajo con la comunidad de El Tabor, y que, por otro lado, hacen parte del equipaje que me acompaña y que finalmente se convirtió en las condiciones de posibilidad para la realización de este trabajo.

La perspectiva decolonial e intercultural surgió como una alternativa para abordar las diferentes dimensiones ontológicas, epistemológicas, ético-políticas y metodológicas en la ejecución de la propuesta de investigación/intervención. Estas dimensiones están interconectadas, ya que el conocimiento está intrínsecamente ligado a las relaciones sociales y a la vida misma. Por lo tanto, en el desarrollo de este trabajo privilegié momentos relacionales para fomentar el diálogo intercultural y llegar a acuerdos con los participantes, en lugar de seguir una dirección prefijada. De esta manera, se caminó mientras se avanzó hacia un horizonte de sentido compartido configurando todo lo que fue el trabajo y la situación a abordar.

A continuación, describo esos momentos que no se corresponden en absoluto a un proceso lineal; al contrario, fueron momentos que se presentaron de manera simultánea y que dan cuenta de la construcción de dicho proceso.

1.1 El momento de acercarnos

1.1.1 De camino a Granada. Una nota necesaria

Hace nueve años aproximadamente llegué a trabajar en el Oriente antioqueño. Me llené de expectativas ya que para la época se adelantaban procesos sociales locales en los municipios de Granada y San Carlos alrededor de la memoria de las víctimas y procesos de perdón, retorno,

organización y resistencia de algunos movimientos sociales que se convirtieron en referente nacional, atravesados por un ambiente favorable en el marco de los inicios de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC-EP.

La primera vez que llegué a Granada me quedé en silencio por mucho rato. En tan solo una hora y cuarto había llegado de mi casa al pueblo y me costaba creer que en un lugar tan cerca a Medellín haya ocurrido todo lo que pasó. Hasta hoy todavía, cada vez que viajo a Granada, me pregunto cómo fue que esto pudo ocurrir. Hasta el momento la respuesta que encuentro es que en el imaginario de muchos -incluido el mío- el conflicto sucedía en lugares lejanos; alteridades ajenas y distantes de una realidad privilegiada y por la cual seguramente se ha naturalizado la violencia que ha caracterizado el conflicto en nuestro país.

Una de las actividades principales por las que iba a Granada era realizar con las cinco organizaciones que participaban del Programa de Desarrollo Comunitario -PDC- de ISAGEN las reuniones mensuales de seguimiento a los procesos formativos de la escuela y a la formulación y ejecución de los proyectos de desarrollo comunitario. Allí pude conocer a los líderes de las comunidades con los que poco a poco fui construyendo relaciones de confianza, solidaridad y amistad.

A los pocos meses de iniciar las labores en la zona, con el argumento de que las condiciones de seguridad habían mejorado considerablemente en los últimos años y que los procesos de desminado humanitario avanzaban satisfactoriamente, sugerí que los encuentros con las comunidades los dejáramos de hacer en el casco urbano, como se había acostumbrado, y que el personal de la empresa y del operador del PDC pudiéramos ir a cada vereda y así adelantar un mejor proceso de seguimiento. La propuesta fue aceptada y de ahí comenzó el recorrido por las veredas El Jardín, La Cascada, Los Medios, Reyes y El Tabor.

La iniciativa fue recibida con mucha alegría por las personas que participaban del PDC pues años anteriores debían ir hasta las instalaciones de la central Calderas en el municipio de San Carlos o incluso a algún lugar en Rionegro. Ellas siempre iban donde la empresa les indicara. Ahora éramos nosotros quienes íbamos a su territorio. La selección de la vereda anfitriona para hacer el taller se volvió motivo de carrera entre las comunidades, la ventaja en Granada era que, por ser sólo cinco veredas, algunas fueron visitadas varias veces.

La dinámica para los encuentros consistía en que la vereda anfitriona se encargaba de presentar al resto su comunidad, sus costumbres y prácticas; también era la encargada de

suministrar la alimentación para el encuentro, lo que le significaba el ingreso de algunos recursos para la organización. Cada encuentro se convirtió en un motivo de fiesta y los repertorios para el recibimiento iban desde coplas, trovas, letanías, hasta bailes, comidas típicas, juegos de fútbol y presentaciones de los niños y niñas de la escuela. Para mí, estos espacios se convirtieron en un bálsamo frente a la carga administrativa que tenía. Podía observar cómo se esmeraban por preparar el encuentro con la participación de casi toda la comunidad, el orgullo de contar quiénes eran y la dignidad de saberse habitantes de un territorio y pertenecientes a una comunidad que resistió la guerra y que lucha cada día por vivir en paz.

Creo que ese cambio en los términos del relacionamiento posibilitó generar cercanía, no sólo entre quienes veníamos de afuera, sino también entre los mismos miembros de las comunidades puesto que muchos ni siquiera conocían las veredas de su propio municipio. En este proceso se tejó relaciones de amistad y cariño. Especialmente con Albeiro de Jesús López, presidente en ese entonces la de Junta de Acción Comunal -JAC- de la vereda El Tabor, y su esposa Alba Irene Giraldo, quien además acompañó activamente muchos procesos organizativos de la vereda.

El ciclo de acompañamiento con las organizaciones comunitarias terminó en el año 2019, a excepción de la vereda Los Medios que aún se encuentra en el proceso. En uno de los talleres en el 2017, Irene y Albeiro se despiden del grupo porque tomaron la decisión de ir a vivir a Cali con sus hijos, lugar al cual habían emigrado cuando en el año 2000 se vieron obligados a desplazarse por la violencia. En medio de abrazos y mucha nostalgia nos despedimos, Irene con la promesa de seguir apoyando el proceso desde Cali y sí que lo hizo. En año y medio que estuvieron por fuera de Granada, mantuvimos algún contacto telefónico o por WhatsApp e incluso encuentros *casuales* durante las vacaciones de ellos en el quiosco del parque.

A mediados del 2018 me llamó Irene a decirme que se regresaban para El Tabor, Albeiro estaba trabajando y le iba bien pero no estaba feliz, le hacía falta su “terruño” y así regresaron, a su casa, a su tierra y terminaron el ciclo en el programa que, a causa de la pandemia, sólo fue posible clausurarlo en junio de 2023. Y así se encontraron los caminos de Irene y Albeiro con el mío.

1.1.2 De camino a la academia

En el marco de la pandemia y ante los cambios abruptos por lo que estaba atravesando en el encierro y la alteración de la cotidianidad, decidí presentarme a la maestría en intervención social con énfasis en posconflicto y construcción de paz. Teniendo en cuenta el énfasis de esta, preparé una propuesta que buscaba analizar los procesos de intervención, o mejor, sobre intervención, en la cuenca del río Calderas, una vez se da el proceso de desescalamiento del conflicto armado y se inician una serie de programas para la población en el horizonte de la construcción de paz. Si bien allí había temas que me han interesado en el ámbito académico, como el desarrollo y los procesos comunitarios, había algo en la propuesta que se limitaba mucho a un análisis institucional y no me sentía totalmente conectada con ella.

Una vez decantada la apuesta de la maestría en intervención social, desde enfoques críticos y con la participación de los sujetos en los procesos de intervención/investigación, me resultó necesario replantear la propuesta. Teniendo ya asignado el asesor, su primera recomendación fue hacer un acercamiento con la comunidad con quien se haría el trabajo. Bajo esta premisa me puse en contacto con Irene y Albeiro y en una primera conversación sobre la posibilidad de hacer el trabajo allí, y con ellos, su respuesta fue “dígame que información necesita, yo le consigo la información y se la mando para que vaya adelantando”. Le agradecí a Irene toda su disposición y le pedí un poco de paciencia para tener más claridad sobre qué íbamos hacer. La respuesta de Irene pone en evidencia la forma como se ha naturalizado la producción de conocimiento, que ubica a las comunidades y grupos sólo como informantes de quienes se extraen los datos y al investigador con la legitimidad y en un nivel jerárquico de experto para procesar, analizar la información y emitir conceptos y reflexiones sobre la manera en que viven y piensan las comunidades.

1.1.3 Y de la academia a la vereda

Siguiendo las recomendaciones del asesor y ante la invitación que reiteradamente me habían hecho Irene y Albeiro para ir a El Tabor, decidí hacer visita de un fin de semana en compañía de mi familia. Una vez allí, pude contarles con más detalle de qué se trataba la maestría, mi interés de investigar sobre el desarrollo y la construcción de paz en la vereda, ante lo cual siempre hubo apertura. Como era domingo y recién la comunidad estaba nuevamente reuniéndose, luego de

varios meses de cuarentena, fuimos a la escuela donde tradicionalmente se juntan las personas para compartir, comer, jugar fútbol y tomar cerveza.

En este primer acercamiento pude indagar por temas que fueran de interés para la comunidad -lo que algunos llamarían diagnóstico rápido participativo-; encontré temas recurrentes alrededor de la participación de los jóvenes en los asuntos de la comunidad, la pérdida de valores, la necesidad de fomentar el sentido de pertenencia y el valor de la identidad campesina. Además, surgió una propuesta de hacer la historia de la vereda como una forma de generar sentido de pertenencia y motivar la participación de la comunidad.

También indagué por lo que entienden por comunidad, paz y desarrollo -temas que son de mi interés-; al respecto hubo unanimidad en referirse a la comunidad como unión, solidaridad, convite, participación, deporte y trabajo por el bien común. Respecto al desarrollo, encontré diversas opiniones, para unos es avanzar y lograr cosas para el bien común y que haya emprendimientos y sostenibilidad de los proyectos productivos, hubo alguien que indicó que la paz era una condición necesaria para el desarrollo de la comunidad y señaló que la falta de condiciones mínimas de bienestar de la comunidad podría desencadenar más violencia y conflicto. Finalmente, frente a lo que entendían por paz hacían referencia a que correspondía a un estado personal, a estar en paz con Dios, con los vecinos, a la posibilidad de vivir tranquilos en la vereda y que ese estado se construye entre todos comunitariamente (Conversación grupal, 15 de noviembre de 2020).

1.1.4 Y de la vereda a la propuesta

Con los insumos de este acercamiento comencé a trabajar en la nueva propuesta. Por un lado, esta debía enmarcarse en el énfasis de la maestría: posconflicto y construcción de paz. La vereda El Tabor es un escenario donde el desarrollo fue concomitante al origen de la conflictividad armada, así como escenario de implementación de programas de construcción de paz. Y por el otro, la propuesta de investigación/intervención debía responder a un interés de la comunidad.

En este sentido, una vez teniendo claro el contexto y habiendo problematizado las categorías de desarrollo y paz en un contexto comunitario permeado por el conflicto armado, me resultó pertinente indagar por las visiones que la comunidad tiene alrededor de estas categorías y cómo estas pueden contribuir o no a la construcción de pazes otras.

Hasta aquí estarían incorporadas mis inquietudes académicas. Ahora el reto consistía en integrar el interés de la comunidad a la propuesta de investigación/intervención. De esta manera, y teniendo como referencia la perspectiva decolonial e intercultural (más que como paradigma, como una opción y un horizonte de sentido que da lugar a otras grafías y establece relaciones dialógicas), fue posible incorporar las expectativas de la comunidad, las cuales se concentraron en reconstruir la historia de la vereda. Así pues, mis expectativas académicas y el interés de la comunidad, más que un problema en sí, se convirtieron en un evento situado, en una situación en un contexto específico, que sirve como pretexto para “pensarnos y revelarnos a nosotros mismos habitando el mundo y objetivando, no para que ese ‘nosotros’ sea nuestro objeto, sino para que en todo caso reconozcamos las relaciones en las que somos ya sujetos” (Haber, 2011, p. 8).

Como puede advertirse, en el andar de este camino, la situación se configuró a partir de la conversación que implicó no sólo dar voz sino escuchar. La conversación genuina y espontánea no busca comprobar nada, más allá de la posibilidad de transformar-nos en relación con el otro. Los acercamientos entre mis intereses académicos y los de la comunidad fueron posibles a través del enfoque decolonial y el diálogo intercultural, esto es, un acercamiento dialógico de saberes, consistente en la conversación de diferentes racionalidades, a través de la co-construcción y compartencia de saberes (Pérez, 2018).

Para terminar de decantar la propuesta, se realizaron varias visitas que además sirvieron para acercarnos más y construir confianza; de allí, por iniciativa de algunos miembros de la comunidad, surgió la idea de que el trabajo se articulara al comité de deportes que está adscrito a la JAC, así que una de mis primeras actividades fue apoyar al comité en la realización de un torneo relámpago y entender cómo funcionaba y operaba el comité. Entendí la relevancia e importancia del comité para la comunidad pues es el encargado de dinamizar y fomentar la integración de la comunidad a través de la práctica del deporte.

Figura 1

Visita de aproximación.

**Figura 2**

Acompañamiento torneo relámpago.

**1.2 El momento del comité-ando**

El comité de deporte es uno de los 5 comités -junto con los de educación, obras, celebraciones y fondo rotatorio-, en los que está organizada la JAC de la vereda El Tabor. El propósito del comité de deporte es promover y organizar encuentros deportivos, realizar el inventario de los recursos y escenarios existentes y gestionar ante diferentes entidades el apoyo para financiar la actividad deportiva dentro de la comunidad. El comité mantiene una actividad permanente a través de reuniones mensuales que se celebran el primer domingo de cada mes a las 3:00 p.m. en la sede de la JAC, ubicada en la escuela de la vereda. Cuando se inició el trabajo, el comité estaba conformado por nueve personas: Alcides de Jesús Quintero, María Lucelly Giraldo,

Yessica Liliana Quintero, Yeni Marisol Quintero, Luz Mery Ocampo, William de Jesús Arias, Brahian Alejandro Quintero, Claudia Milena Aristizábal y Alba Irene Giraldo.

Las reuniones periódicas tienen un orden del día que inicia con la oración, llamado a lista y verificación de los asistentes, lectura del acta anterior, presentación de informes, aporte de cuota de los integrantes del comité por un valor de 500 pesos, proposiciones y varios, y “la sorpresa”; esta última consiste en que algún miembro del comité lleva un regalo sorpresa y al finalizar la reunión el que desee puede inscribirse, o a los miembros de su familia, con un aporte de 200 pesos que quedan para los fondos del comité, el regalo sorpresa es por lo general artículos para el hogar. Luego de concluir la reunión, los miembros del comité suelen formar equipos para jugar partidos en la cancha, como todos los domingos. El comité cuenta con un grupo de WhatsApp, del cual desde el 2020 hago parte, con el fin de coordinar, convocar o compartir información relevante para la gestión del comité y del proceso de investigación/intervención.

Desde noviembre de 2020 hasta junio de 2023 se realizaron alrededor de 23 encuentros con la comunidad de El Tabor que incluyeron los acercamientos iniciales y la participación formal en las reuniones ordinarias del comité, así como en las actividades que se programaron y ejecutaron desde allí y la socialización del proceso con la comunidad. La constancia de mi participación que, aunada a las dinámicas propias del comité, posibilitó no solo la realización del trabajo objeto de este informe sino también cumplir las expectativas de la comunidad frente al deseo de reconstruir su historia y movilizar la participación comunitaria.

1.2.1 El tiempo de la coordinación

En la primera reunión formal del comité se dejaron claras las intencionalidades y responsabilidades de las partes. También se hicieron unos acuerdos éticos para el desarrollo del trabajo. De mi parte, aclaré el interés de indagar por las visiones que la comunidad ha construido alrededor de la paz y el desarrollo y su relación con las intervenciones que se han llevado a cabo en la vereda. La estrategia para poder hacer dicha indagación fue reconstruir la historia de la vereda a partir de distintos dispositivos concertados de manera colectiva con el comité de deporte, que a su vez sirvieran para fomentar la participación comunitaria. Esta estrategia recogía entonces la expectativa de la comunidad por lo que se hizo un pacto para colaborar en ambos propósitos, contribuyendo con la facilitación, participación y compromiso de las partes. Claramente la

responsabilidad de hacer el informe producto del trabajo estaba bajo mi responsabilidad, sin embargo, muchos apartados fueron revisados y convalidados con los miembros del comité.

En cuanto a los acuerdos se partió del reconocimiento de otros sentidos de vida y la amistad que se estableció a partir de la solidaridad, el respeto y la identificación de los lugares desde los cuales nos situamos. Los acuerdos fueron los siguientes:

- Reconocer y visibilizar el conocimiento, las expectativas y emociones de las personas que participan en el proceso de investigación/intervención.
- Enfatizar en el conocimiento práctico que emerge en la comunidad en aras de fortalecer o recuperar sus vínculos sociales y comunitarios.
- Vincular la investigación/intervención con la producción de la vida en común para buscar creativamente procesos de interacción que beneficien a todas las personas participantes.
- Respetar la voluntad de las personas participantes de continuar o abandonar el proceso de investigación/intervención, así como si desean que se publique o no los datos o materiales concernientes a su participación.
- Respetar las formas como las personas deseen nombrarse.
- Reservar un espacio de devolución de resultados y de convalidación de estos en presencia de la comunidad.
- No perder de vista que el hecho de compartir y de cooperar solidariamente en un proceso de investigación/intervención es también motivo de alegría y festejo; la alegría y el festejo de una vida dignificada a través de la unión y la solidaridad.

Adicionalmente, se diligenció un consentimiento informado, el cual se adjunta en el Anexo1, para el manejo de la información, imágenes, audios y video, conforme al tratamiento de la información y protección de datos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes.

Figura 3*Formalización de la participación en el Comité*

La dinámica acordada para el trabajo era mi vinculación y participación formal en las reuniones del comité de deporte realizadas cada mes; la participación fue constante, excepto por algunos meses en que no fue posible asistir, ya fuera por compromisos familiares, porque se acordó su no realización o por condiciones externas que no lo permitieron. De esta manera me involucré activamente en el funcionamiento del comité y en cada reunión se acordaron diversas actividades y en la reunión siguiente fuimos evaluando, revisando y planeando otras.

1.2.2 El tiempo del trabajo

Con miras a lograr los objetivos propuestos, el trabajo en el comité se concentró en dos líneas. Por un lado, acompañar y apoyar las labores propias de éste consistentes en promover los encuentros deportivos, que es lo que el comité ha venido realizando en los últimos años pero que incluyó además las actividades que de manera conjunta se fueron concertando para motivar la integración y la participación de la comunidad. Por supuesto, estos espacios fueron fundamentales para generar confianza, conocer a fondo la dinámica de la comunidad y recuperar información valiosa tanto para la historia como para la investigación. De estos encuentros, se dará cuenta en el apartado *el tiempo del goce y el disfrute*.

Por otro lado, generalmente en los mismos espacios del comité, se propiciaron momentos de trabajo orientados a generar y recopilar información que aportara elementos para la recuperación de la historia y responder las preguntas de investigación. Es así como se realizaron ejercicios de

espiral de la memoria, línea de tiempo, cartografía social, mapa de actores e intervenciones y recorrido territorial. Así mismo, se participó en calidad de observadora en una molienda y se realizó la caracterización socioeconómica de las familias. Esta última actividad se inició con una familia y posteriormente se complementó con la participación de los miembros del comité. Además, esta información sirvió de insumo para asuntos internos de la JAC.

Figura 4

Retroalimentación de la chocolatada con una espiral de la memoria.



Figura 5

Retroalimentación sancocho y paseo al río.



Para la realización de cada una de las actividades se hizo una distribución de roles y responsabilidades. Así, hubo quienes se encargaron de hacer compras, otros de la logística, otros de preparar la comida y otros de venderla cuando había torneos o festivales. Como se anotó más arriba, en cada comité se hizo una retroalimentación y valoración de la actividad anterior. Esta

estrategia fue acertada porque, por un lado, la información obtenida iba siendo contrastada y completada y, por el otro, porque permitió ir construyendo el camino para orientar y desarrollar el trabajo.

En consecuencia, esta apuesta *no-metodológica*² resultó siendo coherente con el enfoque del trabajo en clave decolonial e intercultural en tanto no hubo un diseño a priori, dando lugar a la emergencia espontánea de asuntos que son relevantes para la comunidad, así como la mejor manera de abordarlos. De este modo es como intenté despojarme del control que exigen los métodos disciplinados para dar lugar a la emergencia de situaciones que, en el marco de la conversación, son objeto de interés para la comunidad y para mí, pues “en la investigación suceden cosas en los márgenes de nuestra mirada, a las cuales sólo podríamos prestar atención si desviamos nuestra atención hacia lugares distintos de los previstos” (Haber, 2011, p. 13).

En este sentido, a partir de los insumos de cada encuentro fuimos reconstruyendo la historia. Advertimos rápidamente que concluir con un documento escrito no era suficiente ni lo más conveniente para socializar con la comunidad que no está tan habituada a la lectura. Listamos una serie de propuestas como cuentos, cartillas, novela gráfica y un video. Una de las integrantes del comité sugirió contactar a un profesor de comunicaciones quien impartió un taller a la comunidad a través con TEJIPAZ³. De esta manera, Edgar Romero se vinculó al proceso y desde su saber de narrador audiovisual comenzó a acompañarnos en los diferentes encuentros capturando imágenes, haciendo diferentes registros y entrevistas.

Así mismo, en el desarrollo de las diferentes actividades, particularmente en una de las celebraciones del día de la familia y el campesino, pude establecer un contacto directo con la docente de la escuela, quien estaba al tanto del proceso por los padres de familia. La docente encontró el trabajo pertinente y acordamos con ella y el comité hacer un taller con los niños y las niñas para trabajar con ellos la historia de la vereda e incorporar su visión a ésta. En este mismo evento, y dada la presencia institucional, se encontró oportuno adelantar algunas entrevistas con los actores institucionales.

² La no-metodología Payanesa es la propuesta de Alejandro Haber, que adopta una perspectiva decolonial y busca cuestionar la metodología convencional al abandonar las certezas de la investigación disciplinada. “La 'investigación indisciplinada' transforma un problema de investigación en una situación que nos invita a reflexionar y cuestionar nuestra existencia en el mundo, sin objetivar a ese 'nosotros' como un nuevo objeto de estudio. Más bien, nos lleva a reconocer las relaciones en las que ya somos sujetos” (Haber, 2011, p. 8).

³ TEJIPAZ es una organización local que trabaja por el desarrollo económico, la paz, el comercio justo y el fortalecimiento de la economía local a partir de acompañamiento a las familias víctimas del conflicto armado

Simultáneamente, de la participación en cada encuentro se construyó una memoria que se adjunta en el Anexo 2 y en la que se recogió los temas tratados, el avance del proceso, los responsables, observaciones y reflexiones propias respecto al trabajo y un registro fotográfico. Toda esta información se convirtió en un diario de campo. También algunos de los encuentros fueron grabados y transcritos, así como las diferentes entrevistas que se hicieron en video. En todo caso, mucha de la información para la elaboración de este trabajo también surgió de la conversación espontánea no sólo con los miembros del comité sino con personas de la comunidad y visitantes de la vereda.

Figura 6

Vinculación de Edgar Romero al proceso



Figura 7

Entrevista Pablo Enrique Giraldo (qepd)



1.2.3 El tiempo del goce y el disfrute

Uno de los acuerdos con los miembros del comité fue hacer de los espacios para el desarrollo del trabajo momentos también para disfrutar, gozar y celebrar la vida. Por supuesto que estos encuentros también fueron intencionados desde el comité para fomentar la participación y la integración comunitaria.

Durante los dos años y medio de trabajo con la comunidad, se acompañó y se participó de la logística de cuatro torneos interveredales y/o relámpago. Sin duda la práctica deportiva en El Tabor va más allá de la actividad física y se vuelve en el hilo invisible que teje la convivencia y construye lazos de unión. En la cancha, las diferencias se desvanecen, dejando espacio para el respeto, la colaboración y el apoyo mutuo. Por fuera de la cancha, la comunidad espectadora encuentra espacio para socializar, compartir y divertirse, incluso aquellos que no gustan del fútbol. Los torneos convocan la participación de los habitantes de las veredas vecinas, de la cabecera municipal y de las colonias granadinas de Medellín y Cali, generando sentido de pertenencia y arraigo por la vereda. Ganar un partido en estos escenarios se vuelve un motivo de orgullo para el equipo o la vereda que lo logre. Cuando se realizan los torneos, el comité cumple una gran labor de coordinación y logística para que todo salga bien, desde gestionar el arbitraje hasta proveer la alimentación.

No siempre los juegos en la cancha se dan en el marco de torneos. Independiente de si estos se realizan o no, siempre hay personas, grandes y chicos, dispuestas a armar un picado e improvisar un juego, y espectadores alrededor de este que hacen que las visitas los domingos y los lunes a la escuela sean sagradas y motivo de goce.

Figura 8

Espectadores torneo.



Figura 9

Partido torneo relámpago.



La primera actividad, y de las más significativas durante el proceso, fue la chocolatada “Recuperemos nuestra historia”. En ella participamos alrededor de 60 personas y en torno al fuego se recrearon las historias en torno al poblamiento y gestiones para dar origen a la vereda; el desarrollo de esta actividad se dio de manera espontánea y las personas tomaron la palabra para contar lo que quisieran y afloraron las situaciones vividas durante el conflicto y varias anécdotas alrededor de este hecho que generaron emociones de tristeza y dolor. Esto creó un espacio de catarsis donde muchas personas pudieron poner en la escena pública sus experiencias, muchas desconocidas por los vecinos propiciando reconocimiento y empatía. Pero lo que fue verdaderamente significativo fue que en su narración de manera colectiva ellos mismos comenzaron a dar cuenta de los repertorios con los que como comunidad cuentan para enfrentar situaciones adversas, como la solidaridad, la reciprocidad y el sentido de pertenencia que los mantiene con ganas de permanecer en su territorio pese a las adversidades. Ese reconocimiento colectivo también fue muy significativo porque despertó emociones de orgullo y dignidad.

Otra de las actividades que fue motivo de fiesta y de goce fue el paseo al río Tafetanes, al lugar conocido como Charco Vueltas. Este evento estuvo enfocado en recuperar actividades tradicionales que por distintos motivos han ido quedando relegadas. Entre todos preparamos el sancocho, tiramos charco y jugamos un partido de amigos y enemigos que fue motivo de diversión y risas. El paseo contó con una participación de 30 personas, no fue tan concurrido como la chocolatada porque se realizó en periodo de vacaciones y muchos se encontraban por fuera de la vereda.

Figura 10

Chocolatada recuperemos nuestra historia



Figura 11

Paseo al río Tafetanes sector Charco Vueltas



También realizamos una caminata “donde queríamos conocer los paisajes (..), donde estuvimos recorriendo gran parte de la vereda” (Y.L. Quintero, comunicación personal, agosto 14 de 2022). Este recorrido se convirtió en el pretexto para conocer y reconocer la vereda, sus paisajes, sus límites e infraestructura, muchos no la conocían en toda su extensión por lo que fue muy revelador para algunos apreciar la belleza de la vereda. El acompañamiento de los niños fue muy importante para que los más pequeños “conozcan el territorio, la comunidad, el paisaje y los lugares donde pueden ir a disfrutar y pasar momentos agradables (...) y culminamos acá con un sancocho que gracias a Dios ya nos lo comimos, estaba muy rico y disfrutando del río” (Y.L. Quintero, comunicación personal, agosto 14 de 2022).

Así mismo se acompañó y participó en la logística para la celebración en la vereda del día de la familia y el día del campesino. Esta actividad contó con una masiva asistencia y desde temprano, el comité y demás padres de familia estuvimos adelantando labores para disponer el espacio para la celebración. Se armaron los juegos infantiles, se preparó el sancocho y se celebró la eucaristía. La presencia del párroco en la vereda y la celebración de la misa también es motivo de goce en la comunidad dado que es el espacio para la espiritualidad y para conectarse con Dios. La presencia de la institucionalidad en estos eventos es muy frecuente. En esta ocasión estuvo el alcalde, uno que otro secretario y funcionarios de la administración. Esta última se vinculó con la entrega de obsequios que se rifaron en la comunidad con ocasión del día del campesino.

Figura 12
Caminata



Figura 13
Celebración día de la familia y el campesino



Para cerrar el año 2022, una de las actividades que realizamos con el ánimo de integrarnos y compartir fue jugar amigo secreto. En esta actividad participaron algunos niños y algunas niñas de la vereda. Nos dimos cita en la escuela temprano y entre todos preparamos el almuerzo. Para el descubrimiento nos separamos por grupos, adultos y niños, y en cada uno se hizo una dinámica para exaltar las cualidades en el caso de los niños y los opuestos en el caso de los adultos. Al terminar se hizo una dinámica de integración en la que jugamos el juego del nudo; sin duda estas actividades propiciaron momentos de complacencia y muchas risas por lo que “deberíamos hacer esto más seguido (...) vea como pasa uno de bueno” (M.L Giraldo, comunicación personal, 2 de octubre de 2022).

Para la realización de algunas de las actividades se enviaron invitaciones digitales vía WhatsApp que se adjuntan en el Anexo 3. Finalmente, al interior del comité tuvimos espacio para celebrar el día de la madre, el padre y el de amor y amistad como pretexto para demostrarnos el cariño y el afecto entre nosotros. En el Anexo 4 se adjunta una manifestación formal de aprecio.

1.3 El momento para reflexionarnos

El *comité-ando* como estrategia de investigación nos permitió contar con espacios permanentes para la retroalimentación y la reflexión colectiva. Esto, a su vez, nos brindó la oportunidad de tomar decisiones sobre la dirección de la investigación/intervención y estar atentos a los asuntos significativos que surgieran. En las primeras reuniones del comité, una de las alertas tempranas fue el interés manifiesto de la comunidad de superar y trascender la denominación de víctimas. Sabíamos todos que el abordaje de la conflictividad armada y sus efectos para la reconstrucción de la historia era inevitable, por lo tanto, la comunidad se esforzó por visibilizar sus modos de vida, prácticas y tradiciones campesinas.

En consecuencia, las actividades propuestas se dirigieron a recuperar las costumbres, a promover la participación, a exponer cómo se ganan la vida (esto incluyó una invitación a la molienda), pero sobre todo para que en su historia puedan ser reconocidos y recordados como una comunidad que es más que una víctima del conflicto.

El campesino ha sido objeto de múltiples y variadas formas de exclusión. En Colombia, un país caracterizado por un conflicto prolongado, el campesinado ha sido una de las poblaciones más afectadas por sus efectos. Sin embargo, no solo el conflicto ha causado estragos, el modelo de desarrollo ha privilegiado la agroindustria en detrimento de la economía campesina. Como resultado, las intervenciones destinadas a acompañar a esta población y promover su desarrollo a menudo los etiquetan como víctimas, desplazados, pobres o atrasados, despojándolos de su capacidad de acción y haciéndolos invisibles.

En clave de la investigación, se exploraron las perspectivas de desarrollo y paz en la comunidad por medio de diversos ejercicios colectivos, como talleres de actores e intervenciones, así como a través de entrevistas y conversaciones informales con los miembros de la comunidad. Durante estos procesos, surgieron de manera recurrente referencias a la dignidad, la solidaridad y lo que significa ser campesino.

Estas fuentes primarias se complementaron con la revisión de lecturas sobre los referentes conceptuales y contextuales. La información recopilada en estas lecturas, junto con los registros del diario de campo, se organizó y sistematizó en una matriz categorizada por temas como paz, desarrollo, comunidad y conflicto. Entre las categorías emergentes, cobró especial relevancia el concepto de lo campesino y el modo de vida campesina. Estas nociones se volvieron centrales al

evidenciar cómo se resignifican los conceptos de paz y desarrollo desde la perspectiva de la comunidad de El Tabor. Por lo tanto, el capítulo 3 de este informe aborda la subjetividad campesina, mientras que el capítulo 4 se enfoca en el modo de vida campesina.

El análisis y la caracterización de las intervenciones se llevaron a cabo utilizando fuentes secundarias, principalmente trabajos de grado y artículos de investigación, así como fuentes primarias que se basaron en los recuerdos de la comunidad. A pesar de haber enviado una solicitud de información precisa sobre los enfoques de los proyectos y programas de intervención realizados en la vereda a la administración municipal de Granada, no se obtuvo ninguna respuesta. Sin embargo, en el transcurso de esta investigación se pudo evidenciar el papel de la institucionalidad en la vereda y cómo se establecen relaciones en constante negociación, donde se conjugan intereses externos con los propios de la comunidad. El propósito subyacente de estas dinámicas es preservar los modos de vida campesina, los cuales se sustentan en prácticas comunitarias que, a su vez, se convierten en formas de *inter-versión*. Este tema será abordado en detalle en el capítulo 5 del informe.

En cuanto a la temporalidad, la propuesta de investigación inicial contempló un periodo de 15 años (2005-2020) considerando que, a partir del 2005, con la disminución de las confrontaciones armadas, se desplegaron los proyectos de intervención; no obstante, en clave de intervención, esta temporalidad fue necesario ampliarla en tanto la reconstrucción de la historia exigía extender el periodo de análisis. La extensión de la temporalidad no se limitó únicamente al pasado; es así como, luego de reconstruir la historia, revisarla y completarla, nos percatamos de que era necesario indagar por la perspectiva de futuro.

Para abordar esta necesidad, nos vinculamos con la docente y llevamos a cabo un taller con niños y niñas de la vereda. Además, rastreamos las entrevistas en busca de fragmentos que reflejaran la visión de futuro y realizamos indagaciones específicas con algunos líderes respecto a sus expectativas.

En ciertos momentos, y de acuerdo con las necesidades del proceso de investigación/intervención, acordamos realizar visitas fuera del comité para complementar información o corregir aspectos relacionados con la grabación de videos, por ejemplo. Reconocemos que no siempre es posible tener control absoluto sobre todas las situaciones. La flexibilidad y la constante reflexividad, que permiten ciertas libertades, son características inherentes a la apuesta por investigar e intervenir desde una perspectiva decolonial e intercultural.

En razón a lo anterior, y no menos importante, fueron las condiciones de posibilidad que permitieron que el trabajo se desarrollara en la forma en que se llevó a cabo. Pese a que la propuesta se formuló durante el confinamiento de la pandemia del Covid-19, la apertura y entusiasmo de la comunidad con esta, así como la amistad y la confianza construida años atrás, generaron el ambiente para que mi participación fuera posible. Sin embargo, también hubo variables de contexto que estaban fuera de nuestro control. Durante algunos días, no pude ir a la vereda debido a la complicación de la situación de orden público en el Oriente antioqueño en 2022. Esto suponía un riesgo para mi desplazamiento a la vereda, especialmente hacia finales de año.

A pesar de las dificultades mencionadas, mi compromiso por compartir, estar presente y tener una presencia activa en la vereda me llevó a construir y fortalecer lazos de amistad y confianza. Incluso, en algunas ocasiones, pude quedarme a pasar la noche con mi familia en las casas de los miembros del comité. Cuando la comunicación presencial no era posible, recurrí a compartir información por teléfono o mediante WhatsApp.

Finalmente, desde el inicio del proceso estuvo claro que la elaboración del informe era mi responsabilidad; sin embargo, muchos capítulos fueron revisados, validados y ajustados con algunos miembros del comité en honor al compromiso de respetar la manera como ellos desean nombrarse y en no publicar información con la que no estuvieran de acuerdo.

Pensar la escritura del informe final fue todo un desafío, en tanto las formas de investigar disciplinadas exigen el cumplimiento de formatos rígidos y estándar en los que no deseaba encasillar este trabajo. Por esta razón no hay capítulo de planteamiento de problema ni de referentes conceptuales. La forma que encontré de resolverlo fue conectarme con el fin superior que le subyace al requisito de presentar un informe de investigación para obtener un título académico; más allá de eso, el propósito se centró en acompañar a la comunidad a reconocerse como sujetos portadores de conocimiento, a reconstruir y contar su historia. Por eso la historia de la vereda El Tabor se convirtió en el hilo conductor que teje este informe.

1.4 El momento de la valoración, socialización y devolución

Como se ha reiterado a lo largo de este capítulo, el proceso de retroalimentación fue permanente. En los últimos comités, previo al cierre del proceso, tuvimos la oportunidad de valorar el trabajo realizado y los logros obtenidos. Los miembros del comité destacan que, a través de las

actividades propuestas y llevadas a cabo, se ha incrementado la participación y el sentido de pertenencia.

Durante el proceso, se incorporaron más personas y se vincularon al comité Hernando de Jesús Álvarez, Mauricio de Jesús Quintero, Leidy Ríos, Bertha Lucía Arias, Doris García y Yeraldin Arias. Estas dos últimas son menores de 15 años, lo que llevó a que el comité pasara de nueve a quince integrantes, renovando así el liderazgo con la participación de mujeres jóvenes. Por otro lado, Brahian comenzó a participar de un grupo de formación en liderazgo juvenil en Asocomunal. Liliana, por su parte, muestra cada vez más empoderamiento y para don Alcides, actual presidente de la JAC, “es un orgullo ver a Lili así, que siga mis pasos y lidere procesos acá en la comunidad para que se renueven los liderazgos” (Conversación grupal, 4 de junio de 2023). En este sentido, se logró el objetivo de involucrar a más personas en los procesos comunitarios, especialmente a jóvenes. Por ahora, el temor de perder el legado comunitario ha sido superado.

Adicionalmente, el comité presentó un cronograma de actividades para el año que fue aprobado en la asamblea de la JAC y con las cuales se busca motivar y mantener la participación comunitaria. De las actividades propuestas se realizó un paseo veredal al municipio de San Carlos el 12 de mayo y un torneo relámpago el 18 de junio de 2023. También con el comité revisamos el material audiovisual y el material gráfico, validando y realizando los ajustes necesarios. El video documental “*El Tabor. Una comunidad con raíces en el futuro*” fue editado por Edgar, pero el guion lo construyó la comunidad con sus relatos. Yo asumí el diseño de las piezas gráficas, y para la impresión de los afiches y rompecabezas, conseguimos recursos a través de contribuciones de COOGRANADA, la JAC, el comité de deporte y mi propia contribución.

Una vez se contó con todo el material, coordinamos e invitamos a la comunidad y a las instituciones al lanzamiento el 4 de junio de 2023. Preparamos una agenda que incluyó palabras del presidente de la JAC, un contexto de cómo se hizo el trabajo; los niños y las niñas, con el apoyo de la docente, prepararon una presentación de coplas y letanías y Liliana leyó un discurso previo a la proyección del vídeo. En el anexo 5 se adjuntan las trovas, las letanías y el discurso. Antes de comenzar la proyección, se compartió un refrigerio consistente en chocolate y pan; durante la proyección del video documental, ofrecimos crispetas y terminó con una ovación por parte de la comunidad, quienes expresaron sentirse identificados y orgullosos del trabajo realizado. Para finalizar, realizamos dos bingos de integración en los que se entregaron dos anchetas.

Figura 14

Presentación de los niños y las niñas

**Figura 15**

Presentación documental a la comunidad.



En el salón comunal, se dispuso de los pendones en forma de exposición de manera que todos pudieran verse y reconocerse, en el Anexo 6 se adjunta el material gráfico para su referencia, el cual quedó disponible en la escuela. El espacio se clausuró con palabras emotivas de algunos miembros de la comunidad, quienes reconocieron el valor de la comunidad, la importancia de su legado y de seguir trabajando por el bien común.

Figura 16
Exposición gráfica.

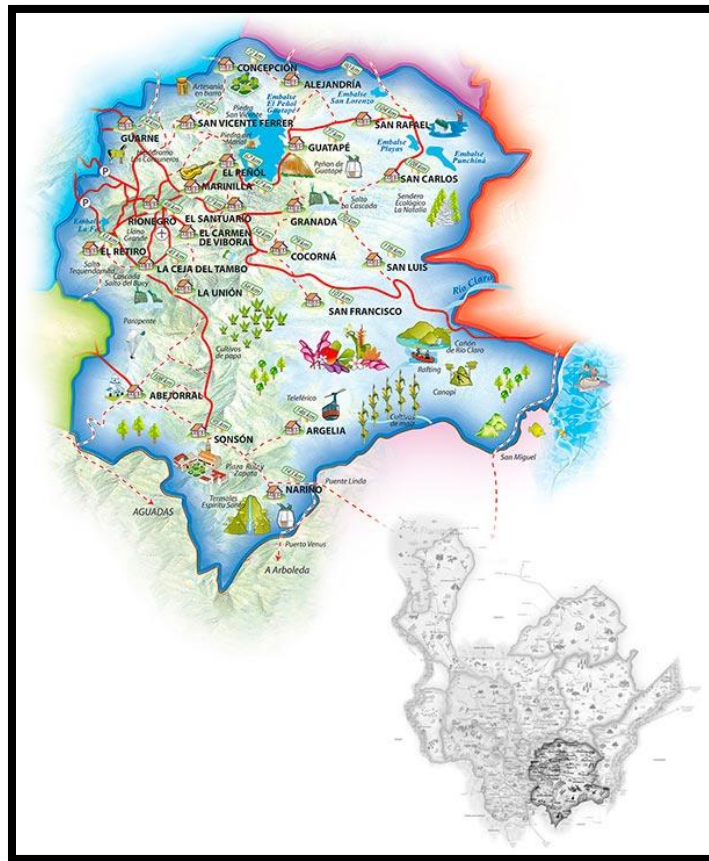


En el enlace <https://fb.watch/liCxG155VF/?mibextid=Nif5oz> se puede apreciar el video documental. Gracias a las gestiones realizadas con el comité, la exposición y el documental “*El Tabor. Una comunidad con raíces en el futuro*” fue proyectado en las plataformas digitales y en el canal comunitario de Vahos TV y DesdeGranada quien administra la emisora Granada Estéreo y en 24 horas alcanzó casi 500 de reproducciones. El objetivo de esta difusión es divulgar el trabajo realizado y motivar a otras comunidades a contar su propia historia.

2 El lugar de la vereda El Tabor en el metarrelato del Oriente antioqueño

La vereda El Tabor está localizada en el núcleo zonal de San Matías, zona suroccidental del municipio de Granada, a 8.7 km de su cabecera, y es una de las 52 veredas que conforman el área rural del municipio en la zona de embalses de la subregión del Oriente antioqueño. El área que la compone está delimitada en parte por la quebrada Santa Bárbara, la quebrada El Jardín y el río Tafetanes; limita el Norte con la vereda El Jardín y Tafetanes, al occidente con la vereda La Cascada, al oriente con la vereda Tafetanes y al sur con las veredas El Edén y Malpaso, no siempre fue así; el territorio que hoy se conoce como El Tabor se encontraba agregado a la vereda Tafetanes y era conocido como el sector La Honda.

Figura 17
Subregión Oriente antioqueño

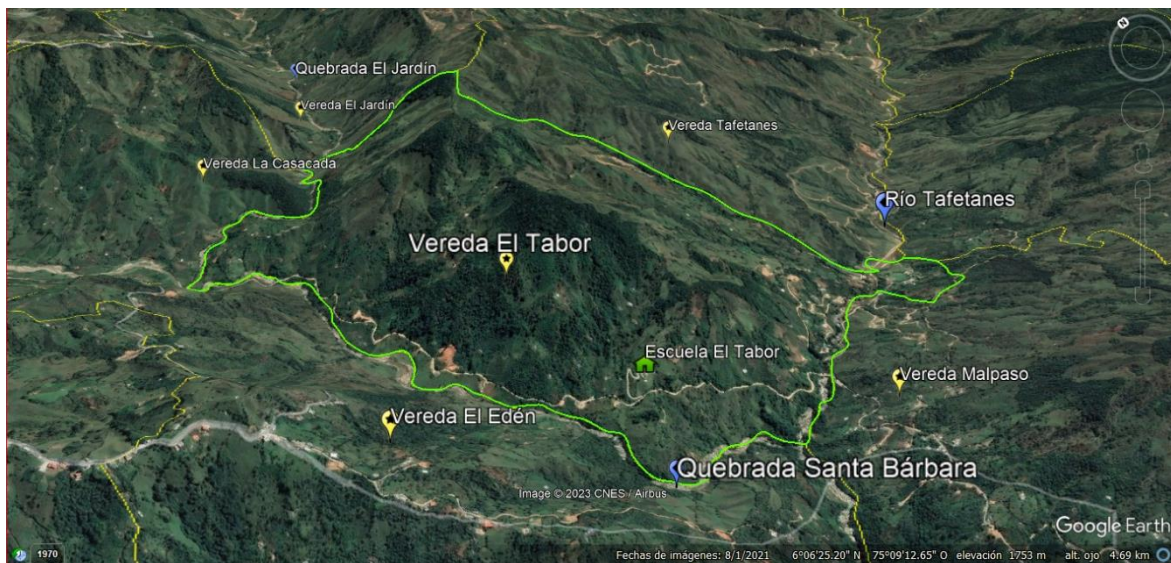


Nota. Fuente: www.antioquia.gov.co

Conforme fue creciendo la población, los padres de familia con hijos en edad escolar, y sin vías de acceso para enviar a sus hijos a la escuela, gestionaron los recursos para la construcción de un puente medianamente seguro para que sus hijos pudieran ir a la escuela de El Edén ante la imposibilidad de enviarlos a estudiar a la escuela de Tafetanes; a dicha gestión se sumaron también recursos para la construcción de un plantel educativo. La gestión e iniciativa de aquellos primeros líderes en los inicios de los años 60 congregó a la comunidad alrededor de la construcción de estas dos obras las cuales se convirtieron en el hito fundacional de lo que hoy se conoce como la vereda El Tabor.

Figura 18

Localización de la vereda El Tabor.



Nota. Fuente: Google Earth 2022.

El anhelo de contar con una escuela propia y un puente para mejorar la conectividad congregó a toda la comunidad y, a través de convites, fueron adecuando el terreno, haciendo el banqueo y hasta talar “un árbol encantado que se tragó un recatón”; también de manera mancomunada se pisó la tierra, se hicieron las tapias y se levantaron las paredes. Así, de manera paralela, “la gente toda colaborando, dele y dele”, la comunidad construyó la escuela y el puente, pues “cuando una comunidad trabaja unida no le queda grande nada” (P. P. Aristizábal, chocolatada “Recuperemos nuestra historia”, 28 de noviembre 2021).

Esta comunidad, que trabajó unida para proveerse la escuela y el puente, aportó también jornales, mulas y hasta novillas para trabajar en la vía de acceso desde El Cebadero hasta El Edén a pico y pala, con ayuda de la Gobernación de Antioquia, el municipio de Granada y El Comité de Cafeteros, sí, pero sin los equipos y la maquinaria necesaria para una obra de esa envergadura. Fue más la capacidad de gestión de la comunidad y del párroco Adolfo Gómez quien convocó a más de dos mil personas de todas las veredas de Granada para que pudieran abrir la carretera hasta el Edén a pico y pala (Conversación grupal, chocolatada “Recuperemos nuestra historia”, 28 de noviembre 2021); la maquinaria y los bulldozers llegaron después para lograr abrir la carretera desde El Edén hasta Malpaso y posteriormente al corregimiento de Santa Ana.

Con un grupo poblacional organizado se originó la formalización de la vereda El Tabor como unidad territorial de Granada, el nombre se eligió en honor al monte Tabor donde ocurrió la trasfiguración de Jesús. La electrificación a la vereda llegó en 1984, cuando los líderes de la comunidad se enteraron de que se iba a electrificar a las veredas vecinas y, a tiempo, adelantaron gestiones con la Federación de Cafeteros y la Gobernación para no quedar excluidos.

Durante más de 30 años funcionó la escuela de tapia construida por la comunidad para luego dar paso a la infraestructura con la que actualmente cuenta el plantel educativo; allí también la comunidad, unida, trabajando colaborativamente, en convite, echándose literalmente piedras y materiales al hombro, construyó la cancha de la vereda contigua a la escuela gracias a la donación del terreno por parte de Guillermo Aristizábal (Conversación grupal, 24 de abril de 2022). Desde entonces, este espacio se ha convertido en el corazón de la vereda posicionándose en el escenario de encuentro, integración y socialización de sus habitantes a través de la práctica del deporte y torneos veredales e interveredales.

En el año 1992, con la gestión de la comunidad y el apoyo del promotor de saneamiento del hospital Jorge Alberto Gómez, quien fuera posteriormente alcalde de Granada y condecorado como el mejor alcalde de Antioquia entre 1995 y 1997, construyeron el acueducto de la vereda y, en el último año de la alcaldía de Jorge Alberto, construyeron la vía de acceso de la carretera terciaria hasta la escuela.

La Junta de Acción Comunal fue constituida legalmente en 1977 pero con una ya larga trayectoria de más de 15 años de trabajo colaborativo, organización e integración comunitaria, la cual se ha mantenido a la fecha pese a los estragos del conflicto y la violencia. La mayoría de las familias pertenecen a la Junta de Acción Comunal JAC, quien a su vez está oficialmente organizada

en diferentes comités: obras, deporte, educación y salud; aunque en la práctica son los comités de obras y deportes a través de los cuales se dinamizan las actividades en la comunidad.

La comunidad de El Tabor tenía una fuerte vocación cafetera. La vida era tranquila y apacible para las aproximadamente 60 familias y más de 200 personas que habitaban la vereda distribuida en tres sectores: Tafetanes, El Chorro y La Escuela. Sustentaban su economía en el cultivo del café principalmente, la arriería, la ganadería y la siembra de hortalizas. Cada ocho días llegaba a El Tabor un camión de Granada a recoger café, tomate, cebolla, frijol, maíz, entre otros. Desde finales de la década de 1980, en la subregión ya había presencia de grupos guerrilleros; fue entonces cuando la vida apacible y tranquila empezó a transformarse.

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN tuvo durante más de una década la hegemonía y control territorial en el Oriente antioqueño. La vereda El Tabor está localizada en el corredor que comunica con el corregimiento de Santa Ana, lugar de asentamiento del ELN, y durante varios años la comunidad de El Tabor convivió con este grupo; y aunque eran invitados a reuniones y los comandantes ofrecían sus servicios para intervenir en los asuntos comunitarios, la comunidad tuvo estrategias para mantenerse al margen. A partir de 1998 son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP las que ocuparon los espacios del ELN ejerciendo presión sobre los habitantes con solicitudes de alimentación, hospedaje e información; invitaciones a reuniones y a participar de diferentes movilizaciones. Pese al temor y la zozobra, la comunidad se las ingenió para no permitir que éstos interfirieran en sus asuntos (Conversación grupal, chocolatada “Recuperemos nuestra historia”, 28 de noviembre 2021). Sin embargo, debían participar en los convites organizados por la guerrilla, quienes repartían la vía y caminos por tramos y se los asignaban a cada vereda “porque no podían atenerse a que el municipio les hiciera todo” (P.E. Giraldo, comunicación personal, 24 de abril de 2022).

El incremento de las acciones belicas de las guerrillas y la incursión de los paramilitares y el ejército en el marco de la Política de Seguridad Democrática para recuperar el control de las zonas ocupadas por las guerrillas, generó el recrudecimiento del conflicto que, aunado a las confrontaciones entre las guerrillas del ELN y Las FARC-EP así como los enfrentamientos entre los bloques Metro y Cacique Nutibara de las autodefensas, desató una crisis humanitaria en todo el Oriente antioqueño sin precedentes en el país.

A raíz del recrudecimiento de las acciones bélicas por parte de los actores armados, los habitantes de El Tabor se vieron obligados a desplazarse en el año 2000 y 2002. Estas oleadas de

desplazamiento, además de los efectos en la economía de las familias y daños en el tejido social, los sentimientos de desarraigo y daños emocionales que aún están en mora de sanar, incidieron en el cambio de la actividad productiva que hasta entonces se sustentaba en el cultivo del café; las plagas y el abandono de los cultivos generaron grandes pérdidas económicas que se sumaban a la ya difícil situación de las familias que, si bien contaron con apoyo de las instituciones municipales y la Cruz Roja para la atención humanitaria, su proceso de retorno se dio sin ningún acompañamiento institucional.

Las familias que decidieron retornar a la vereda El Tabor terminan de hacerlo en el año 2005, la gran mayoría por cuenta propia pese a que para la época hubo un gran despliegue de recursos de cooperación nacional e internacional y hacían presencia en la zona todo tipo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales; la mayor ayuda que recibieron los taborenses provino de sus vecinos y paisanos no solo en Granada sino en Medellín, Cali y Barranquilla, lugares donde permanecieron durante el desplazamiento.

Una vez en la vereda, las familias se dispusieron a recuperar sus casas y cultivos. Los cafetales los encontraron enrastrados por lo cual fueron reemplazados por los cultivos de caña ya que ofrecen mejores condiciones en cuanto a costos de insumos, trabajo y cosecha (A. de J. Quintero, conversación personal, 12 de abril de 2022). La comunidad se organizó en convites para rocería de caminos, la vía y la escuela; adelantó acciones de solidaridad y romerías para apoyar a las familias con trabajo en sus fincas y retoma tímidamente las jornadas de integración comunitaria que se vieron afectadas por el conflicto (Conversación grupal, taller de actores, intervenciones, línea de tiempo y cartografía social, abril 3 de 2022).

De manera paralela comenzó a llegar la oferta institucional con los diferentes programas para las víctimas de desplazamiento o población retornada enfocados en proyectos de infraestructura comunitaria y mejoramientos de viviendas y proyectos productivos para la generación de ingresos.

Es así como través de la gestión comunitaria y el apoyo institucional con los programas de ayuda para las víctimas y obras de infraestructura como medida de reparación, aunque insuficientes, se contribuyó a generar unas condiciones mínimas para que la comunidad pudiera retomar sus proyectos de vida. La comunidad de la vereda El Tabor ha sabido acoplarse a las intervenciones de desarrollo, programas y proyectos para las víctimas, pero también se ha valido

de sus reportorios como comunidad para reforzar las redes de solidaridad, reciprocidad y encuentro a partir de la integración deportiva y cultural para construir paz.

La vereda cuenta con escuela, salón comunal, placa polideportiva y parque infantil. Esta infraestructura se articula alrededor de la escuela, la cual es a su vez el centro de la vereda y lugar de encuentro de sus habitantes. También cuenta con dos acueductos y vía de acceso vehicular y atractivos turísticos como Charco Vueltas en el río Tafetanes o Los Chorros en la quebrada Santa Bárbara. Además de contar con un bello paisaje natural rodeada de aguas y montañas. Si bien la vereda tiene unos límites político-administrativos definidos, muchas familias de veredas cercanas como El Edén y Malpaso han construido sus vínculos sociales en la comunidad de El Tabor.

Actualmente la vereda está habitada por 45 familias y 123 personas. La mayoría de las familias derivan su sustento del cultivo de la caña, el frijol, el tomate, cultivos de pan coger, la ganadería y, algunos, se dedican a jornalear. Como ya se anotó, no siempre fue así. Hacia finales de la década de los noventa, la vereda se destacaba como una de las más pobladas del municipio con aproximadamente 60 familias y más de 200 personas. La actividad económica principal fue el cultivo del café, al que abruptamente debieron renunciar por las plagas, pero sobre todo porque quedó abandonado cuando sus habitantes se vieron obligados a desplazarse de la vereda debido a la confrontación armada.

Y es que el devenir de los habitantes de la vereda El Tabor no ha sido ajeno a las dinámicas municipales, regionales y globales. En este contexto sobresale el interés e importancia que adquirió la subregión como foco de desarrollo económico -al que se asocia el origen del conflicto armado- y su tránsito de un escenario de guerra a un territorio que se empeñó en la búsqueda de la paz y sobre el que ha emergido nuevamente el interés económico con el despliegue de la locomotora minero- energética, bandera del primer gobierno de Juan Manuel Santos. Es por lo que para entender el acontecer de los habitantes de la vereda El Tabor se hace necesario situarla con relación al desarrollo, el conflicto y la paz que han configurado a esta subregión y en cuya trayectoria, se destaca la manera de ser y estar en el territorio de esta comunidad respecto al metarrelato sobre el que sea configurado el Oriente antioqueño.

2.1 El desarrollo como expresión de la modernidad y su impacto en el Oriente antioqueño

Los procesos de desarrollo llevados a cabo en el municipio de Granada y en la subregión del Oriente antioqueño, no sólo están asociados a procesos particulares de su configuración socio histórica, sino que además están relacionados con dinámicas de carácter regional y global. Granada, que se erigió como municipio en 1807, estuvo bajo la tutela administrativa y eclesiástica de Marinilla, y conforme a las transformaciones político-administrativas acaecidas durante el siglo XIX fluctuó entre los dominios de Marinilla y Rionegro (Iner, 1990) que ostentaban su poder sobre el resto de los poblados de la región. En parte, esta situación se explica por la subdivisión geográfica y cultural de lo que se ha denominado Oriente cercano y Oriente lejano.

El Oriente cercano⁴ históricamente se configuró alrededor del poder político, económico, administrativo y eclesiástico que se detentaba desde Rionegro y Marinilla; gracias a la influencia de élites locales, del partido conservador y de la iglesia católica impulsaron el desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio, configurando una sociedad de mayor cohesión social y política. Por su parte, el Oriente lejano⁵ se caracterizó por un proceso de poblamiento más disperso, propio de diversas oleadas de colonización campesina, y en menor medida de indígenas provenientes de algunos resguardos, en la búsqueda de tierras aptas para la agricultura, generando procesos económicos más lentos en relación con el Oriente cercano y formando una estructura social menos organizada (PNUD, 2010).

Este panorama comienza a transformarse rápidamente desde la mitad del siglo XX a partir de las dinámicas sociopolíticas y económicas que se estaban viviendo en el contexto global. Para la década del 50, una vez terminada la segunda guerra mundial, Estados Unidos EE. UU. se configura como potencia mundial. Para ese momento, el despliegue del Plan Marshall -como estrategia de reconstrucción de los países devastados por la segunda guerra mundial- le permite a EE. UU. extender su poderío económico y a la vez resistir y contener la expansión del proyecto comunista de la Unión Soviética (Gómez & Espinal, 2010); paralelamente, aparece en el escenario

⁴ El Oriente cercano lo conforman los municipios de la subregión del altiplano o Valle de San Nicolás: Rionegro, Marinilla, La Ceja, Guarne, San Vicente, El Retiro, La Unión, Santuario y El Carmen de Viboral.

⁵ El Oriente lejano lo conforman los municipios de la subregión de Bosques: comprendida por los municipios de Cocorná, San Francisco y San Luis. Páramo: comprendida por los municipios de Abejorral, Sonsón, Nariño y Argelia y Embalse: comprendida por los municipios de Alejandría, Concepción, Granada, Guatapé, Peñol, San Carlos y San Rafael.

mundial el proyecto desarrollista que pretendía acelerar el crecimiento económico de los países *subdesarrollados*, con el ánimo de generar las condiciones necesarias para alcanzar el progreso y el desarrollo económico de los países del primer mundo (Escobar, 2012).

En Colombia, así como en el resto de América Latina, y con el beneplácito de los mandatarios nacionales, se adoptaron programas de intervención auspiciados por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la organización de las Naciones Unidas ONU y, específicamente en la región, la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe CEPAL, entre otros (Gómez & Vásquez, 2009); quienes promovieron un modelo de desarrollo basado en sustitución de las importaciones. Una década más tarde, se pone en marcha el programa de intervención económica denominado la Alianza para el Progreso, buscando promover la reforma política y el progreso económico y, sobre todo, perfilándose como estrategia para contener el comunismo y el espíritu emancipador que rondaba la región con la revolución cubana.

También en la primera mitad del siglo XX, en lo que al aspecto socio político se refiere, la región presentaba una gran inestabilidad dados los diferentes golpes de estado y la instauración de las dictaduras militares en la mayoría de los países del cono sur, mientras que en Colombia se había generalizado la violencia bipartidista a lo largo y ancho del país. El acuerdo bipartidista del Frente Nacional que puso *fin* al “Periodo de la Violencia” en Colombia coincide con el despliegue desarrollista de la Alianza para el Progreso. El gobierno colombiano, en alianza con el sector privado y el apoyo de una elite progresista (Gómez & Espinal, 2010), emprende el camino de la modernización con la expansión de las industrias, el desarrollo férreo, vial, aeroportuario y energético.

Específicamente en Granada, la violencia bipartidista se produjo sobre todo en las zonas rurales y no tuvo grandes consecuencias, no pasó de enfrentamientos políticos y confrontaciones públicas, básicamente hostigamiento a los liberales (Iner, 1990; CNMH, 2016). Políticamente, el municipio se ha caracterizado por mantener una hegemonía conservadora alineada con los intereses y valores de la iglesia católica. Es probable que la violencia bipartidista no se generalizara gracias al control que ejerció la iglesia en casi todas las esferas de la vida municipal, organizando y regulando la vida colectiva e individual de sus pobladores (Iner, 1990).

El papel de la iglesia, con una marcada tradición conservadora, contrasta paradójicamente con el rol progresista de algunos de sus representantes. Sacerdotes como el Presbítero Clemente

Giraldo, entre otros curas párrocos, incidieron decisivamente en la construcción de algunas obras de infraestructura, en la consolidación de proyectos económicos, sociales y culturales, en la constitución de las Cooperativas de ahorro y crédito y en la conformación de diferentes organizaciones que buscaron impulsar el desarrollo del municipio y crear condiciones de bienestar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes; igualmente, incidieron en la consolidación de un sentimiento profundamente arraigado al ser granadino: el de la solidaridad, a través del cual se fomentó el trabajo colaborativo y se afianzaron las redes de vecindad.

Particularmente en la vereda El Tabor, las obras y proyectos comunitarios fueron impulsados por sus habitantes y acompañados de la labor de la iglesia; además de las obras como la escuela y el puente, fue la iglesia quien promovió la apertura de la vía desde el sector conocido como El Cebadero hasta la vereda El Edén en la que participaron más de 2000 personas de todo el municipio.

Volviendo al escenario regional, el Oriente antioqueño se convirtió rápidamente en foco de interés para el desarrollo nacional con los procesos de modernización e industrialización. La región, que hasta ese entonces se sustentaba en una economía basada en la agricultura rural campesina, empezó a ser objeto de una serie de transformaciones emergidas de los procesos de desarrollo gestionados desde el gobierno central.

Desde inicios del siglo XX se había estudiado el potencial hídrico y de recursos naturales de la zona, lo cual condujo a que en los años 70 y 80 se materializara la construcción y puesta en operación de megaproyectos hidroeléctricos: Guatapé, Playas, San Carlos, Jaguas y Calderas y su consecuente expansión de líneas de transmisión. A la construcción de los proyectos hidroeléctricos, se sumó posteriormente la construcción de la autopista Medellín – Bogotá, el aeropuerto José María Córdova, la zona franca y el establecimiento de grandes industrias (Gómez & Espinal, 2010). Toda esta infraestructura y despliegue de recursos contrastaba con las gestiones que en el orden local promovían las comunidades y los municipios para proveerse obras de beneficio público y comunitario.

Ahora bien, el despliegue de tales infraestructuras trajo a su vez un modelo de desarrollo excluyente e inequitativo, pues conllevó cierta modalidad de agresión en la que las poblaciones campesinas se vieron obligadas a cambiar su vocación agrícola, pasando a ser asalariadas de los

nuevos proyectos y legitimándose un “desplazamiento negociado”⁶ en el que muchas familias no recibieron las indemnizaciones correspondientes al valor real de sus tierras y tampoco el debido acompañamiento ni los programas de reasentamiento por parte de las empresas y el Estado.

Tales proyectos, lejos de generar bienestar para sus pobladores y comunidades directamente afectados por ellos, acrecentaron la brecha de desigualdad entre la zona del altiplano (Oriente cercano) y las demás zonas: embalses, bosques y páramo (Oriente lejano), instaurando allí un modelo de “desarrollo geográfico desigual” (Harvey, 2007) que inicialmente fue vociferado como un gran proyecto de desarrollo nacional y que finalmente terminó por incrementar las desigualdades sociales y la inequidad, pues el impacto real del *desarrollo* se concentró en algunos municipios del Oriente cercano y no en aquel Oriente lejano donde se localizó la infraestructura energética y se había ocasionado grandes impactos sociales, ambientales, culturales, políticos y económicos.

La reconfiguración del territorio en el Oriente antioqueño tiene diferentes matices; por un lado, mientras el interés económico y las políticas desarrollistas fracturan la región (Oriente cercano y Oriente lejano), por el otro, desde el punto de vista discursivo e instrumental, con la creación de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Rionegro y Nare CORNARE y el reordenamiento del territorio en zonas (altiplano, embalses, bosques y páramo) para la gestión pública, es el Estado el que unifica y produce región (García y Aramburo, 2011).

En contraste, y como respuesta a los efectos de la intervención externa con la imposición de un modelo de desarrollo económico excluyente e inconsulto que además sobrevino con el alza en las tarifas de energía y la pretensión de cobros de valorización, se gestó el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño. Dicho Movimiento tuvo su origen en protestas locales, que posteriormente lograron congregarse diferentes sectores de la población: comerciantes, maestros, agricultores, estudiantes, obreros, entre otros, de diferentes municipios, motivados por una causa común y sentando su voz de protesta por la exclusión a la que fueron sometidos (PNUD, 2010). El Movimiento Cívico logró una cohesión regional y el reconocimiento de un territorio que resiste al poder hegemónico que detenta el Estado; como lo sugieren García y Aramburo (2011) “es la

⁶ El Grupo de Memoria Histórica, en su informe sobre el municipio de San Carlos – Antioquia (GMH, 2011), habla de la existencia de un “desplazamiento negociado” producto de la construcción de las hidroeléctricas, lo cual propició que muchos campesinos se vieran forzados a vender sus tierras a precios irrisorios y a tener que irse de sus lugares de origen.

primera vez que en el Oriente antioqueño se construye un sentido del lugar desde abajo, a partir de los sectores pequeños y medios de las localidades y a través de una actuación colectiva de buena parte de las localidades que lo conforman” (p. 49), se produce entonces una construcción territorial a partir de la subjetividad de los pobladores que defiende sus propias maneras de habitarlo.

Una de las banderas de lucha del movimiento, además de las reivindicaciones sociales y movilizaciones por los impactos generados por megaproyectos, fue la búsqueda de participación e incidencia en espacios de decisión sobre su territorio; sin embargo, los espacios alcanzados por muchos líderes de la región, incluso en cargos de elección popular como alcaldías y concejos municipales, fueron diezmados por la persecución, señalamientos y asesinatos de los que fueron objeto los miembros del Movimiento Cívico. Estas acciones son atribuidas a grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, en complicidad con el ejército (Verdad Abierta, 2018); este último hacía presencia en la región a través de diferentes batallones dedicados a la custodia de la infraestructura energética y a los que se les atribuye la responsabilidad en actos de asesinato y desaparición de militantes de la UP y líderes sociales y comunitarios (CNMH, 2016).

Si bien el Oriente antioqueño no ha sido homogéneo, las generalidades que se han construido alrededor de esta región se han caracterizado por los agentes que la producen, externos e internos. Sin embargo, a estos relatos, de manera yuxtapuesta y simultánea le asisten otras formas de ser y estar en el territorio que tienen lugar en los espacios micro territoriales, configurando así diversas territorialidades.

Por su parte, la historia de la movilización social en Granada está asociada a las problemáticas propias de la población campesina; esa movilización, de base campesina, tiene antecedentes con protestas en los años 1974 y 1975 por problemas en el transporte veredal y con el suministro de insumos agrícolas (Iner, 1990; CNMH, 2016). También adelantó protestas en contra de las empresas constructoras de los megaproyectos, reclamando las indemnizaciones y precios justos por las tierras ocupadas; posteriormente se vinculó al Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño en los paros de 1982 y 1984 (Iner, 1990).

Si bien en Granada no se localizan las grandes infraestructuras de los megaproyectos energéticos⁷, la población de este municipio se vio afectada por la pérdida de áreas destinadas a la

⁷ El trasvase de agua de la central hidroeléctrica Calderas incorpora unas obras que consisten en la desviación de parte de las aguas del río Tafetanes mediante una tubería cuya captación se hace en la vereda La Quiebra del municipio de

agricultura y por los impactos socioculturales propios de las dinámicas de los grandes proyectos; ante ello, la población granadina se movilizó reclamando beneficios sociales. La economía de la zona se ha basado fundamentalmente en la vocación agrícola, de comercio local y con pocos niveles de tecnificación; poco a poco se fue dinamizando con la demanda de bienes y servicios requeridos durante el periodo de construcción de las centrales, pero una vez concluidas recobró el carácter de economía campesina (Iner, 1990) cuya actividad comercial logró reactivarse con la apertura de la autopista Medellín – Bogotá.

Granada, pese a ser considerada una despensa agrícola para la región y ubicarse dentro del complejo hídrico del Oriente antioqueño, presenta altos niveles de pobreza (CNMH, 2016); tal contraste fue incluso uno de los factores que convirtieron al municipio en zona de interés para el asentamiento de las guerrillas en su estrategia de tener presencia y control en regiones que, pese a su índice de pobreza, están integradas a la economía nacional por su potencial económico (González, 2011) y por una estratégica posición geográfica: Granada está cerca de la autopista Medellín – Bogotá y tiene conectividad con otros municipios de la región en las zonas de embalses y bosques, así como con la región del Magdalena Medio. En esta perspectiva es que se ha dado un relativo consenso en atribuir el origen del conflicto armado del oriente antioqueño a la importancia que adquirió como foco de desarrollo económico (GMH, 2011; García & Aramburo, 2011; PNUD, 2010; CNMH, 2016).

De manera paralela, la poca institucionalidad o la presencia diferencial del Estado favoreció la llegada de las guerrillas de las FARC-EP, con el frente 9^o y el 47^o, y del ELN, con el frente Carlos Alirio Buitrago y Bernardo Arroyave, quienes comenzaron, como ya se señaló, a hacer presencia en la subregión desde su estrategia para tener control en zonas de crecimiento económico (García & Aramburo, 2011). Es así como el Oriente antioqueño pasa de ser un foco de desarrollo a escenario del conflicto armado.

Granada y la descarga es en la Quebrada Los Medios en vereda del mismo nombre, también en Granada; las aguas trasvasadas llegan finalmente al embalse Calderas, jurisdicción de la vereda La Merced de Granada y la vereda La Hondita de San Carlos; la casa de máquinas se localiza en la vereda La Arenosa de San Carlos. Tiene una capacidad instalada de 26 MW en contraste con la capacidad de generación de la central San Carlos 1240 MW, Guatapé 560 MW, Playas 204 MW y Jaguas 170 MW.

2.2 Del desarrollo al conflicto armado

El inicio de la guerra está íntimamente relacionado con el despliegue de los megaproyectos y el descontento generalizado de la población por no haber sido consultada. Fue además el escenario propicio para que la guerrilla del ELN iniciara un trabajo de base con la población, convirtiéndose en un ente regulador del orden y la vida social, que ante la presencia desigual del Estado, se instaló con el beneplácito de la población que sentía, en principio, que este grupo insurgente se interesaba por el bienestar y las demandas de la comunidad; esa estrategia le permitió al ELN permanecer en el territorio (Uribe, 2015), llegando a generar la simpatía de algunos habitantes y posterior ingreso a sus filas. La posición geográfica en la zona de la cordillera central, con su ya mencionada cercanía a la autopista Medellín – Bogotá y su ubicación como zona de conexión con la zona de páramos, embalses y altiplano, hicieron de Granada un lugar de asentamiento, principalmente en la cuenca del río Calderas y en el corregimiento de Santa Ana, que le permitió al ELN adelantar acciones de secuestro y hostigamientos especialmente en la autopista Medellín – Bogotá. Si bien en la zona se presentaron asesinatos selectivos, extorsiones y órdenes de desalojo, la hegemonía que ejercía este grupo insurgente permitía que no tuviera contradictores; y “no es que en esa época no hubiese violencia contra la población, es que esta se ejercía no sólo sin contradictores sino, incluso, con un alto grado de complacencia de sus paisanos” (CNMH, 2016, p. 68), de ahí que su población fuera estigmatizada y su territorio declarado como un “santuario guerrillero” (GMH, 2011; García & Aramburo, 2011; CNMH, 2016).

La hegemonía del ELN en Granada se vio amenazada con la presencia de las FARC-EP, considerada por el ELN como un “ejército de ocupación”; sus tácticas militares así como su orientación política fue motivo de enfrentamientos entre ellos, lo que no impidió que a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -CGSB-, de manera conjunta, adelantaran la primera incursión armada a la cabecera municipal en 1988 en la cual asaltaron la caja agraria, la oficina administrativa de rentas departamentales, el Hospital, una cooperativa y detonaron varias cargas explosivas (CNMH, 2016).

En este escenario, surgió y empezó a tener incidencia el Comité Interinstitucional⁸ que hizo pronunciamientos en nombre y en defensa de la población, desempeñándose como mediador ante situaciones de conflicto donde se viera inmersa la comunidad (Nuñez, 2013). Así mismo, se creó en 1993 la Corporación Granada Siempre Nuestra -CGSN- con el propósito de canalizar recursos para programas socioculturales y fomentar las capacidades locales para aportar al desarrollo territorial (GSN, 2020).

Fue a partir de 1997 y hasta el 2004 cuando se desató *la guerra de todos contra todos*. En este período el municipio sería objeto de múltiples incursiones en el marco del escalamiento que desde la década de los noventa comenzó a tener el conflicto en la zona. A medida que las guerrillas incrementaban su accionar mediante secuestros, extorsiones, paros armados, emboscadas al ejército y ataques a la infraestructura energética -como estrategia para exigir una negociación y zona de despeje-, se agudizaban también las acciones contrainsurgentes por parte del ejército que buscaba recobrar el control del territorio. En tal contexto, la población civil fue víctima de todos los actores en contienda, siendo blanco de diversos hechos victimizantes, principalmente el desplazamiento forzado y el asesinato selectivo, lo que para los pobladores se denominó “la guerra de verdad” (CNMH, 2016). Entre los hechos más reconocidos de este periodo, están: el secuestro de los integrantes de la misión de observación electoral de la OEA, en 1997, quienes fueron posteriormente liberados gracias a las gestiones de la iglesia y la Defensoría del Pueblo; el secuestro de algunos candidatos a la alcaldía y de alcaldes en ejercicio; en 1998 se dio el primer desplazamiento masivo en el Corregimiento de Santa Ana.

Específicamente en la vereda El Tabor, los líderes eran invitados a asistir a reuniones que convocaba el ELN en Santa Ana u otras veredas, también a participar de movilizaciones a las que se negaron y aunque los comandantes insistían en que si tenían algún problema en su comunidad podían recurrir a ellos -pues es bien sabido que los grupos armados ejercieron mediante la coacción el control del orden social- los líderes siempre se mantuvieron al margen impidiendo que estos interfirieran en los asuntos de la comunidad o dirimieran sus conflictos.

A partir de 1998 fue principalmente las FARC-EP quienes hicieron presencia en la vereda, invitaban a reuniones, movilizaciones y “pedían” ayuda con refugio y comida a los habitantes de

⁸ El comité Interinstitucional fue creado en 1985 y está conformado por el alcalde, instituciones prestadoras de servicios del municipio: hospital, policía, personería, cooperativas, Sociedad de San Vicente de Paúl, Asociación de Comerciantes, Asociación de Juntas de Acción Comunal y la parroquia.

la vereda quienes en muchas ocasiones no podían negarse (Conversación grupal, chocolatada “Recuperemos nuestra historia”, 28 de noviembre 2021; Conversación grupal, taller de identificación de actores, intervenciones, línea de tiempo y cartografía social, 3 de abril de 2022). Por supuesto que esta participación no era voluntaria pues estaba mediada por la intimidación y el poder de las armas. Aunque no se cuenta con hechos de asesinato, violación o desaparición en la vereda, mientras hubo presencia de actores armados siempre reinó la zozobra y la intimidación.

Hacia finales de la década de los noventa, a la disputa a muerte que tenían los actores según su orientación -estatal, paraestatal o contra estatal-, se sumaron los enfrentamientos entre las guerrillas del ELN y las FARC, y los enfrentamientos entre el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas⁹, exacerbando aún más los impactos del conflicto en la población que padecía la proliferación de la siembra de minas antipersona, las limitaciones a la movilidad, el confinamiento y el bloqueo de alimentos e insumos.

En medio de las operaciones militares que se incrementaron a partir del 2002 con el despliegue de la Política de Seguridad Democrática promovida desde el gobierno de Álvaro Uribe -y en alternancia con la arremetida paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia AUCC y el Bloque Metro, y posterior ocupación por parte del Bloque Cacique Nutibara y más adelante del Bloque Héroes de Granada-, la población era señalada de ser colaboradora de la guerrilla, siendo a su vez objeto de presión por parte de la guerrilla, quedando sometida a todo tipo de vejámenes y violaciones a los derechos humanos por parte de guerrillas, ejército y paramilitares que ejercían mecanismos de coacción y violencia para contrarrestar al adversario.

Sin embargo, el momento más álgido de la confrontación armada lo vivió la población granadina en el año 2000, cuando el 3 de noviembre los paramilitares ingresaron por diferentes accesos al casco urbano y dispararon indiscriminadamente contra la población masacrando a 19 personas; como retaliación, las FARC-EP el 6 y 7 de diciembre, con 600 hombres de los frentes 47^o, 34^o y 9^o, se tomaron la cabecera, detonaron un carro bomba con 400 kilos de dinamita, se enfrentaron durante 18 horas a los 25 policías que habían en el comando municipal, dejando un saldo de 23 personas muertas y el casco urbano parcialmente destruido (CNMH, 2016; Nuñez, 2013). A estos hechos, se suman posteriormente las masacres de las veredas El Vergel y Minitas

⁹ En el caso del ELN y Las FARC-EP, como se ha mencionado, debido a diferencias políticas y militares; y en el caso del Bloque Metro y el Cacique Nutibara por diferencias a partir de la posibilidad de la financiación del narcotráfico con la que los primeros no estaban de acuerdo.

perpetradas por los paramilitares, la masacre de El Cebadero y el asesinato del exalcalde y gerente de la reconstrucción de Granada Jorge Alberto Gómez en el año 2001 por parte de las FARC-EP. Y en los años siguientes, luego del fallido proceso con este grupo en El Caguán, se intensificaron las acciones armadas para replegar a las guerrillas, presentándose hechos como masacres y ejecuciones extrajudiciales que desataron una crisis humanitaria.

Luego de los hechos acontecidos en noviembre y diciembre del 2000 y las masacres y muertes selectivas del 2001, muchas familias de la vereda El Tabor se desplazaron por temor y zozobra. Si se trasladaban al casco urbano a diligencias o a mercar eran señalados despectivamente como guerrilleros, pero si no iban era peor so pena de convertirse en sospechosos por no acudir al pueblo; en sus desplazamientos eran increpados o por la guerrilla o por los paramilitares y el ejército, quienes pedían información de uno u otro grupo. Algunas familias fueron obligadas a dar hospedaje y alimentos a los armados; si bien no hubo amenazas directas u órdenes de desalojar la vereda, el sentimiento de zozobra e intimidación constante por parte de los diferentes grupos obligó a muchas familias a tomar la decisión de abandonar sus casas, sus cultivos y su forma de vida (Conversación grupal, chocolatada “Recuperemos nuestra historia”, 28 de noviembre de 2021).

En el año 2002 se da un desplazamiento masivo en la vereda que no obedeció a una orden directa de desalojo sino al rumor que corría con el paso de la gente de las veredas cercanas de Malpaso, Galilea, Quebradona y Santa Ana con su equipaje y animales al hombro de que debían abandonar las veredas. La gran mayoría se quedaron en el casco urbano y aunque algunos regresaron intimidados por la guerrilla que dio la orden de que regresaran -ya que al quedar sin la población civil eran un blanco más fácil para el ejército- (Econometría, 2008) muchos regresaron porque su forma de vida está vinculada al campo, a la vereda, a su actividad productiva y se resistieron a cambiarla; se estima que alrededor de 60 familias salieron de la vereda en aquella ocasión, sin embargo, hubo personas que se resistieron a irse (Conversación grupal, chocolatada “Recuperemos nuestra historia”, 28 de noviembre 2021).

Pese al horror de los impactos de la guerra y del execrable poder ejercido sobre la población por los diferentes actores armados, estos “nunca logran imponerse del todo sobre la población y siempre encuentran formas de resistencia entre las personas” (Uribe, 2015, p. 112). La población granadina tuvo constantemente la fuerza para responder a los embates de la guerra; ello gracias a su capacidad de agencia soportada en su sentido de pertenencia al territorio, en los lazos de solidaridad y redes vecinales, que también han dado lugar a las diferentes organizaciones presentes

en el municipio, como juntas de acción comunal, cooperativas y asociaciones de diversa naturaleza (CNMH, 2016).

Así pues, la apuesta de la sociedad civil por la humanización y terminación pacífica del conflicto hace que Granada tenga una importante participación a nivel regional desde 1997, cuando en conjunto con los demás alcaldes de la subregión y con el apoyo de la iglesia, la Gobernación de Antioquia y el acompañamiento de ONG's, se conformó la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño y el Consejo Subregional de Alcaldes, logrando establecer los primeros acercamientos con la guerrilla del ELN y las FARC-EP para buscar salidas negociadas al conflicto desde diálogos regionales; esas iniciativas tuvieron como resultado logros a nivel local y regional frenando acciones bélicas de los grupos armados y la liberación de secuestrados. Esa voluntad regional no fue apoyada por el gobierno nacional (García & Aramburo, 2011; PNUD, 2010); y su labor fue minimizada por éste cuya prioridad estuvo enfocada en el fortalecimiento de las fuerzas militares y en encontrar la paz por la vía militar ante el fracaso de los diálogos de paz en El Caguán entre el gobierno y las FARC-EP dando paso a la implementación del Plan Colombia¹⁰ auspiciado por el gobierno de Estados Unidos. Éste en principio tenía como propósito desarrollar alternativas para la erradicación de los cultivos ilícitos y atender a la población desplazada, pero direccionó la gran mayoría de sus recursos en fortalecer y modernizar la fuerza pública y así lograr recuperar el monopolio de la fuerza, convirtiendo al país en foco de seguridad nacional y regional.

No obstante, en este escenario se “crearon condiciones favorables para la acción participativa, [se] abrieron espacios para el ejercicio de los derechos ciudadanos y visibilizaron claramente el rol de la comunidad” (PNUD, 2010, p. 23). La voluntad y participación de los pobladores y las organizaciones sociales de base lograron desarrollar un repertorio de acciones colectivas e individuales para hacerle frente a los efectos del conflicto marcando la ruta para el desarrollo de acciones encaminadas a humanizar el conflicto y buscar la paz; como en ninguna otra región del país, el Oriente antioqueño consiguió movilizar los diferentes colectivos sociales en articulación con la institucionalidad local y departamental y el sector empresarial, trascendiendo las viejas diferencias políticas y confluyendo en el deseo de humanizar el conflicto, buscar la paz y trabajar por el desarrollo de la región con la participación activa de los actores locales.

¹⁰ El Plan Colombia fue un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos suscrito en 1999 entre los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton. La vigencia del Plan se mantuvo por 15 años y cuyo objetivo fue la lucha antidrogas y el fortalecimiento militar con una inversión cercana a los 141 mil millones de dólares.

En el marco de estos ejercicios participativos y de movilización social y la confluencia de diferentes actores, públicos, privados, organizaciones sociales de base dieron como resultado la materialización del Laboratorio de Paz el cual fue operado por el Programa de Desarrollo para La Paz PRODEPAZ con recursos de la Unión Europea UE. A diferencia de los Estados Unidos, la apuesta de la UE, a través de la cooperación internacional fue apoyar a la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la atención de la población víctima, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible como camino para alcanzar la paz (Ramírez, A. 2004).

Si bien el origen del Laboratorio de Paz tiene un arraigado antecedente en la movilización y participación social de los pobladores de la región del Oriente antioqueño -que de manera explícita buscó la humanización del conflicto, su terminación pacífica y la construcción de una agenda para el *desarrollo* y la paz (PRODEPAZ, 2020)-, también encarnaba la identidad regional que exigía participación en la toma de decisiones con el futuro y desarrollo de la región, coincidiendo en su génesis con el inicio de un gobierno nacional de corte guerrerista que aprovechó la coyuntura y el apoyo económico de la UE para instrumentalizar el Laboratorio de Paz y minimizar la acción política de los actores del territorio, reduciéndolo a la atención humanitaria (García & Aramburo, 2011; CNMH, 2016) y a la ejecución de proyectos, en su mayoría proyectos de tipo productivo para la población víctima.

En el caso particular de Granada, la capacidad organizativa y la tradición solidaria de la sociedad civil tuvo acciones específicas en lo local, a través del Comité Interinstitucional cuya “única preocupación [era] el *desarrollo* y el progreso del pueblo” (CNMH, 2016, p. 85) y que vio volcado su accionar a la atención de la crisis humanitaria, pero también

fue persistente, relevante e incesante para denunciar las acciones de guerra y los abusos por parte de todos los actores armados: mediante la utilización de comunicados públicos el Comité exigió respeto a la población granadina y respuestas de instancias nacionales, y pidió a los grupos armados cesar con los ataques y vulneraciones en contra de la población civil; demandó la humanización del conflicto armado y la ayuda para contrarrestar los efectos de la guerra sobre la población (CNMH, 2016, p. 57).

El Comité Interinstitucional que agrupa a las organizaciones sociales, cooperativas e instituciones de orden local, asumió la reconstrucción de la cabecera municipal, a través de la Alianza para la Reconstrucción de Granada y contó con el apoyo solidario de varias instituciones, de la población local y de las asentadas en las colonias de Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali. La labor emprendida por el Comité, no se limitó a la reconstrucción física, sino también a la reconstrucción moral y espiritual de sus habitantes (Cardona & Grisales, 2011), razón por la cual emprendió acciones para brindar una atención integral a la población civil y para ello se consolidó un andamiaje social e institucional “para construir un proyecto de paz como nuevo sinónimo de *desarrollo* de la región” (CNMH, 2016, p. 313).

Desde el Comité se promovió acciones simbólicas de resistencia y rechazo a los violentos como la marcha del ladrillo, lunadas, jornadas de luz, y participando también de otros espacios simbólicos regionales como la semana por la paz, abriendo trochas, entre otros. A nivel regional y con el acompañamiento de la Diócesis de Sonsón Rionegro a través de la Corporación Vida, Justicia y Paz, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP y la Corporación para la Participación Ciudadana CONCIUDADANÍA se impulsó la conformación de asociaciones de víctimas como la Asociación de Mujeres del oriente Antioqueño AMOR y el programa Promotoras de Vida y Salud Mental PROVISAME que a su vez realizaron procesos de apoyo psicosocial en Granada dando como resultado la conformación del comité de reconciliación (Rubiano, 2017). Todas las acciones emprendidas desde las organizaciones sociales de base abonaron el terreno para iniciar el tránsito hacía la construcción de paz.

2.3 Del conflicto armado a la paz

A partir del año 2003, una vez iniciadas las negociaciones con los paramilitares y su posterior desmovilización en el año 2006, así como la presunta estabilización por los avances obtenidos en el marco de la Política de Seguridad Democrática, se da un cierre de la conflictividad armada en esta subregión. La Ley 975 del 2005 (Ley de Justicia y Paz) que visibilizó más a los victimarios que a las víctimas, generó la movilización de estas en busca de un marco legal para acceder a la verdad, la justicia y la reparación, y a su vez propiciar que estas asumieran un rol activo en la recuperación y producción de la memoria (Cardona & Grisales, 2011).

El municipio tenía una trayectoria y contaba con el capital social a través del comité de reconciliación posibilitando la conformación de la Asociación de Víctimas Unidas por la Vida ASOVIDA, quien, en su apuesta por velar por el reconocimiento de los derechos, la dignificación y memoria de las víctimas, logró materializar el Salón del Nunca Más, símbolo de la resistencia y llamado de la población para condenar los actos de violencia y abogar por la no repetición; llamado que fue apoyado por otras organizaciones como Asociación de Desplazados de Granada ASODESPLAZADOS y la Asociación de Víctimas de Mina Anti persona de Granada AVAMIGA.

Igualmente, se mantuvieron e institucionalizaron en el municipio actos simbólicos como los ya mencionados: “jornadas de la luz”, “abriendo trochas”, “semana por la paz”; así como otros que fueron surgiendo, como: “marchas por la vida” y “reconstruyendo caminos”.

También se dieron masivos procesos individuales y colectivos de retorno, algunos sin acompañamiento institucional; se activaron además procesos de atención y reparación a las víctimas. El municipio de Granada, con apoyo de diferentes instituciones locales, se convirtió en pionero de la implementación de programas de retorno, como Tierra Viva y la Alianza Medellín Granada, y del programa de atención psicosocial a través de la Alianza Granada llevada a cabo entre La Fundación Coogranada, la Administración municipal y la Universidad de Antioquia, que opera en el territorio desde hace más de 11 años.

A nivel regional, el segundo Laboratorio de Paz del Oriente antioqueño, a través de su operador PRODEPAZ, ejecutó recursos hasta el 2009 de la cooperación internacional interviniendo el territorio con programas y proyectos. Desde el gobierno nacional se impulsó el programa Retornar es Vivir, cuyo lanzamiento se hizo en el corregimiento de Santa Ana, y Familias en su Tierra (Ramírez, L. 2015).

Pese al despliegue de programas y recursos, el retorno de los habitantes a la vereda El Tabor tiene ciertas particularidades. La primera es que parte del retorno fue forzado por presión de las FARC –EP quien les dio la orden de regresar dentro de un plazo establecido y bajo la amenaza de no poder regresar nunca más (Econometría, 2008); la segunda, es que más allá de las amenazas de uno u otro grupo, muchos regresaron por una cuestión de dignidad, es decir, se negaron a vivir de arrimados, mendigando ayuda y sin la posibilidad de trabajar (J.R. Ríos, comunicación personal, abril 24 de 2022); de ahí que su mejor opción fue regresar a sus fincas y tratar de continuar viviendo y trabajando su tierra. Y tercera, el proceso de retorno de las familias se dio sin ningún tipo de acompañamiento institucional; esto puede explicarse en parte a la compleja situación de orden

público en el municipio ya que temían declarar su condición de desplazados por las retaliaciones de los diferentes grupos, la única ayuda institucional que recibieron fue a través de la Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR en el marco de la atención humanitaria y el apoyo y solidaridad recibida por parte de sus coterráneos desde otras ciudades donde llegó la diáspora granadina.

Posteriormente, con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras) se continuaron los procesos de retorno y se redefinieron rutas de atención para la reparación integral y el restablecimiento y goce efectivo de derechos de la población víctima del conflicto; este fue el periodo del protagonismo y fortalecimiento de la actividad organizativa de las víctimas (CNMH, 2016). Actualmente, el municipio de Granada cuenta con 9.764 habitantes (DNP, 2020) y según la Red Nacional de Información RNI de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, se reporta un total de registros de 40.920 de hechos victimizantes (UARIV, 2020); esto pone en evidencia la magnitud de los impactos y los daños causados en la población que dan cuenta que una misma persona fue objeto de diferentes hechos victimizantes.

Luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP y de actos públicos de perdón por parte de los miembros de la extinta guerrilla en septiembre de 2017 (Alcaldía de Granada, 2020), y luego de los avances en materia de memoria histórica -como parte del programa de reparación integral a las víctimas- y de que el municipio ha logrado la implementación de medidas de reparación colectivas traducidas en adecuaciones físicas de salones comunales, caminos y proyectos productivos, persiste en la población un grado de insatisfacción en la implementación de las medidas de reparación (Alcaldía de Granada, 2020).

El plan de reparación colectiva fue formulado en el 2012 de manera participativa con la comunidad y asociaciones de víctimas, en el 2014 fue aprobado por el Comité municipal de Justicia Transicional y el Concejo Municipal, incluyendo medidas de reparación materiales, económicas, simbólicas y psicosociales que incumben aspectos como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, proyectos de desarrollo económico e infraestructura física; la insatisfacción de la comunidad granadina respecto a la reparación proviene de la tardanza en su implementación y del hecho de que la ejecución y financiación del plan de reparación colectiva ha estado bajo la responsabilidad de los entes territoriales de orden municipal, por consiguiente queda en cabeza de la administración municipal la consecución de recursos ante las entidades de orden nacional, así

como la búsqueda de apoyos de la cooperación internacional y de alianzas público-privadas para poder ejecutar los proyectos e intervenciones que respondan a lo concertado en el plan (C.C. López, comunicación personal, 12 de noviembre de 2020).

Más recientemente, en el marco de los esfuerzos de la institucionalidad local que han apostado a la construcción de paz, se ha creado el Concejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia cuyo propósito es contribuir a la materialización y mantenimiento de la paz territorial (Alcaldía de Granada, 2020); así mismo, la población sigue movilizándose en la búsqueda de alternativas que permitan la consolidación de la paz. Además de las acciones emprendidas por ASODESPLAZADOS, AVAMIGA y ASOVIDA, en el 2016 se conformó la organización TEJIPAZ como una apuesta por la sostenibilidad de la paz, el desarrollo económico, el comercio justo y el fortalecimiento de la economía local; esta organización se ha perfilado como una forma de restablecer el tejido social de las familias víctimas del conflicto a través del acompañamiento, capacitación y formación para incidir en el desarrollo de las comunidades (TEJIPAZ, 2020).

Particularmente en la vereda El Tabor el acompañamiento institucional sólo llegó hasta el año 2005 y se concentró principalmente en ayudas para vivienda a través del Banco Agrario con asignación de 15 módulos consistentes en una habitación, baño y cocina y 17 por medio de Asocomunal; por intermediación del programa de Vivienda de Antioquia VIVA algunas familias recibieron mejoramientos de vivienda y a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social -con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, PRODEPAZ, las cooperativas, CGSN, y la administración municipal el proyecto “Restablecimiento Productivo de la Población Desplazada y Vulnerable” (Econometría, 2018)-, proyectos productivos que se limitaron a la entrega de semillas sin consulta con la comunidad y sin estudios previos que determinaran si eran adecuadas o no para el terreno. Pese a las limitaciones en los alcances de los proyectos productivos, los habitantes reconocen que sus condiciones mejoraron con el apoyo institucional (Conversación grupal, taller de actores, intervenciones y cartografía social, abril 3 de 2022).

A través del municipio se adelantó la adecuación de un salón comunal en las instalaciones de la escuela y en convenio con la Unidad de Víctimas se reconstruyó un puente peatonal arrasado por una creciente que comunica a El Tabor con El Edén (Conversación grupal, taller de actores, intervenciones, línea de tiempo y cartografía social, abril 3 de 2022).

En los últimos quince años, la comunidad de la vereda El Tabor ha participado de diferentes programas entre los que se destacan: incentivos productivos por parte de la Gobernación de Antioquia para la población retornada; Proyectos de Intercambio de Servicios Priser y estufas eficientes ejecutados con CORNARE; proyectos para la instalación de sistemas sépticos en las viviendas y potabilización del agua de la escuela con EPM; huertas escolares y familiares con el programa Maná de la Gobernación de Antioquia; incentivos productivos a través de la Asociación de Paneleros en el marco del proyecto +Campo+Sostenible financiado por EPM, ISAGEN, y los municipios de la subregión y en el que participaron algunos pocos productores paneleros de la vereda; capacitación y formación con PRODEPAZ; participación en la escuela de comunicación con TEJIPAZ; y en los últimos diez años, la participación en el Programa de Desarrollo Comunitario PDC de ISAGEN a través del cual la comunidad se formó en quince módulos en diferentes temas y ejecutó cinco proyectos, dos productivos y tres de estímulo a la recreación en cultura y deporte (A.I Giraldo, comunicación personal, 14 y 15 de noviembre de 2020).

Este último programa ofreció un acompañamiento durante diez años no sólo con ejecución de proyectos sino con una oferta de formación para la comunidad que en el año 2010 cuando los efectos causados por el conflicto, representados en la desconfianza y el temor, se fueron aminorando con cada encuentro comunitario; adicionalmente, la comunidad de manera autónoma -aunque cumpliendo con ciertos requisitos institucionales- priorizó, formuló y ejecutó los proyectos de interés para ella, tales como la dotación del salón comunal, dos proyectos productivos para el fortalecimiento de caña, que incluyó la creación de un fondo rotatorio manejado por la comunidad, con un capital de más de 35 millones de pesos y que a la fecha ha traído beneficios para ésta, y dos proyectos que incluyeron la adecuación de la cancha y dotación deportiva, a partir de los cuales se ha dinamizado la integración comunitaria, como otrora antes del conflicto.

El relativo éxito del Programa de Desarrollo Comunitario no se debe tanto al programa en sí, sino a las condiciones preexistentes de organización que tienen los habitantes de El Tabor quienes reconocen el valor del trabajo comunitario en tanto parte constitutiva de su comunidad, lo cual posibilitó aprovechar este programa al máximo.

De manera paulatina los habitantes de la vereda El Tabor a partir del trabajo articulado con las instituciones, pero también con prácticas comunitarias basadas en la solidaridad, la integración y el trabajo mancomunado han logrado materializar formas de construcción de paz en su cotidianidad que van más allá del fin de las confrontaciones armadas, de la seguridad que pueda

brindar el Estado y de los procesos de negociación. La apuesta de construcción de paz de los habitantes de la vereda El Tabor ha estado orientada a la recuperación de espacios comunitarios como los convites, los encuentros y torneos deportivos e ir entretejiendo nuevamente los lazos que rompió la guerra.

2.4 Las nuevas viejas promesas de desarrollo y paz

En la línea argumentativa que se viene presentando y que a la vez es una línea temporal del contexto de los últimos 50 años, llegamos a un hito en la reconfiguración del Oriente antioqueño donde, luego de la pacificación, el interés económico sobre el territorio vuelve a emerger, así como los conflictos, en este caso socio ambientales, por la lógica extractivista que ponen en riesgo nuevamente la permanencia de los pobladores en el territorio. En el Oriente antioqueño la transición política hacía la paz, mejor dicho, la pacificación llegó por la vía militar que dio como victorioso al Estado. Dicho proceso estuvo acompasado de acciones e intervenciones de orden local, nacional y global, desde la atención humanitaria hasta programas más estructurados como el II Laboratorio de Paz y el desminado humanitario que terminaron -con o sin intención- abonando el terreno para el despliegue y continuación del modelo extractivista en la región.

El desarrollo vuelve a ser un eje de persistencia en este escenario configurado históricamente conflictivo y violento, que ha privilegiado el capital financiero, los intereses económicos de transnacionales y de grupos políticos y económicos, donde el desarrollo aparece como un “diseño benéfico, universal e inevitable” (Serje, 2010, p. 17) cuyos proyectos y políticas así como el discurso que los sustentan, naturalizan y justifican la alteración de las formas de vida de los grupos y comunidades, lo que no es más que la reproducción del sistema civilizatorio moderno.

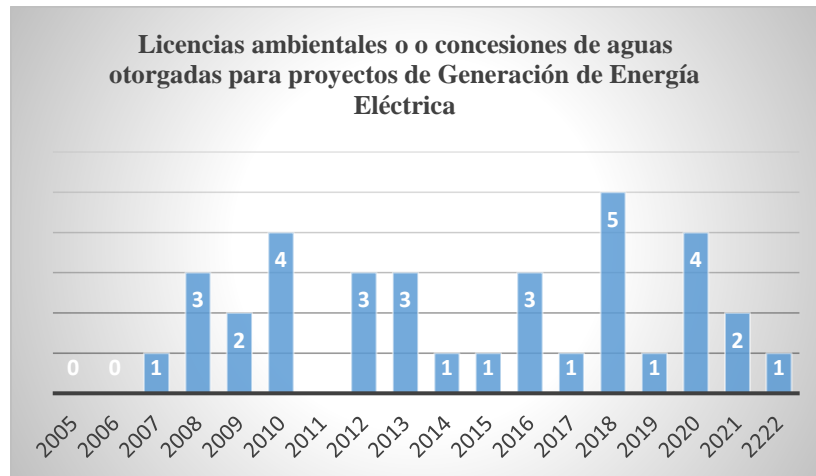
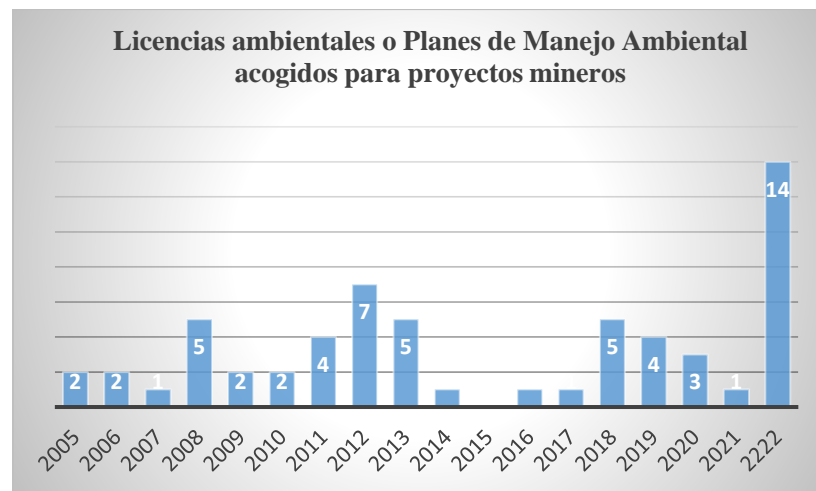
En el 2010, con llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, se enfatiza en el modelo de desarrollo extractivista a través de la llamada locomotora minero-energética mediante la cual se pretendió reactivar la economía y la inversión extranjera. Esto permitió tener un marco normativo y administrativo para facilitar las concesiones y licencias a las empresas y desarrolladores de proyectos en el país para hacer uso y explotación de los recursos naturales so pretexto de aportar a la “solidez económica y al progreso de país” (Presidencia, 2010 – 2018).

De acuerdo con CORNARE, el departamento de Antioquia tiene un gran potencial para el desarrollo de este tipo de proyectos dadas las ventajas competitivas que ofrece la riqueza hídrica del territorio y la topografía con caídas de agua que son fundamentales para este tipo de infraestructura.

De manera paralela al proceso de pacificación, se fueron desarrollando varios estudios para la explotación de los recursos naturales, principalmente en la zona de Bosques y Páramo, bajo la modalidad de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas PCH y/o licencias mineras. La apuesta con la construcción de PCH obedece a la cada vez mayor oposición a los megaproyectos, encontrando en esta alternativa una inversión menos onerosa, con menor área requerida para el desarrollo del proyecto y sin necesidad de embalse, lo que no significa que no se generen impactos socio ambientales durante la construcción y operación de éstas.

No es coincidencia que justo cuando en la subregión se da un tránsito del conflicto armado a la construcción de paz, se incrementan los procesos de licenciamiento ante CORNARE, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y la Agencia Nacional de Minería para exploración y explotación minera y la producción de energía. El potencial de recursos naturales susceptibles de ser explotados ha estado ampliamente documentado y el cual no pudo explotarse debido al aumento de la conflictividad armada en la subregión. En la figura No.19 se refleja el número de licencia o concesiones de agua otorgadas por la entidad para proyectos de generación, 36 en total, y en la figura No. 20 las licencias y/o planes de manejo ambiental para proyectos mineros con un total de 60¹¹.

¹¹ Esta información fue suministrada por CORNARE a través de un derecho de petición que se realizó a la entidad el 26 de abril de 2023 con radicado CE-06652-2023 y contestado por ésta el 10 de mayo de 2023 con radicado CS-04904-2023.

Figura 19*Licencias/concesiones para proyectos de generación eléctrica.***Figura 20***Licencias para proyectos mineros.**Nota.* Fuente: CORNARE 2023.

Los proyectos de carácter extractivo emergen tímidamente en los años 2004 y 2008 con los estudios sobre el potencial hídrico de los ríos San Matías, Cocorná, Dormilón, y Santo Domingo hacia finales de la primera década del 2000 con proyectos de mayor envergadura como Porvenir I y II sobre el río Samaná Norte. La viabilidad para el estudio y construcción de nuevas PCH ha sido promovida desde los entes gubernamentales a través de alianzas público-privadas.

La primera PCH en construirse en la subregión luego de la pacificación, fue la Central hidroeléctrica El Popal en el año 2010 en el municipio de Cocorná, área de influencia de las veredas San Lorenzo, La Aurora, La Inmaculada y el centro poblado La Piñuela; la cual entró en operación

en el año 2014 (Duque, 2021). Seguida de la PCH San Miguel, localizada en la vereda del mismo nombre en inmediaciones de Cocorná, San Francisco y San Luis y entró en operación en el año 2015. En el 2016 entró en operación la PCH Alejandría en los municipios de Alejandría, Concepción y Santo Domingo. En la vereda El Molino del municipio de Cocorná en límites con el municipio de Granada se construyeron dos PCH, El Molino y San Matías que entraron en operación comercial en el año 2017 y en proceso de construcción temporalmente suspendida se encuentra la Central hidroeléctrica Santo Domingo que se localiza entre los municipios de San Francisco y Cocorná (Aristizábal, 2020; Agudelo, sf).

Tan solo en el municipio de Granada se encuentran licenciadas dos Pequeñas Centrales Hidroeléctricas PCH, Tafetanes y La Cascada, esta última en límites con la vereda El Tabor, y actualmente en construcción, dos más en trámites ambientales, PCH El Chuscal y PCH Granada; las PCH El Molino, San Matías y Granada se localizan en la cuenca del río San Matías y a cuya cuenca también pertenece la vereda El Tabor. En el marco de la construcción de la PCH Los Molinos, la comunidad gestionó con la empresa constructora HVM Ingenieros recursos para la construcción de la placa huella de acceso a la escuela; y en el marco de los trámites de licenciamiento de la PCH La Cascada, de quien es socia el municipio de Granada, se adelantó la pavimentación desde El Cebadero hasta la vereda La Cascada con recursos de la venta de ISAGEN, el tramo pavimentado llegó justo hasta el acceso al proyecto La Cascada. Actualmente, con recursos de la Gobernación Antioquia, a través del Sistema General de Regalías, se adelanta la pavimentación de 1.2 km. desde La Cascada hasta El Tabor.

A la fecha el Oriente antioqueño cuenta con 17 centrales hidroeléctricas en operación, CORNARE ha otorgado 19 licencias ambientales para PCH y 95 permisos (El Colombiano, 2022) para adelantar estudios ambientales bajo esta modalidad en casi todos los municipios de la subregión. En lo que a minería respecta, reposan en CORNARE alrededor de 75 expedientes de títulos mineros en toda su jurisdicción. Ante este escenario, ha sido generalizada la movilización social y la acción colectiva -producto del legado del Movimiento Cívico- a la que además de las reivindicaciones sociales y políticas frente a un modelo de desarrollo, se suman otras en el horizonte de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición (Olaya, 2017), y de carácter ambiental en un repertorio de acciones por la defensa de la vida y el territorio.

Es así como en los últimos años ha venido gestándose a nivel regional la confluencia de líderes de las juntas de acción comunal de muchas veredas, campesinos, jóvenes y víctimas que se

han articulado a asociaciones tanto a nivel local como regional, como por ejemplo con la Asociación Campesina de Antioquia ACA y el Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio MOVETE, a organizaciones de mayor trayectoria en la región como CONCIUDADANÍA, el CEAM y organizaciones de víctimas como APROVIACI y AMOR (Conciudadanía, 2015) quienes se han movilizado en contra del modelo de desarrollo extractivista.

Tales movilizaciones con repertorios actualizados a través actividades culturales y ambientales como el Festival del Agua, el Samaná Fest, foros y mesas ambientales, así como a través de mecanismos de participación y el ejercicio de derechos constitucionales, han logrado incidir y parar procesos de licenciamiento ambiental como el de Porvenir II, la negación de licencias o requerimientos adicionales a los desarrolladores, tal es el caso del archivo de las licencias de Cocorná I y III. La exacerbación de los conflictos socio ambientales en la región se originan a partir de los intereses de privatizar los bienes comunes, y los impactos sociales, ambientales y culturales que se derivan de los proyectos como el cambio de vocación de la población campesina, la destrucción del tejido social, el despojo y desplazamiento nuevamente de comunidades que están en procesos de retorno, y en la búsqueda de garantías de reparación (colectiva e individual) y de no repetición.

Comunidades que ven en estas *nuevas viejas* apuestas del desarrollo la vulnerabilidad a la que quedan expuestas ante el despliegue de un modelo de desarrollo extractivista que invisibiliza y minimiza el sentir de las comunidades y la autodeterminación en sus formas de vida, de ser y habitar el territorio y, por supuesto, el temor al resurgimiento de la conflictividad armada. Si bien los habitantes de la vereda El Tabor no se oponen a la ejecución de proyectos en su territorio – como sí ocurre en la generalidad del Oriente antioqueño- pues han logrado beneficiarse de algunas intervenciones a su favor, sí temen al resurgimiento de la conflictividad armada en la subregión con el despliegue y reorganización de grupos paramilitares y bandas criminales asociadas al microtráfico y la extorsión.

Dicho temor se ha exacerbado con los recientes acontecimientos en el territorio. En lo corrido del año 2022 en el municipio de Granada se presentaron cuatro homicidios; en el mes de junio fue asesinando un joven líder ambiental militante del pacto histórico (El Tiempo, 2022) y finalizando el año se presentó un ataque sicarial en la cabecera municipal que dejó un muerto y un herido (MiOriente, 2022); en la vereda La Cristalina fue hallado un cuerpo con heridas de arma blanca y en el sector de El Carmelo fue asesinado un hombre en cuyo cuerpo dejaron un mensaje

amenazante a los comerciantes intimidándolos para el pago de extorsiones (El Colombiano, 2022); esta última persona laborara para un comercio en la cabecera los fines de semana, vivía en la vereda Malpaso y era familiar y amigo de los habitantes de la vereda El Tabor (Y.L, Giraldo, comunicación personal, 3 de diciembre, 2022); su muerte conmovió no solo a la vereda sino a los habitantes del municipio quienes cerraron el comercio como protesta por lo sucedido. Así mismo, circuló en el municipio un panfleto firmado por el grupo Los Paisas en el que se amenazó a los jóvenes, consumidores de drogas, venezolanos que no estén trabajando, sapos e instan a los comerciantes a apoyar la labor de limpieza social (El Tiempo, 2022). Esto ha generado señalamientos, estigmatización y temor en los jóvenes del municipio. Además, ha comenzado a alterarse la dinámica cotidiana de las familias, la comunidad y se ha sembrado un ambiente de zozobra y desconfianza.

Y es que a estos hechos se suman muchos otros acontecidos en toda la subregión incluyendo paros armados, amenazas, entre otros, lo que ha llamado la atención, denuncia y rechazo por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que ponen de manifiesto el riesgo a la vida y la dignidad de los habitantes del territorio. A pesar del desescalamiento del conflicto armado, la promesa de la paz aún no se ha materializado. En cambio, parece que la persistente apuesta por la lógica extractivista como garantía de bienestar y desarrollo para todos, podría condenar a la subregión a una nueva ola de violencia, en un círculo vicioso donde los pobladores, sin duda, serían los más perjudicados.

El Oriente antioqueño, como muchos lugares de la geografía nacional, ha sido testigo de la marginación y exclusión histórica de los campesinos, quienes han sufrido las consecuencias de la violencia sociopolítica y los efectos los proyectos desarrollistas. Sin embargo, los pobladores han demostrado una resistencia incansable en la defensa de su modo de vida, enfrentando una y otra vez los retos que se les presentan con coraje y determinación luchando por una vida digna y tranquila para sus familias y comunidades.

3 “Campesino a mucho honor”¹². Trayectorias por el reconocimiento de la subjetividad campesina

Este apartado no pretende hacer una genealogía de la categoría de campesino toda vez que, en las tensiones, debates y abordajes académicos desde su emergencia se evidencia una dificultad para definirla adecuadamente; sin embargo, es necesario situarla en su carácter histórico e ideológico para entender la construcción de la subjetividad campesina. Campesino fue la denominación que en Europa se les asignó a los habitantes de las zonas rurales asociada a la división del trabajo y al surgimiento de una nueva clase social producto de la emergencia de la modernidad y a la división entre lo urbano y lo rural. Las corrientes de la sociología clásica ubican la existencia del campesinado como una clase social asociada a la producción agrícola; así los análisis sobre las comunidades campesinas situaron su importancia como productores agrícolas y su relación con otros sectores de la sociedad (Becerra & Rojas, 2015; Duarte & Montenegro, 2020).

Desde el marxismo, el campesinado o bien puede confinarse a su parcela y desarrollar los modos de producción para su subsistencia como un vestigio del sistema feudal o salir de ella y unirse a la lucha del proletariado, (Duarte & Montenegro, 2020) en todo caso, frente al advenimiento de la producción capitalista, los campesinos se ubican en un estado de atraso y tendientes a desaparecer (Ploeg, 2010). Otro de los aportes de la sociología rural clásica a la comprensión del campesinado fue el trabajo de Chayanov y su análisis de la familia campesina, su organización de la unidad económica familiar y división de la tierra, cuyo modo de producción está destinado al autoabastecimiento. La especificidad de esta forma de organización económica y productiva es diferente de la producción capitalista, es así como para este autor la producción y organización de la unidad doméstica familiar “produce para la propia reproducción de la vida y no para la reproducción del capital” (Fleitas, Paz, & Valverde, 2020, p. 83).

Hacia mediados del siglo XX se introdujeron enfoques de corte más culturalista a partir de trabajos etnográficos mediante los cuales se intentaba dar cuenta de las especificidades de las comunidades campesinas, siendo la Escuela de Chicago la más destacada y quienes consideraban

¹² “Yo soy campesino a mucho honor” fue la expresión que utilizó el señor Alcides Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal JAC, cuando en el comité del 3 de abril de 2022 se indagó con los miembros del comité de deporte si ellos se consideraban campesinos y por qué.

la sociedad campesina como un tránsito entre lo tradicional y lo moderno (Heying, 1982; Duarte & Montenegro, 2020).

Grosso modo el desarrollo histórico sobre los estudios campesinos se ubican en dos vertientes; por un lado, los *campesinistas* quienes indican que, lejos de desaparecer, los campesinos pueden subsistir y sus modos de producción son compatibles de manera dependiente en el mundo capitalista y, por el otro lado, los *descampesinistas* quienes sostienen que la desaparición de los campesinos se dará tarde o temprano debido a la expansión del capitalismo (Heying, 1982). Enfoques más recientes como el de Jan Douwe van der Ploeg (2010) no pone en duda la permanencia del campesinado como una realidad social y política de nuestro tiempo. Identifica los modos de explotación agrícola en campesina, empresarial y capitalista y como estos se conectan en un complejo entramado de relaciones entre ellos, con los mercados internos y externos y cómo se organizan a partir las lógicas del capital y poder global o el imperio. Reconoce que la modernidad y la producción capitalista colocaron al campesino en una condición de invisibilidad, marginalidad y obstáculo para el desarrollo y cómo la crisis económica y ambiental a escala global ha dado lugar en diferentes latitudes a un proceso de *recampesinización* entendida esta “como la lucha por la autonomía y subsistencia dentro de un contexto de privación y dependencia” (Ploeg, 2010, p. 28); lo que le ha permitido al campesinado reinventarse y asumir múltiples y variadas formas de ser, estar y actuar en el mundo, a veces bajo las lógicas del mercado pero también al margen de éste.

Las comprensiones sobre lo campesino han transitado por definiciones donde se destaca fundamentalmente lo económico-productivo hacia otras más amplias que incorporan otras dimensiones de la vida, aspectos culturales y formas organizativas en relación con sistemas económicos y sociales de orden más amplio y global. Desde enfoques marxistas, liberales e institucionales el campesino ha sido representado a partir de su rol en la economía como productor agrícola, cuya organización social está determinada por la clase “y en un contexto de relaciones de dominación frente al poder terrateniente, estatal y privado” (Duarte & Camacho, 2016, p. 7); desde perspectivas socio antropológicas, se han incluido abordajes relacionados con la identidad, con la cultura y los cambios a raíz de los procesos de modernización, urbanización e inserción en los mercados; y finalmente, en respuesta a los retos globales y a las reformas políticas agrarias y rurales, han situado su abordaje en clave de derechos, reconocimiento y nuevas discusiones alrededor del género, la ciudadanía, la participación, el ambiente, el territorio y la sostenibilidad (Duarte & Camacho, 2016).

Es así como se identifican ciertas características comunes asociadas al ser campesino, pero se reconoce la heterogeneidad de sus expresiones y formas de organización que trascienden lo económico productivo y difieren conforme a los contextos y dinámicas donde se desarrollan (Cuadros, 2019). En general las aproximaciones y abordajes son producciones desde una visión anglo-europea, aunque muchas con referentes empíricos en América Latina, África y Asia, estos en su mayoría han sido importados y extrapolados a las realidades latinoamericanas.

Desde el paradigma moderno/colonial y sus pilares de progreso y desarrollo, la población campesina es considerada anacrónica. De esta manera se ha construido una subjetividad campesina desde la carencia y el déficit; el campesino entendido como trabajador del campo que aparece necesitado de ayuda para superar su condición de pobreza y retraso, convirtiéndolo en objeto de intervención del proyecto civilizatorio moderno. Es así como desde la racionalidad instrumental, la población campesina ha sido, invisibilizada, marginalizada y despojada de su dimensión cultural, política e histórica.

En Colombia la emergencia de los campesinos, o mejor, poblaciones rurales no étnicas¹³, está asociada a procesos de cambio socio históricos y culturales que ponen de manifiesto sus luchas por el reconocimiento y su rol en la construcción del Estado-Nación y, paralelamente, el lugar marginal que le ha otorgado históricamente la institucionalidad. Como consecuencia de la independencia, y la puesta en marcha de la conformación del Estado-Nación, se genera una nueva clase social asociada a la liberación de los resguardos coloniales y la abolición de la esclavitud. La transformación de las instituciones coloniales incidió en el cambio del dominio de uso colectivo de la tierra para dar paso a unidades de propiedad y dominio exclusivo y las subsecuentes formaciones campesinas (Montaña, 2016).

Hacia finales del siglo XVIII e incios del XIX se da un proceso de campesinización, indígenas libres de tributo, esclavos liberados y mestizos pobres tenían la posibilidad de acceder a la tierra baldía y determinar sus formas de producción, dicha relación con la tierra se convierte crucial para significar lo campesino (Velasco, 2014), de esta manera se consolidó la condición de

¹³ En atención al llamado que hace Vladimir Montaña (2016) respecto al origen del campesinado, es necesario advertir que este no siempre ha existido; no se desconoce que efectivamente el mundo rural presencié una nueva forma de organización diferente a la instaurada por el sistema colonial español; dicho cambio ha sido más bien el resultado de los procesos de modernizaciones y de representaciones asociadas al cambio social, las categorías para representarles suceden después.

colonos por todo el país, guardando ciertas particularidades regionales. Asociado a esto, la expansión del mercado interno y externo mediante la producción de tabaco y café y la demanda de mano de obra coadyuvó a consolidar las haciendas. La necesidad de mano de obra -antes asegurada con la población indígena y esclava- llevó a los hacendados a colocar mano de obra servil mediante la entrega de lotes y parcelas a esta población reactualizando las formas de explotación de la mano de obra apareciendo la figura de peón o agregado (Duarte & Montenegro, 2020).

Este proceso estuvo acompasado de adjudicaciones de tierras a los blancos y criollos como pago por su participación en la gesta de independencia haciéndose a las tierras más productivas y cercanas a las vías y centros poblados, mientras que muchos de los indígenas provenientes de los resguardos, así como los esclavos liberados y mestizos fueron ocupando las zonas más escarpadas, montañosas y de difícil acceso. Paralelamente, la apropiación y compra de tierras a los resguardos posibilitaron la concentración de la tierra en unos pocos y también la expansión de la frontera agrícola y la colonización antioqueña.

Los procesos de colonización no buscaban solamente establecer una agricultura de subsistencia pues a medida que se expandían buscaban obtener ganancias, no obstante, la falta de títulos de propiedad los hacía vulnerables ante las pretensiones de las empresas agrícolas, por lo que en muchas ocasiones los colonos no solo fungían como propietarios sino como arrendatarios. La variada procedencia que dio origen a esta nueva clase social –indígenas, esclavos liberados y mestizos- pone de manifiesto “la transformación cultural de comunidades ya existentes con una forma de relacionamiento distinto con la tierra” (Duarte & Montenegro, 2020, p. 147) por lo que se le puede considerar al campesinado como un sujeto intercultural.

A comienzos del siglo XX el gobierno incorpora los ideales de progreso y el desarrollo industrial y emprende la labor de modernización del agro, dado que este era el renglón más importante de la economía para la época, impulsando proyectos agrícolas a gran escala y generando conflictos por el uso y tenencia de la tierra a través de concesiones a empresas nacionales y extranjeras, y relegando a la población campesina a pequeñas fracciones de tierra o a la pérdida de la misma. Esto condujo a que en buena parte del país se gestaran los primeros movimientos campesinos, influenciados por la izquierda y el ideario liberal, quienes exigían mejores condiciones y adjudicación de tierras mediante una reforma agraria, asistencia técnica y créditos para los productores (Velasco, 2014).

La movilización con huelgas y protestas conllevó a que hacia mediados del siglo XX se llevarán cabo varios intentos de reforma agraria que permitiera una mejor distribución de la tierra sin que por ello desaparecieran los conflictos entre obreros, campesinos y los grandes propietarios. Estos intentos de reformas agrarias¹⁴ representaron avances en la recuperación de tierras sin dar solución de fondo a los conflictos con los terratenientes el cual se exacerbó con la contrarreforma del llamado Pacto del Chicoral¹⁵, el cual claramente favoreció el interés de los terratenientes y las empresas con el apoyo estatal desatando la persecución y estigmatización del movimiento campesino (Velasco, 2014).

Por supuesto que la historia de luchas y reivindicaciones del movimiento campesino tiene una historia amplia, compleja y con trayectorias diversas de acuerdo a la región, no es menester de este trabajo abordarlas a profundidad, pero sí es necesario enunciarlas para dar cuenta de cómo las trabas para el acceso a la tierra para la población campesina ha sido un eje de persistencia a lo largo de su historia las cuales han sido acompañadas de reportorios de violencia y represión en contra de esta población.

La población campesina entendió que la única manera de incidir en la política pública en su favor era mediante la organización y movilización a través de las ligas campesinas, federaciones, asociaciones y sindicatos de trabajadores agrarios, tales como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC en 1970, entre otras. Pero también desde el Estado se ha promovido la formación de organizaciones campesinas orientadas por la iglesia católica como la Federación Agraria Nacional FANAL y asimismo promovió la organización de las comunidades campesinas mediante la creación de las juntas de acción comunal y cooperativas; si bien esta era una estrategia para cooptar los movimientos campesinos y contener las ideas comunistas que rondaban la región tras la revolución cubana (Velasco, 2014; Yie, 2022), no puede despotencializarse la capacidad de agencia y gestión de dichas organizaciones.

¹⁴ La Ley 200 de 1936 Régimen de Tierras mediante la cual se reconocieron derechos a la tierra a los trabajadores rurales; La Ley 100 de 1944 Ley de Aparcerías; Ley 135 de 1961 mediante la cual se buscaba dotar de tierras a quien no las tenía e impulsar la explotación agrícola, define la Unidad Agrícola familiar UAF y se crean diferentes entidades como el INCORA (hoy INCODER) y el Fondo Nacional Agrario; y la ley 1 de 1968 Ley de Arrendatarios y de Aparceros la cual tuvo como objetivo reglamentar la UAF y regular la tenencia y explotación de la tierra.

¹⁵ El Pacto del Chicoral de 1972, considerado como un pacto de élites, fue un acuerdo entre la clase dirigente y el gobierno nacional, que rompió la relación del Estado con el campesinado cerrando la posibilidad de una verdadera reforma agraria (Botia-Carreño, 2019).

Finalizando el siglo XX, tienen lugar dos acontecimientos con grandes implicaciones para la población campesina que redefinirán el relacionamiento con el Estado y sus trayectorias de lucha. El primero, fue la reforma política de 1991 que con la nueva constitución ubica a Colombia como un país étnico y multicultural; la cultura se reduce al criterio de la raza y la etnia y se privilegian para el reconocimiento como sujetos de derechos a las poblaciones indígenas y afros, dejando por fuera a las poblaciones campesinas por considerarlas dentro de la nación multicultural única y exclusivamente como productores agrícolas y no como un sujeto colectivo de derecho. El segundo, fue la apertura económica que dio despliegue a las políticas neoliberales mediante las cuales se privilegió el libre mercado dejando al campesinado en desventaja competitiva, precarizando aún más su condición y dando lugar a la expansión de la agroindustria, “y en el cual los programas dirigidos al campesino aspiraron a su conversión en empresarios agrícolas mediante cursos de lógica empresarial, el impulso a la asociatividad, y a proyectos y alianzas productivas” (Yie, 2022, p. 135).

Pero sin duda algo que ha marcado profundamente el devenir de la población campesina en el país ha sido el conflicto armado. Fueron los campesinos quienes engrosaban las filas de los ejércitos durante las guerras civiles de principios de siglo; fueron también campesinos quienes partidarios de un color u otro se enfrentaron a muerte, así como también campesinos quienes debieron salir de sus lugares a las ciudades tras la violencia partidista; y fueron también campesinos quienes ante la violencia y la represión estatal fundaron las primeras guerrillas liberales y comunistas.

El informe entregado por Dejusticia (2022) para la Comisión Esclarecedora de la Verdad - CEV- denominado *Guerra contra el campesinado* -el cual buscó comprender la violencia ocasionada a la población campesina en el marco del conflicto armado colombiano-, concluyó que éste ha sido una guerra contra el campesinado a partir de la identificación y análisis de siete patrones de violencia relacionados entre sí que han sido persistentes durante el conflicto, afectando las dimensiones productivas, territoriales, culturales y político organizativas de los campesinos.

Entre estos patrones se destaca cómo la organización campesina, sus demandas redistributivas en materia agraria y participación política han sido fuertemente reprimidas y estigmatizadas dejando a su población por fuera de la contienda democrática y limitando su acceso al poder político; los procesos de desterritorialización producto del despojo y el desplazamiento de los campesinos favoreció la concentración de la tierra y el despliegue de economías ilegales y

proyectos agroindustriales y minero energéticos, pero sobre todo afectó los modos de vida de esta población; la implantación de un modelo de desarrollo agrario basado en la apertura comercial y el libre comercio precarizando las condiciones económicas y productivas; la persistencia de representaciones del campesino como un sujeto vergonzante, ilegal, pobre e insurgente que han llevado a que muchas de las intervenciones sobre los territorios campesinos hayan sido de corte militar; los efectos de la lucha antidrogas han recaído sobre los campesinos, su presencia en estas zona ha sido consecuencia de la falta de programas de colonización dirigida y en la única posibilidad de mejorar sus condiciones de vida ante los procesos de desplazamiento, volviendo a la población en objeto de militarización y programas de fumigación además de las intimidaciones y violencia ejercida por parte de los dueños de las economías ilegales; desde una perspectiva interseccional, el cuerpo de las mujeres ha sido escenario y objetivo de la violencia como estrategia de terror y ejercicio del poder imponiendo estándares y estereotipos basados en el binarismo sexo-género; y por último, la violencia ejercida en contra de los niños, niñas y jóvenes quienes, además ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales, han sido objeto de reclutamiento forzado afectando gravemente el vínculo de los jóvenes con el territorio y con la forma de vida campesina (Bautista; et al, 2022).

Paradójicamente, fue precisamente el conflicto el que le dio visibilidad a la población campesina, no en su carácter de campesinos como tal sino en su condición de víctimas y desplazados. Es así como el sujeto campesino comienza a ser objeto de atención de la intervención estatal y la acción política y más recientemente emerge como sujeto de reparación individual y colectiva (Yie, 2022).

En gran medida, una de las consecuencias del ejercicio sistemático de los patrones de violencia antes descritos en contra de la población campesina estuvo relacionada con la debilidad del movimiento campesino para ser tenido en cuenta en la reforma política de 1991 que marginó a esta población no sólo en términos de reconocimiento sino también de la posibilidad de ser objeto de políticas públicas y de intervención; otro efecto a raíz del conflicto es que ampliaron sus trayectorias de lucha, de esta manera a los reclamos por una reforma agraria se suman reivindicaciones de tipo cultural, haciendo de la identidad un escenario de disputa, de tipo social y político lo que implica una “declaración de su subjetividad político-social” (Duarte & Montenegro, p. 154) a la defensa por la tierra se suma la defensa por la vida. Así, las luchas del movimiento campesino han buscado el reconocimiento y representación en el campo político que

se traduzcan en un jercicio de redistribución y acceso a la tierra y sus recursos así como las garantías para el despliegue de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales (Velasco, 2014; Becerra & Rojas, 2015).

De manera paulatina el movimiento campesino se fue recomponiendo a través de espacios de movilización como los Congresos Nacionales Agrarios, la conformación de Zonas de Reserva Campesina ZRC con su marco jurídico en Ley 160 de 1994 y la creación de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, el mandato agrario de 2003, la creación del Coordinador Nacional Agrario CNA, entre otras.

Pero sobre todo fue la movilización de la población rural en el marco de los paros nacionales agrarios del 2013 y 2014, sin precedentes en la historia reciente de Colombia, inicialmente convocados por los productores campesinos cafeteros, paperos, cebolleros, arroceros y otros, a los que se fueron sumando otros sectores como los transportadores, los estudiantes, los profesionales de la salud y los sindicalistas logrando visibilizar y poner en la agenda pública las demandas de esta población.

Esta movilización se destaca particularmente porque inició en zonas rurales dispersas y apartadas de las grandes ciudades en respuesta a las políticas agrarias mediante las cuales se pretendió en el marco del TLC con Estados Unidos limitar el uso de semillas y la criminalización por el no uso de semillas certificadas, es decir, la privatización de las semillas. La movilización se fue dispersando por todo el país y logró congregarse a diferentes sectores y movimientos sociales bloqueando por varias semanas las vías principales y exigiendo ser escuchados; la respuesta inicial del gobierno fue desconocer la movilización y frente a los bloqueos utilizar la fuerza y la represión haciendo exacerbar más la tensión y obligando, finalmente, al gobierno adelantar diferentes mesas de diálogo por todo el país a fin de buscar una salida concertada y pacífica para el levantamiento del paro para lo cual el gobierno se comprometió en 22 puntos¹⁶ (Coscione & García, 2014).

¹⁶ 1) Propiedad de la Tierra, 2) Institucionalidad, 3) Revisión de la representatividad gremial, 4) Comercial. Para fortalecer el comercio interior y revisar el comercio exterior y, entre otras medidas, aplicar salvaguardias, 5) Inversión social, 6) Precios justos, 7) Ciencia y tecnología al servicio del campo, 8) Medio ambiente, desarrollo sostenible y minas, 9) Coordinación, apoyo e interés por trabajar conjuntamente con alcaldes y gobernadores, 10) Cumplir la palabra, los acuerdos anteriores, 11) Cambios profundos de lo hecho hasta ahora. Respeto a las comunidades indígenas y afro descendientes, 12) Programas especiales de apoyo a mujeres y jóvenes rurales, 13) Lucha frontal al contrabando, 14) Particularidades específicas regionales, 15) Definición de la dinámica, mecánica, fechas y cronograma del Pacto, 16) Seguridad alimentaria, 17) Presupuesto, 18) Zonas de Reserva Campesina, 19) Costo de los insumos, 20) Necesidad de afinar políticas de crédito del Banco Agrario y entidades financieras privadas para aliviar la situación de los campesinos, 21) Política de sustitución de cultivos: Alternativas, 22) Censo Nacional Agropecuario (Coscione & García, 2014).

Este paro significó el fortalecimiento de un sujeto político y social históricamente invisibilizado y demostró la capacidad de movilización de los campesinos para sentar su voz de protesta frente a los efectos de la apertura económica, así como la demanda de una salida negociada al conflicto, el acceso a la tierra, el reconocimiento de la territorialidad campesina, espacios de participación e inversión en el sector rural. Sin duda el proceso de negociación entre las FARC-EP y el Estado y el punto 1 alcanzado en los acuerdos referidos a la reforma agraria integral, visibilizó a la población campesina y que fueran escuchadas sus demandas ganando espacios dentro de las agendas de las políticas públicas.

La globalización y subsecuente apertura de los mercados ha traído también el acceso a las tecnologías de la información posibilitando al movimiento campesino colombiano entrar en sintonía y articulación con plataformas a nivel internacional como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC y La Vía Campesina y movimientos como Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil MST. Gracias a la movilización, repertorios de lucha e incidencia de los movimientos campesinos en el mundo se logró que la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU adoptara en 2018 *La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales* UNDROP, lo que representa un hito en el sistema internacional de derechos para la población campesina haciendo “un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos” (Montón, 2019).

Un logro reciente de la movilización campesina en el país fue el fallo de tutela SPT2028-2018 de la Corte Suprema de Justicia interpuesta por 1770 campesinos y campesinas y mediante la cual la Corte le ordenó al Estado colombiano incluir la categoría *campesino* en los instrumentos censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Dicha sentencia le ordenó al Estado adelantar estudios para delimitar el concepto de campesino para lo cual se conformó una comisión de expertos bajo la secretaria técnica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH. Por los tiempos del fallo no fue posible incluir la categoría y preguntas sobre sus condiciones sociales y económicas en el censo de 2018 pero sin duda constituye un logro de la reivindicación histórica y lucha por el reconocimiento del campesinado (Dejusticia, 2019).

El documento elaborado por el equipo de expertos es un esfuerzo conceptual que ofrece herramientas para entender la diversidad de la población campesina en el país y su caracterización a través de la descripción de las dimensiones territorial, cultural, productiva y organizativa y en el que claramente se trasciende la visión reduccionista ligada a la comprensión económica del campesinado o a la tenencia de la tierra que ha sido recurrente en la tradición académica y en los análisis sobre lo campesino (Becerra & Rojas, 2015), así como para las políticas públicas. Justamente, el tercer punto de la sentencia insta al Estado colombiano a formular políticas públicas en favor del campesinado, y aunque desde el Ministerio del Interior se creó el Grupo de Asuntos Campesinos con la tarea de formular dichas políticas estas no se han visto materializadas (Dejusticia, 2019).

Y es que las políticas agrarias, así como los programas de intervención para la población campesina se han encaminado más a favorecer el despliegue de proyectos agroindustriales y minero-energéticos (Cogollo & Durán, 2021), así como a las grandes empresas, latifundistas y terratenientes que ostentan además grandes poderes económicos y políticos, que a fortalecer las formas tradicionales de producción campesina y sus modos de vida.

Desde el modelo económico neoliberal, como máxima expresión del patrón mundial de poder, hay múltiples intentos y estrategias para incorporar las economías campesinas a las lógicas del mercado, lo que pone a la población campesina en una relación desigual de poder; por lo general, las promesas de bienestar y vida digna que acompañan muchos proyectos de intervención no se materializan, en su defecto, el sujeto campesino solo es valorado como fuerza de trabajo y sus territorios convertidos en campos de conflicto y violencia.

Recientemente, mediante el Acto Legislativo 01 del 5 de julio de 2023 la plenaria de la Cámara de Representantes luego de surtir ocho debates aprobó por unanimidad el texto del Proyecto de Acto Legislativo PAL 019-2022 Senado, 254 de 2022 Cámara, por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y se modifica el Artículo 64 de la Constitución Política de 1991, lo que sin duda es una clara muestra de la visión progresista del gobierno actual, pese a la oposición de gremios y sectores económicos que encuentran dicha decisión inconveniente a sus intereses toda vez que esta implica generar procesos de consulta previa cuando en los territorios campesinos se pretendan desarrollar proyectos.

Particularmente en el Oriente antioqueño fue precisamente la implantación de proyectos de desarrollo viales, energéticos, industriales y aeroportuarios en correspondencia con la expansión

del capital, lo que desató la movilización de los pobladores del territorio quienes históricamente se han sentido excluidos de las decisiones que les atañen. Fue en este escenario que se gestó el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño que surgió en los años 80 para enfrentar los efectos sociales, ambientales y económicos derivados de la construcción de los megaproyectos como la pérdida de áreas cultivables, la precarización de las condiciones de los campesinos que se vieron forzados a vender sus tierras por sumas inferiores al valor real de las tierras, la descomposición social y pérdida de valores con la llegada de cientos de trabajadores foráneos, las alzas en las tarifas de energía y los excesivos cobros de valorización, entre otros.

El Movimiento Cívico logró cohesionar los diferentes movimientos locales gestados en la mayoría de las veredas y los municipios de la subregión, campesinos, comerciantes, maestros, estudiantes y gremios sindicales, generando un sentido de región y expresando su inconformidad a través de paros cívicos regionales en 1982 y 1984 contando con el respaldo de otros sectores a nivel nacional; la capacidad organizativa y de movilización fue menguada a partir de señalamientos a sus líderes y miembros como subversivos y el exterminio de muchos de sus integrantes en la década de los 80 (Olaya, 2017; Betancur et al, 2020); en el 2018 la UARIV reconoció el Movimientos Cívico del Oriente Antioqueño como víctima y solicitó medidas de reparación colectiva (Verdad Abierta, 2018).

Si bien el Movimiento Cívico no era de base única y exclusivamente campesina, pues a este movimiento estaban vinculados muchos sectores, se repiten los patrones de violencia mediante la represión, la estigmatización y el exterminio de sus integrantes como en muchas organizaciones campesinas en el país. Además de la persecución Estatal y paraestatal a los pobladores e integrantes del Movimiento Cívico se suman todos los hechos victimizantes que durante el periodo de mayor intensidad del conflicto en la subregión debieron sufrir los habitantes, en su mayoría campesinos. La violencia sociopolítica ejercida de manera sistemática sobre la población campesina generó profundos daños a los proyectos colectivos, familiares e individuales emergiendo allí una nueva subjetividad encarnada en la condición de “víctima” y “desplazado” mediante la cual han obtenido más atención e intervención que como campesinos o ciudadanos logrando acceder así a la oferta institucional del Estado.

Los espacios de participación y organización de los campesinos en el Oriente antioqueño ha sido por excelencia las Juntas de Acción Comunal en cada territorio y a nivel municipal, a través

de la Asocomunal o diversas asociaciones productivas o sociales, muchas de las cuales están enlazadas en agremiaciones, asociaciones o movimientos de orden regional.

Luego del cese de la conflictividad armada en la subregión y los diferentes procesos de intervención, se crean diferentes movimientos y organizaciones sociales de diversa naturaleza buscando trabajar en pro de la paz, el desarrollo y la memoria y la reparación a las víctimas. En el marco del Paro Nacional Agrario de 2013 algunas de estas organizaciones locales, inspiradas en las banderas de lucha del Movimiento Cívico, confluyen en el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio MOVETE, reactualizando los repertorios de movilización a través de manifestaciones culturales como festivales del agua, caravanas por la vida, el Samaná Fest, entre otros (Cogollo & Durán, 2021; Pineda & Valencia, 2022) dinamizando la protesta social como estrategia para defender el territorio, sus recursos y las formas de vida de las comunidades que lo habitan; este movimiento surge en un ambiente favorable para la movilización social en el marco de las negociaciones de paz y la disminución de hechos de violencia por parte de las FARC-EP pero también en un escenario donde las condiciones de orden público favorecieron nuevamente el despliegue de proyectos minero-energéticos.

En razón a lo anterior, es que muchos campesinos que fueron desplazados y que han retornado a sus territorios se han vinculado a la lucha para defender el territorio, el agua y los bienes comunes pues encuentran en la ejecución de estos proyectos una nueva amenaza a su permanencia en su territorio incurriendo en nuevas formas de revictimización. En el Oriente antioqueño, tanto en el pasado como en el presente, los movimientos sociales con alguna base campesina se encuentran en una lucha por el reconocimiento y una trayectoria de oposición y resistencia al modelo de desarrollo que mercantiliza la vida, los bienes comunes y desconoce sus modos particulares de habitar el territorio y lo privilegia desde su función económica.

Las concepciones sobre lo campesino y la manera de representarlo está asociada a estereotipos impuestos por la modernidad tales como el subdesarrollo, la pobreza, el atraso; en particular esta valoración desde el Estado le ha restado poder y participación en los diversos espacios de decisión. Las políticas públicas y las intervenciones dirigidas a esta población, basadas en estos imaginarios, resultan ser de corte paternalista y asistencialista, reproduciendo los patrones de poder. Como se observó al inicio de este apartado, la lógica que ha direccionado los campos de estudio sobre el campesinado se ha centrado en su dimensión productiva y económica; así mismo, en el ámbito político las trabas para el reconocimiento del sujeto campesino por parte del Estado

han mantenido a la población rural en una posición dependiente y a su vez marginada. Sin lugar a duda, a las representaciones hegemónicas sobre lo campesino le subyace la colonialidad del poder en tanto el campesino como sujeto subordinado, premoderno y necesitado de ayuda; la colonialidad del saber en tanto el campesino como un sujeto ignorante y atrasado; y la colonialidad del ser en tanto el campesino como sujeto vergonzante, incapaz e insurgente.

Si bien la trayectoria de vida de los habitantes de la vereda El Tabor no se inscribe en los repertorios de lucha activa como sí sucede con muchos movimientos campesinos en el país y particularmente en el Oriente antioqueño a través de los movimientos por la defensa de la vida, los recursos y el territorio; su lucha ha sido modesta, discreta y en una apuesta por mantener sus modos de vida con dignidad y tranquilidad más allá de la designación como víctimas del conflicto armado.

Por eso la expresión *campesino a mucho honor* es una expresión cargada de dignidad, más allá de las representaciones otorgadas al campesinado y a la forma en cómo éstas han sido asimiladas completa o parcialmente por ellos, *campesino a mucho honor* es una reivindicación de su relación con el territorio, del trabajo con la tierra y los lazos que establecen con sus vecinos basados en la solidaridad, es el orgullo de pertenecer a la organización comunitaria a través de la JAC y la integración a través del deporte para el encuentro comunitario y como una forma de vivir y construir una paz otra.

4. “Éramos ricos y no lo sabíamos y nosotros pensando que éramos pobres”: el modo de vida campesina como forma de dignificar la vida y configurar pazes otras

Este capítulo aborda la noción de modo de vida campesina y sus dimensiones: territorial, político-organizativa, cultural y productiva. A través de una narración descriptiva y etnográfica, se presentan estas dimensiones en la historia de la vereda El Tabor, destacando las prácticas cotidianas que ocurren en el ámbito comunitario y que van más allá de la racionalidad económica. Estas prácticas no solo contribuyen a vivir bien, sino también a crear y recrear la paz en la cotidianidad. Estas prácticas sustentadas en el modo de vida campesina aportan elementos que dan sentidos otros a los discursos hegemónicos de la paz y el desarrollo.

Como se expuso en el capítulo dos, sobre el Oriente antioqueño se han configurado diferentes territorialidades, produciendo diversos sentidos de lugar (Massey, 2012) según los actores, el espacio y el tiempo, con relación a ciertas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales. Es así como se ha producido una representación hegemónica de la subregión ligada a su funcionalidad económica la cual ha estado determinada por la disponibilidad de los diversos atributos naturales y artificiales que la definen (bosques, páramos, embalses y altiplano); y se refuerzan fracturas o uniones en la reconfiguración de la región conforme a las lógicas económicas (Oriente cercano y el Oriente lejano) y a las dinámicas de la guerra (la subregión del Oriente antioqueño como una sola). Las lógicas y las espacialidades de la guerra impusieron una territorialidad a los pobladores, generando lugares vetados, fronteras, restricciones a la movilidad y confinamiento a los habitantes en su propio territorio.

A pesar de las reconfiguraciones socio-territoriales que han afectado a las comunidades campesinas de la subregión, ante la puesta en marcha de megaobras y la dinámica del conflicto armado, sus modos de vida tradicionales se han constituido en un eje de persistencia a través del tiempo. Aunque la violencia y el conflicto armado, paradójicamente, han hecho visible al sujeto campesino -sobre todo en su calidad de víctima y, en particular, de desplazado-, es importante recordar que su historia no comienza con la guerra. Por esta razón, es crucial caracterizar y documentar sus formas de vida, las cuales son tan variadas y diversas, como los procesos sociohistóricos y espaciales que las configuran. De esta manera, podremos valorar la riqueza y la complejidad de las culturas campesinas y reconocerlas como una forma “otra” de vida posible.

De acuerdo con el documento técnico para la caracterización del campesinado en Colombia, la Comisión de expertos del ICANH, define al campesino como:

sujeto intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o la venta de su fuerza de trabajo (Acosta, et al, 2020, p. 19).

La definición del sujeto campesino se basa en el concepto de vida campesina, que incluye prácticas, formas de ser y estar, modos de expresión y existencia en dimensiones no solo productivas sino también territoriales, culturales y políticas (Benavides, 2020). La vida campesina se refiere a un conjunto de aspectos que están interrelacionados, como el territorio, las prácticas culturales, la participación política, los modos de producción y los conocimientos y formas de hacer propios del sector rural. Para comprender estas singularidades es necesario considerar el contexto espacial y temporal en el que se desenvuelven, lo que facilita la comprensión y el aporte concreto que las prácticas familiares y comunitarias tienen en la ruralidad.

En lugar de ser un análisis romántico del pasado, el estudio de las formas de vida campesina reconoce el impacto de las transformaciones socioeconómicas a nivel global y nacional. Como resultado, las poblaciones campesinas actuales deben enfrentar el desafío de adaptarse a los cambios en la sociedad dominante. Su forma de entender el mundo está estrechamente ligada al principio fundamental de subsistencia económica y a la reciprocidad social. Esto requiere un análisis más integral que vaya más allá de los aspectos meramente productivos y examine los patrones culturales que subyacen en los modos de vida campesina y permita comprender de manera más amplia la vida campesina teniendo en cuenta su contexto histórico-social.

La noción de modo de vida campesina permite integrar la dimensión cultural del campesinado. Las representaciones sociales, creencias y percepciones relacionadas con el territorio se expresan a través de las prácticas cotidianas, lo que a su vez constituye la territorialidad campesina (Duarte & Montenegro, 2020). Al entender esto, se amplía el horizonte de comprensión sobre la pluralidad de los sujetos campesinos (Becerra & Rojas, 2015).

Los residentes de la vereda El Tabor se identifican a sí mismos como campesinos. Además de su fuerte conexión con la tierra y su amor por el trabajo agrícola, su identidad campesina se basa

en su forma particular de relacionarse entre sí y con su entorno. La solidaridad, la ayuda mutua, el sentido de comunidad y la organización vecinal y comunitaria son elementos clave que definen su modo de vida campesina.

A continuación, se describirá la experiencia de los habitantes de El Tabor con relación a las dimensiones analíticas de la vida campesina: territorial, político-organizativa, cultural y productiva. Aunque estas dimensiones son segregadas para fines analíticos, en la práctica están intrínsecamente relacionadas, se entrecruzan unas con otras y “se dan sin distinción en la vida del sujeto campesino” (Acosta, et al 2020, p. 17).

4.1 “Las raíces de donde uno es, eso no se olvida”: dimensión territorial

Las poblaciones campesinas suelen organizarse en corregimientos y veredas de acuerdo con la división política y administrativa. Sin embargo, su territorialidad trasciende las fronteras administrativas, ya que se construye a través de las relaciones y vínculos que las personas establecen con el territorio. En otras palabras, el territorio es un espacio socialmente construido. Por lo tanto, es común encontrar que varias familias, que se identifican social y comunitariamente con la vereda El Tabor, se encuentren ubicadas en áreas político-administrativas de otras veredas como El Edén y Malpaso.

Los territorios campesinos son mucho más que la relación del campesinado con el entorno físico y/o delimitado administrativamente. Son espacios ricos en interacciones sociales, económicas, históricas y culturales que suceden allí (Acosta, et al, 2020). La familia es el primer espacio de socialización donde se aprenden los valores y se transmiten las tradiciones culturales por lo cual es crucial para la vida comunitaria. En la vereda El Tabor, hogar de alrededor 120 habitantes que conforman 45 familias, la mayoría de las cuales son biparentales con hijos, seguidas de familias monoparentales y unipersonales. La diversidad de estructuras familiares y el valor fundamental que se les da en estos territorios, demuestran la importancia de la vida comunitaria y la variedad de formas de ser familia en el campo.

Cada familia posee un predio que oscila entre 1 y 4 ha., la mayoría son propietarios y otros pocos viven en calidad de agregados. Para estas familias, los predios o fincas son más que una propiedad; es el lugar que representa su hogar, su sustento y su identidad cultural. Es el lugar de las prácticas productivas de subsistencia que en la vereda se sustentan en el cultivo de la caña, el

frijol, hortalizas, ganadería en menor medida y especies menores para la reproducción inmediata de la vida de las familias y la generación de algunos excedentes económicos. En algunos casos, la finca es heredada de generación en generación y representa un legado de saberes que se transmiten de padres a hijos, como lo sostiene Irene Giraldo:

a mí nunca se me olvida que yo salía de estudiar por ahí unos siete, ocho añitos y nos tocaba venirnos, por ejemplo, los sábados, o por las tardes para acá para El Tabor, a embolsar café. Mi papá abrió todo ese monte y dijo: vamos a sembrar café y él conseguía [...] y nos llevaba a todos, a mis hermanos, los más pequeños y grandecitos a embolsar café para sembrar la cafetera, que después nos dio el sustento y todo (A.I. Giraldo, Chocolatada, noviembre 28 de 2021).

La finca es un espacio donde se desarrollan las actividades cotidianas y se comparten momentos en familia; lo que hace que sea un lugar muy especial y querido, la finca es la “unidad básica de vínculo social en el mundo rural” (Rincon, 2020, p. 67). Para estas familias, la finca no solo es una fuente de ingresos y sustento, sino que también representa una forma de vida, con sus propias tradiciones, costumbres y valores. Las familias campesinas suelen estar muy arraigadas a su tierra y a su finca, y luchan por mantener sus raíces y sus tradiciones, mientras se adaptan a los cambios y desafíos de la sociedad moderna.

Figura 21

Finca campesina.



Así mismo, la escuela de El Tabor no es solo un lugar para la educación de los niños, sino también un espacio público y comunitario, que se diferencia del ámbito privado de la finca y la familia. Aquí, la gente se reúne para construir relaciones sociales, generar expectativas y posibilidades de transformación para la comunidad. La escuela es el centro de la vida comunitaria y es considerada un lugar fundamental para la vereda. Además, la cancha es un espacio importante para la práctica del deporte y la recreación, lo que contribuye a la consolidación de los vínculos sociales en El Tabor y las comunidades cercanas. En consecuencia, tanto la escuela como la cancha son espacios claves para la construcción de la vida social en la comunidad de El Tabor.

Figura 22

Cancha vereda El Tabor.



Durante el taller de cartografía social llevado a cabo con el comité de deporte y los estudiantes de la escuela, se destacó la importancia de los espacios comunitarios, los cuales se plasmaron en el centro de los mapas y dibujos realizados. Este enfoque refleja cómo estos lugares son fundamentales para la vida de la comunidad de El Tabor y están en el corazón de su vida social. Además, se hizo referencia a la naturaleza circundante, incluyendo el campo, el aire, las montañas y los ríos, lo que demuestra la importancia del entorno y su significado para ellos. Estas interacciones entre los elementos vivos y no vivos son lo que Escobar (2016) denomina *ontologías relacionales*. Se refiere a la relación que una comunidad establece con su entorno, donde este último se convierte en una parte integral de su vida, en lugar de ser simplemente una fuente de recursos a explotar. En este sentido, la cartografía social ha evidenciado la centralidad de los espacios comunitarios y su interconexión con la naturaleza, lo cual contribuye de manera significativa a la configuración de la identidad de la comunidad de El Tabor.

Figura 23

Cartografía social comité de deportes.

**Figura 24**

Cartografía social niños y niñas de El Tabor



La finca, la escuela y la cancha son lugares donde los vínculos sociales se reproducen, ya que son espacios significativos para la comunidad. Estos lugares han sido apropiados y vividos de manera activa por la comunidad, lo que ha contribuido a la construcción de una territorialidad campesina cargada de sentido de pertenencia y arraigo. A pesar de las amenazas y procesos de desterritorialización generados por el conflicto armado, la comunidad ha logrado mantenerse unida y arraigada a su territorio, lo que se refleja en las expresiones "las raíces no se olvidan" porque "no hay como estar en lo de uno". En este sentido, la finca, la escuela y la cancha son lugares emblemáticos que permiten la consolidación de los lazos sociales y contribuyen a la reproducción de la vida en común.

4.2 “Cuando una comunidad trabaja unidad no le queda grande nada”: dimensión político-organizativa

La familia es el núcleo fundamental de la organización social de la población campesina, ya que es crucial para el mantenimiento de los modos de producción y la participación comunitaria. En El Tabor, la vida colectiva de los habitantes se materializa a través de la Junta de Acción Comunal (JAC), a la cual pertenece el 90% de las familias de la vereda. Aunque la JAC se constituyó legalmente en 1977, en realidad estuvo antecedido de un proceso de organización de casi dos décadas que comenzó cuando los habitantes se unieron para trabajar juntos en beneficio de la comunidad. Adicionalmente, el direccionamiento e influencia de la iglesia fue crucial para la formación de las JAC en el país y en El Tabor no fue la excepción, “si hubiera inyecciones, yo les pusiera para que les aproveche, para que se unan, solos no hacemos nada” les insistía el Padre Adolfo Gómez, párroco de la época (P.E Giraldo, comunicación personal, 24 de abril 2022).

Sin embargo, las formas organizativas tradicionales campesinas como la minga y el convite están basadas en relaciones de cooperación y reciprocidad las cuales han existido -y siguen existiendo- mucho antes de que éstas fueran promovidas y cooptadas por la institucionalidad. De hecho, ante la ausencia estatal el convite se convirtió en una estrategia solidaria de supervivencia que en muchas ocasiones reemplazó la institucionalidad. Finalmente, la Ley comunal se convirtió en un dispositivo de poder para apropiarse de un proceso instituyente y someter la participación y el trabajo comunitario a las lógicas organizativas de la sociedad moderna.

Actualmente, la Ley 743 de 2002 establece el marco normativo para el funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal (JAC) en Colombia. De acuerdo con esta Ley, los dignatarios de las JAC son elegidos mediante asamblea cada cuatro años, al año siguiente de las elecciones para las corporaciones públicas territoriales. En estas elecciones, se designan el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, el fiscal, el comité conciliador y los coordinadores de las comisiones de trabajo. La JAC celebra su asamblea ordinaria el segundo lunes de cada mes por la tarde. La dinámica de las reuniones sigue un formato estandarizado, que incluye un orden del día con la oración, el llamado a lista y verificación del quorum, la lectura y aprobación de actas, la presentación de informes, las intervenciones de instituciones o invitados si los hubiera, las proposiciones y varios, y la organización del trabajo. La reunión se realiza en este día porque el primer lunes del mes los representantes de la JAC asisten a la reunión de Asocomunal a nivel

municipal, donde se reúnen todas las juntas de acción comunal del municipio de Granada para conocer los programas, proyectos y actividades que luego informarán en las reuniones de las juntas veredales.

Para el seguimiento y control de la estructura organizativa se llevan varios libros, incluyendo el de afiliados, el de actas, el contable, el de directivos y el de inventarios. Toda la documentación debe estar actualizada y es acompañada en su registro por el promotor de desarrollo comunitario del municipio y la contadora de la Asocomunal, ya que deben ser validados y registrados ante la secretaria de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia para el debido registro de los libros, reconocimiento y mantenimiento de la personería jurídica. La participación de los socios de la JAC es muy activa, con una asistencia promedio de 35 a 38 personas en las asambleas de los 40 socios, lo que demuestra el compromiso de los asociados con la organización. Aunque la JAC cuenta con una mesa directiva, las decisiones son sometidas a consideración de la asamblea.

Figura 25

Asamblea comunitaria.



A pesar de que la cultura patriarcal sigue muy arraigada en el Oriente antioqueño y la presidencia de la JAC siempre ha sido ocupada por hombres, es importante destacar el papel fundamental que las mujeres han desempeñado en la organización comunitaria y familiar de la vereda. Las prácticas del cuidado, que van más allá del ámbito privado, han sido clave para el sostenimiento y reproducción de la vida y los vínculos comunitarios. Aunque algunas mujeres ya

forman parte de las directivas, actualmente la vicepresidenta y la secretaria de la JAC son mujeres, lo que muestra que poco a poco se están ganando espacios donde ejercer su liderazgo y representación femenina, como en la mesa municipal de víctimas del conflicto armado.

La comunidad reconoce que los representantes en general han sido buenos y comprometidos, otros no tanto, lo que ha generado que algunos líderes se vean obligados a pertenecer a la junta directiva en más de una ocasión razón por la cual a veces los liderazgos se agotan. Reconocen que, aunque a muchos no les gusta el formalismo que conlleva la JAC, la gran mayoría trabaja y colabora con los asuntos de la comunidad pues en el fondo las comunidades saben que es necesario estar legalmente constituidos para poder acceder a ciertos beneficios y ayudas por parte de las entidades estatales y privadas.

Durante el conflicto armado, los líderes comunitarios se enfrentaron a una intimidación constante por parte de los actores armados que los invitaban a reuniones. Esta intimidación puso en peligro el ejercicio del liderazgo comunitario. A pesar de ello, los líderes lograron manejar la situación con habilidad y evitaron que los actores armados interfirieran en sus asuntos. De esta manera, los líderes preservaron la autonomía de su comunidad y se sienten orgullosos de haber protegido sus intereses durante un momento difícil y desafiante.

Además de la mesa directiva, las juntas de acción comunal suelen organizarse mediante la conformación de diferentes comités y cada socio está obligado a pertenecer a alguno. En El Tabor hay conformados los comités de educación, solidaridad, obras y deporte -los mínimos que exige el gobierno departamental- siendo los comités de obra y de deporte los más activos con reuniones periódicas mensuales. Cuentan también con un comité propio para administrar el fondo rotatorio. Recientemente la JAC creó un nuevo comité denominado de celebraciones encargado de gestionar la logística para las festividades.

En la reunión ordinaria del mes se prioriza el trabajo o actividad a realizar al mes siguiente conforme a las necesidades que se vayan presentando como rozar el predio de la escuela, arreglar un camino o mantener el acueducto, y la organización y logística del convite está a cargo del comité de obras; todos los socios deben participar y en caso de no poder hacerlo deben enviar un trabajador o en su defecto pagar un jornal. Así, el lunes en la mañana se hace el trabajo, en la tarde se lleva a cabo la reunión periódica y concluye la jornada con actividades de integración y partidos de fútbol en la cancha, es un entramado de trabajo, decisión, coordinación y disfrute.

El convite es una práctica tradicional de gran importancia para la comunidad, ya que gracias a él los habitantes han logrado trabajar juntos de manera solidaria y colaborativa en la construcción de obras para beneficio comunitario, como la escuela, la cancha, el acueducto y otras obras de infraestructura. Pero el convite no se limita únicamente a la construcción de obras, sino que también ha sido esencial para el mantenimiento de los caminos y la infraestructura comunitaria en general, de ahí que su valor está interiorizado en tanto “si no hay unión en las comunidades, uno sale por allí y otro por allá, nunca va a progresar, pero todos a una, el viaje, puede ser muy pesado, pero se vuelve livianitico entre todos” (P.P Aristizábal, comunicación personal, 24 de abril, 2022). En el convite participan desde los más grandes hasta los más pequeños comprometidos todos en una sola causa.

Figura 26

Participación adultos en el convite.



Figura 27

Participación de los niños en el convite.



Sin embargo, lo que hace que el convite sea verdaderamente especial para la comunidad es que a través de él se despliega la solidaridad y la reciprocidad, valores fundamentales para el bienestar colectivo. De hecho, muchos de los trabajos se concentran en apoyar a alguna familia que lo necesite en su finca, ya sea por escasez de recursos económicos o porque haya personas enfermas. En estos casos, la construcción de una casa o una ramada, el corte de la caña y otros trabajos similares son una forma concreta de brindar apoyo y solidaridad a aquellos que más lo necesitan:

Esos convites han existido toda la vida, yo recuerdo desde niño que el abuelo mío decía: que vamos a hacerle un convite al viejito, porque el arado hay que deshierbárselo y sembrárselo. Íbamos en un día (...) un mes estaban donde usted, otro día dónde Albeiro, otro día estuvieron en esa finca que tenía yo, (...) otro día estuvieron donde ese Adolfo, fueron 35 almas a hacer ese armazón ahí. (P.E Giraldo, comunicación personal, 24 de abril 2022)

El retorno de la población a la vereda se facilitó gracias a las gestiones de la JAC, que coordinó convites cada ocho días para trabajar en las fincas y reconstruir las casas, ramadas y cultivos de los habitantes, permitiéndoles recuperar las condiciones mínimas para retomar sus proyectos de vida. Es importante destacar que el retorno a la vereda no contó con ningún acompañamiento institucional, y en cierta medida se debió a la presión ejercida por los actores armados. En este contexto, la solidaridad de la propia comunidad resultó ser la principal fuente de apoyo y acompañamiento para los pobladores.

El reconocimiento por parte de sus habitantes de la importancia del trabajo mancomunado y su fuerte sentido de lo comunitario a través de diferentes prácticas -como el convite y el deporte- que se han mantenido a lo largo del tiempo pese a la amenaza para el ejercicio de estas durante el conflicto, han servido como reportorio para hacerle frente a los daños que dejó la violencia y como estrategia para recuperar el tejido social; luego del retorno, la comunidad de El Tabor se ha empeñado en recuperar sus tradiciones y prácticas comunitarias, promoviendo la integración comunitaria y la convivencia entre sus miembros a través de los convites y los torneos veredales e interveredales. Así pues, las prácticas comunitarias, arraigadas al modo de vida campesina, se

vuelven en estrategias para la reparación y el trabajo familiar y comunitario como una forma de dignificar la vida (Ramírez, L. 2021).

Es importante destacar que el bien común sólo es posible si los miembros de la comunidad están bien. Por lo tanto, la práctica del convite implica más que simplemente construir obras o mantener la infraestructura comunitaria; se trata de una oportunidad para que los miembros de la comunidad se unan en un esfuerzo conjunto, contribuyendo no solo con su trabajo, sino también con su amor y compromiso hacia su comunidad. En este sentido, el convite es un evento emotivo y significativo que refuerza los vínculos comunitarios y contribuye a fortalecer el tejido social.

La comunidad reconoce que “pertenecer a la JAC es una fortaleza, es como una alcaldía pequeña, funcionan, se organizan y logran proyectos” (A. de J. Quintero, Comunicación personal, 5 de junio de 2022) y que muchas veces es un requisito técnico administrativo para poder participar y acceder a programas y beneficios de carácter institucional; pero más allá de esta instrumentalización que se da en doble vía, a través de ella se organizan, se fortalecen, se integran como comunidad y se ha potencializado la participación comunitaria.

Considero que la instrumentalización funciona en ambas direcciones, ya que la comunidad ha sabido aprovechar el apoyo institucional y la institucionalidad también se ha beneficiado de la labor organizativa de la vereda para viabilizar sus metas, programas y proyectos. Durante el tiempo del trabajo de campo con la comunidad, la institucionalidad estaba presente con regularidad acompañando diferentes actividades. Asimismo, era común ver a personalidades de la vida política regional, como senadores y diputados recién electos, haciendo contribuciones para la comunidad, como la realización de torneos e integraciones comunitarias. Cada comunidad representa un botón electoral, y este tipo de dádivas significan un agradecimiento por eventuales apoyos electorales. La comunidad sabe aprovecharlos muy bien, como lo expresó uno de sus líderes “todo lo que nos quieran dar es bien recibido, aquí no se le niega nada a nadie” (A. de J. López, conversación personal, 24 de abril de 2022), refiriéndose al apoyo recibido para la celebración de un torneo interveredal. Así mismo, muchos de los beneficios obtenidos por la comunidad como mejoramientos de vivienda, sistemas sépticos y estufas eficientes han sido producto de promesas de campaña. La comunidad sabe aprovechar los recursos y oportunidades que se les ofrecen, incluso si estos están motivados por intereses políticos.

4.3 “*Siempre venimos los domingos y los lunes a la escuela a integrarnos*” dimensión cultural

El reconocimiento del campesino como sujeto cultural reviste una gran importancia en la medida en que las comprensiones sobre éste han estado limitadas a la productivo y se han obviado consideraciones de tipo sociocultural. Dicho reconocimiento permite ampliar su comprensión de la diversidad de los sujetos campesinos, afirmar la identidad que se manifiesta en todas las dimensiones e implica una declaración de su subjetividad política-social (Duarte & Montenegro, 2020).

En las comunidades campesinas, la dimensión cultural se relaciona con prácticas y expresiones que representan la memoria, tradiciones e identidad. Estas tienen un valor simbólico cargada de visiones y representaciones del mundo que se manifiestan en la vida cotidiana. Es así como la cultura se recrea en el proceso de socialización. Los habitantes de El Tabor se caracterizan por tener tradiciones y costumbres asociadas a la religión católica donde el valor otorgado a la familia es fundamental para la reproducción de la sociedad y la construcción de la vida en comunidad. En las celebraciones religiosas siempre hay una nutrida participación; estas se realizan dos veces al año, coincidiendo una de ellas con la celebración del día de la familia. Hay otra adicional para la imposición de la ceniza en la que participan veredas cercanas, pues el Tabor es el centro del núcleo zonal de San Matías al cual pertenecen 11 veredas.

Figura 28

Celebración de la eucaristía.



El conocimiento sobre la tierra y el trabajo agrícola, incluyendo los ciclos productivos, técnicas de siembra y manejo de plagas, es transmitido de generación en generación en las comunidades campesinas. Este conocimiento se adquiere mediante la práctica y la participación de

los miembros de la familia. Por ejemplo, la costumbre de comenzar la molienda a medianoche es una práctica aprendida de los padres. Cuando se pregunta por qué se hace a esa hora, la respuesta es que “así lo hacía mi papá, rinde más, terminamos más temprano y es más fresco para trabajar” (A. de J. Quintero, comunicación personal, 12 de abril de 2022). La participación de la familia es fundamental para garantizar la reproducción y el mantenimiento de este conocimiento a lo largo del tiempo.

La familia es el núcleo donde se transmiten los valores, creencias, saberes y prácticas que se refuerzan y nutren en los espacios colectivos. Desde temprana edad, los niños y las niñas acompañan a sus padres en las labores de la finca, participan en las reuniones de la Junta de Acción Comunal, son testigos del liderazgo y el trabajo colectivo de los convites y de los espacios de integración en la escuela a través del deporte, lo que contribuye a afianzar los lazos de vecindad y el compadrazgo. La participación de los más pequeños en estos espacios sin duda fortalece la transmisión de las tradiciones y el sentido de comunidad.

En El Tabor, la cultura campesina se caracteriza por un fuerte sentido de comunidad y solidaridad entre sus habitantes. Los miembros del grupo suelen compartir recursos, conocimientos y experiencias, y participar en festividades y ceremonias que refuerzan su identidad cultural.

La territorialidad campesina en El Tabor está definida en gran medida por los modos de producción sustentados en el trabajo familiar y comunitario. Además, el deporte se convierte en un poderoso medio para fomentar la integración y la participación comunitaria, ya que a través de él se crea un sentido de pertenencia, se fomenta el respeto y la tolerancia, se promueve el trabajo en equipo, la cooperación, la sana convivencia, la salud y se vuelve un pretexto para celebrar y recrear su identidad.

Sin lugar a duda con lo que más se identifican los taborenses, y por lo que más son reconocidos en el ámbito municipal, es por la capacidad para trabajar juntos y por las actividades de integración a través de la práctica del deporte. Venir a la cancha los domingos y los lunes se convirtió en un ritual sagrado, “gracias al deporte hemos aprendido a trabajar todos juntos (...) es lo que nos hace sentir bien y tranquilos” (Y.L. Quintero, comunicación personal, 3 de abril de 2022), es su forma de construir paz en la cotidianidad.

La gente aquí siempre ha sido muy echada pa´ adelante, guapa, trabajadora, se ha destacado por que trabajan muy unidos (...) y ha sido como como la fortaleza de ellos, trabajar juntos

(...) la gente se reúne aquí para hacer torneos, y no solo para eso, *es para vivir* [y] convivir con la misma comunidad. (L. Quintero, comunicación personal, 3 de octubre de 2022)

Las manifestaciones culturales en la vereda se expresan también en las diferentes festividades como el día de la familia y el día del campesino. Aunque anteriormente había muchas más celebraciones alrededor de la juventud, los niños, la amistad, entre otras, la comunidad es consciente de la importancia de estas prácticas para la pervivencia del modo de vida campesina y reconoce que muchas tradiciones se han ido perdiendo con el tiempo. Por eso, uno de los objetivos de este trabajo fue dinamizar y promover la participación a través del fomento de estas actividades lo que se logró mediante la conformación de un comité de celebraciones al interior de la Junta de Acción Comunal encargado de promover diversas actividades con una agenda para el año 2023.

Además, se destaca la importancia de actividades para el esparcimiento y la recreación de la comunidad, como los paseos al río Tafetanes, principalmente a Charco Vueltas, donde la comunidad suele reunirse para “tirar charco” y hacer un sancocho.

Figura 29

Paseo Charco Vueltas.



No hay festividad que no incluya el juego y alrededor de cada celebración siempre está la comida como una expresión también de la identidad mediante prácticas culinarias tradicionales donde se exponen los saberes y sabores en un plato de comida. Las empanadas, los pastelitos de galletas, los pasteles, la morcilla, la fritanga y el sancocho están por lo general presentes en las actividades comunitarias como el convite, los paseos y, por supuesto, los torneos interveredales. Estos últimos espacios son también aprovechados para la venta de comida por alguna de las

mujeres de la vereda que contribuyen a la generación de ingresos económicos; también en las reuniones mensuales entre las mujeres se rotan la oportunidad de hacer ventas en ese día de manera que todas puedan verse beneficiadas.

Figura 30

Sancocho para el convite.



Los juegos en la cancha son para todos y en los encuentros de los domingos y lunes se van formando equipos de niños y niñas, hombres y mujeres y a veces mixtos para la “recocha”; cuando se realizan torneos interveredales, el protagonismo lo tienen los equipos masculinos dado que las mujeres están por lo general encargadas y ocupadas con la logística del evento: organizar reglas de juego, coordinar el arbitraje, control de planillas y puntajes, la premiación, preparar la alimentación, entre otros. No obstante, el equipo femenino de la vereda tiene un gran reconocimiento a nivel municipal pues obtuvo una destacada participación en el torneo interveredal de fútbol femenino ganando el subcampeonato en el año 2022.

No se trata solo de reconocimientos y títulos ganados, se trata de que también a través del deporte se abre otros horizontes y posibilidades para las mujeres de la vereda, en cuyo contexto la cultura patriarcal todavía tiene una fuerte influencia; respecto a la participación de este grupo poblacional “es bueno porque las mujeres no sólo debemos estar en la casa pendiente del marido y de los hijos, sino también estar en otros espacios, apropiarnos de ellos y compartir, enseñar y estar con las demás compañeras de la comunidad” (Y.Y. García, comunicación personal, 24 de abril de 2022). El deporte, por lo tanto, también es una herramienta importante para la transformación social y el cambio cultural hacia la equidad de género.

Figura 31
Juego de mujeres.



Figura 32
Equipo femenino El Tabor.



La cultura se encuentra presente en todos los aspectos de la vida en la vereda, desde los modos de producción hasta la organización comunitaria, y se expresa en la vida cotidiana. En particular, la práctica del deporte es una de las expresiones culturales más significativas, ya que a través de ella se construyen relaciones que favorecen la integración comunitaria y refuerzan la identidad cultural. Al crear un sentido de pertenencia, fomenta el respeto y la convivencia, y sirve como pretexto para el festejo y el deporte se ha convertido en una herramienta poderosa para la promoción de la cultura y la construcción de una comunidad más unida.

4.4 “Campesinos trabajando en sus altares”: dimensión productiva

En la mayoría de las comunidades rurales del país, la economía campesina es por excelencia es una economía de subsistencia. Es decir, gran parte de la producción en las fincas se destina al autoconsumo y algunos excedentes se dejan para los mercados local y regional. El trabajo es aportado en su mayoría por la misma familia y el costo de producción no exige una gran inversión en dinero más si en trabajo. No obstante, este tipo de economía de subsistencia dista de la lógica del capital pues no busca la acumulación y el enriquecimiento, pero sí la reproducción material y simbólica de la vida.

Los habitantes de El Tabor sustentan su economía principalmente en el cultivo de la caña, frijol y tomate; también la ganadería, una producción diversa de alimentos para el autoconsumo y algunos pocos se dedican a prestar sus servicios en otras unidades productivas como jornaleros, por lo general dentro de la misma vereda. La mayoría son propietarios de sus predios que, como ya se mencionó oscilan entre 1 y 4 ha.; aunque la Unidad Agrícola Familiar UAF¹⁷ para el municipio de Granada está establecida entre 3 y 5 ha. Estas unidades productivas están muy por debajo del área mínima establecida con excepción de dos o tres predios que en la vereda tienen una mayor vocación ganadera. Quienes no son propietarios viven en calidad de agregados.

Hasta los años 90 la vereda el Tabor se destacaba por tener una vocación cafetera, de ahí que el Comité de Cafeteros estuviese tan presente como institución en la vereda, aportando recursos para el mejoramiento de la infraestructura comunitaria. El tránsito del café a la caña obedeció a dos factores. El primero de ellos relacionado con la proliferación de plagas y el alto costo de los insumos, y el segundo, que ha sido la razón principal del cambio de vocación, fue debido al desplazamiento ya que muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus cafeteras pues “usted sabe que el cafecito siempre hay que estar al pie, abonándolo, uno no lo puede descuidar, no es como la caña, que se coge rastrojo y daba” (P.P. Aristizábal, Chocolatada, 28 de noviembre de 2021), de manera que al retornar a sus fincas los cafetales, las casas y demás cultivos estaban perdidos y enrastrados, mientras que la caña había soportado las condiciones de abandono convirtiéndose en la opción económica para las familias y haciendo de esta el primer renglón productivo en la vereda.

¹⁷ La Unidad Agrícola Familiar UAF es una herramienta de la política pública utilizada para la titulación de tierras que se concretó a través de las reformas agrarias de los años 60, hace alusión al área mínima establecida en las áreas rurales en el país que, de acuerdo a las condiciones del entorno y las variables sociales y económicas, le permite a la familia rural remunerar su trabajo, obtener excedentes y vivir dignamente (Botia-Carreño, 2019)

Para la siembra de la caña se requiere preparar el terreno mediante la tumba y quema del área; esta práctica es muy común ya que es rápida y no requiere una gran inversión. La semilla más común en la vereda es la “blanquita o monita”, la cual fue introducida en la zona hace varias décadas y han apropiado, conservado e intercambiado con vecinos a través del tiempo; aunque manejan otras variedades como la morada, la RD o la barbuda introducidas por técnicos o proyectos externos, prefieren mantener la semilla “monita” que está mejor adaptada a las condiciones del terreno, el clima y les da mejores rendimientos. En cuanto a la siembra, se emplea la técnica por estaca que consiste en cortar los colinos y se siembra de manera zurqueada o mateada y se mezcla con otros cultivos como el plátano. El deshierbe y abono se hace ocasionalmente y la cosecha se obtiene entre 16 y 18 meses después de sembrado. Dado que suelen tener varios lotes y hacer cortes escalonados esto les permite tener una producción permanente y garantizar ingresos económicos durante el año.

Casi todos cuentan con una ramada, no hay un trapiche o ramada comunitaria debido a la dispersión de las viviendas, aunque algunos familiares y amigos comparten la ramada no tienen una vocación asociativa gremial y menos empresarial. Muy pocos productores de la vereda se encuentran asociados a la Asociación de Paneleros Unidos de Granada ASOPUNGRA, quienes están allí obtienen asistencia técnica, insumos, maquinaria y eventualmente incentivos económicos, pero la gran mayoría prefiere mantenerse al margen y trabajar de manera autónoma.

Como ya se anotó, la finca no es solo una fuente de ingresos o un lugar de trabajo, es el hogar de la familia y representa una conexión emocional y cultural con la tierra. Es el lugar donde los “campesinos [trabajan] en sus altares, no un hay altar más hermoso que ver un sembrado de papa bien florecido, la caña bien espigada, las cafeteras bien hermosas echando las flores” (P. Giraldo, comunicación personal, 24 de abril de 2022), la finca es un lugar sagrado para los campesinos y sus familias. Es un lugar donde se cultiva la tierra con amor y dedicación, donde se enseña y se aprende, y donde se construyen relaciones sólidas y duraderas con la comunidad.

El trabajo en las fincas es ejecutado por la misma familia. En la ramada todos tienen un rol dentro de la molienda: el metecaña, el desbagazador, el fogonero y el contrahornero; como mínimo se requieren cuatro personas y cuando la fuerza de trabajo no es posible cubrirla con los miembros de la familia, se acude a los vecinos en calidad de jornaleros, a quienes se les paga el día de trabajo o jornal, se les alimenta bien y se les da una paca de panela.

Figura 33

Roles dentro del proceso de producción panelera.



Dependiendo de la cantidad de tajos que se tenga sembrado de caña se define la periodicidad de la molienda, unos muelen cada 8 o 15 días y otros cada mes; una de las ventajas es que la caña puede cortarse y almacenarse por varios meses para ser molida. El proceso consiste en pasar la caña en el molino, retirar el bagazo y cuando haya suficiente guarapo en las pailas se prende el fogón. En el proceso no se pierde nada, el bagazo sirve como combustible para el fogón y la cachaza se cocina y sirve de alimento para las vacas. Cuando el guarapo empieza a hervir le aplican aceite de higuerrillo para bajarle la espuma, le aplican balso y a veces bicarbonato para limpiar la cachaza, pero en general la panela que producen es muy natural y no contiene químicos. El guarapo pasa de paila a paila y en la última, cuando ya se forma la melaza, la van pasando a un recipiente y luego la sirven en los moldes, se espera a que se enfríe y posteriormente se embolsa y empaca, “su producción se realiza mediante procesos artesanales en los que prevalece una alta intensidad de trabajo familiar y muy bajos niveles de mecanización o inversión de capital” (Quintero et al, 2019, p. 102), lo que hace que para estas familias sea una gran alternativa el cultivo de la caña y la

producción de panela en tanto les permite mantener cierto nivel de autonomía frente a las exigencias del mercado.

La comercialización de la panela la tienen asegurada en Granada y otros municipios cercanos como El Santuario, Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral y Medellín. Productores de la vereda participan del mercado campesino que se lleva a cabo el primer sábado de cada mes en el centro comercial Gran Plaza -centro de Medellín- donde se vende la panela y la panela pulverizada. Como ya se dijo, las moliendas se hacen cada ocho o 15 días dependiendo de la cantidad de caña que se disponga y aunque es un trabajo que se hace desde la noche anterior –así lo prefieren porque así lo aprendieron, rinde más y acaban más temprano- no requiere tanta dedicación y trabajo como el café y muelen cuando pueden y tienen caña para moler.

Los productores de panela han enfrentado la presión del modelo neoliberal que través de dispositivos que exigen el cumplimiento de ciertas condiciones exigidas por el INVIMA para producir la panela o el uso de determinadas semillas por el ICA, ven amenazada su permanencia y dedicación a la actividad productiva. Pese a ello, continúan produciendo panela de la forma tradicional en entables con poca tecnología y usando las semillas de su preferencia

A esta actividad también se suman las mujeres, no sólo preparando la comida para quienes están al frente de la molienda, sino también en el proceso de empaclado y en la producción de derivados de la caña como el “blanquiado” o “tirado”, el “chirrinche” y las panelitas. Si bien el cultivo de la caña y la producción de panela es la fuente de ingresos principal para las familias, la economía del hogar se complementa con otras actividades productivas como el cultivo del frijol, el plátano, la yuca, el tomate y el ganado con fines doble propósito. Su comercialización está garantizada en Granada y Medellín y una parte se deja para el autoconsumo e intercambio con los vecinos “aquí siempre tenemos algo para intercambiar, mejor dicho, hacer trueque (...) yo les doy panela, ellos me traen queso y así” (A.I. Giraldo, conversación personal, 22 de mayo de 2021).

El aporte de las mujeres a la economía del hogar y al trabajo en la finca es muy importante. Su labor se suma a la ya actividad principal de la producción de panela, ya sea manejando especies menores, criando pollos y vendiendo huevos, elaborando artesanías para terceros, desarrollando iniciativas de transformación de la fruta en mermeladas para la venta, y elaborando y vendiendo comidas en los espacios de integración y encuentros comunitarios.

4.5 El ámbito comunitario como una forma de vida posible

Recorrer las particularidades del modo de vida campesina en la vereda El Tabor da cuenta de cómo éstas están interconectadas con el territorio, las prácticas culturales, la organización comunitaria, los medios de producción y los conocimientos y técnicas propias que han construido sus habitantes en relación con su entorno y entre sí, prácticas y significados que se construyen y recrean en la cotidianidad.

La posibilidad del modo de vida campesina se despliega gracias a la comunidad, es decir, su materialidad ocurre en el ámbito de lo comunitario. En El Tabor el sentido de lo comunitario está definido por “trabajar juntos, compartir, hacer el convite, ser solidarios” (Acercamiento a la comunidad, 15 de noviembre de 2020). Lejos de pensar que la comunidad hace alusión a un estado idílico o puro, la comunidad reconoce la potencialidad que tiene la diferencia:

El solo hecho de estar integrados y tantas personas de diversos pensamientos, sentires y pensares es muy bonito (...) pensamos distinto, pero podemos compartir un mismo espacio, así no compartamos algunos conceptos, algunas ideas de la vida, pero, se puede estar junticos, así las diferencias nos separen a veces (Y.Y. García, comunicación personal, 24 de abril de 2022).

Es así como la noción de lo comunitario se asume como una clave interpretativa que da cuenta de la dimensión socio-territorial en la cual se tejen y construyen las relaciones sociales –no exentas de conflicto- y se organiza la vida social mediada por vínculos y valores como la solidaridad, la reciprocidad, el trabajo colectivo y el bien común. Así pues, en línea con lo planteado con Gutiérrez y Salazar (2019), lo comunitario se refiere a una forma de establecer y organizar relaciones sociales basadas en la “compartencia” y la cooperación. Esto significa que los miembros de una comunidad trabajan juntos y comparten responsabilidades para garantizar la reproducción de su vida social y la producción material y simbólica necesaria para garantizar su vida biológica y social a largo plazo. En este sentido, lo comunitario implica la capacidad autónoma, autodeterminada y autorregulada de la comunidad para tomar decisiones sobre su propio destino y asegurar su bienestar colectivo.

En lo comunitario subsisten tramas asociativas que buscan cuidar y defender la vida; entre esas tramas asociativas, los vínculos familiares y comunitarios característicos de las poblaciones campesinas se constituyen en su manera de reproducir su existencia. Los procesos que buscan la reproducción de la vida comunitaria se basan en el cuidado y producción de múltiples vínculos y valores de uso que garantizan la satisfacción de variadas necesidades humanas y sociales. Este tipo de vínculos es posible identificarlos en las relaciones sociales que emergen desde los entramados comunitarios, pues la producción de la riqueza material o de los bienes comunes gira en torno a las relaciones comunitarias (Gutiérrez, 2018b).

En la comunidad de El Tabor, los entramados comunitarios tienen lugar a través de las prácticas colectivas que se expresan en los espacios de coordinación de las actividades (los comités), espacios de decisión y concertación (la asamblea comunitaria y la JAC), los espacios de trabajo colectivo y familiar (el convite y la ramada) y los espacios para la integración y el disfrute (el juego y las festividades); estos espacios institucionalizados en la vereda pueden asemejarse con las características y rasgos que en las comunidades ancestrales oaxaqueñas entienden como la asamblea, el cargo, el tequio y la fiesta (Esteva & Guerrero, 2018; Gutiérrez 2018a; Gutiérrez, 2018b; Ramírez, L. 2021), que si bien no tienen esa connotación ancestral y espiritual sin duda coadyuvan a entender las formas comunitarias de la producción de lo común como una forma concreta de existencia.

En el ámbito de lo comunitario emerge la potencia para rastrear e identificar formas de vivir bien que no necesariamente están medidas por la racionalidad económica. También es el espacio donde se expresan formas de vivir por fuera de la lógica de la guerra con un fuerte sentido de pertenencia al territorio que tienen lugar en lo cotidiano. Las prácticas productivas sustentadas en el trabajo familiar, y a veces comunitario, son irreductibles a una simple lógica mediada por la relación del capital; aunque en ellas pueden coexistir lógicas del mercado al circular la producción de la panela y hortalizas en el mercado local y regional para obtener ingresos que permitan adquirir lo que no produce la finca. En lugar de enfocarse en una sola actividad o cultivo, pueden producir diferentes tipos de alimentos y productos para el autoconsumo y para la venta. De esta manera, no dependen completamente de una sola fuente de ingresos y tienen más control sobre su economía.

Las familias manejan cierta autonomía e independencia a la hora de producir pues muelen la caña de manera escalonada, a sus ritmos y tiempos, y no lo hacen únicamente con fines de acumulación y enriquecimiento; así tienen una perspectiva más amplia y a largo plazo en la toma

de decisiones. De esta manera, no solo buscan obtener ingresos, sino también satisfacer sus necesidades de autoconsumo, conservar sus recursos naturales y preservar sus tradiciones y cultura.

Esta resistencia a la lógica del mercado puede ser favorable a la sostenibilidad económica y social de las comunidades rurales. Al producir para satisfacer las necesidades de autoconsumo y para el mercado local y regional, las familias campesinas pueden generar una economía más diversificada y resiliente. En este sentido, al no estar completamente subsumidos a la lógica del capital también se convierte en una estrategia de adaptación y resistencia frente a los cambios globales y a la presión de los mercados.

En conclusión, el modo de producción en la vereda, al no depender completamente del mercado, les permite mantener ciertos niveles de autonomía y libertad respecto a los modos de producción neoliberales; sus prácticas productivas pueden entonces configurar alternativas al patrón mundial de poder (Quijano, 2014). Este horizonte decolonizador también se avizora en la relación que establece la comunidad con la naturaleza trascendiendo la concepción antropocéntrica en la cual la naturaleza es sólo una fuente de recursos a explotar. Dicha relación con el “terruño” está mediada por los afectos, por la experiencia y la sociabilidad; la naturaleza no sólo es el sustento sino una fuente de vida, por eso es respetada y valorada.

Así mismo, las tramas comunitarias que se materializan en formas de organización como la JAC y los comités permiten entrever formas participativas, democráticas y consensuadas a la hora de tomar decisiones sobre los asuntos que les atañen -pese a la instrumentalización de estos organismos por parte de la institucionalidad-, pues desde allí se busca el bienestar común y se promueve la solidaridad y la reciprocidad, contrario al individualismo y a las relaciones de dominación y explotación que siembra el sistema mundial de poder.

Muchas de prácticas y saberes se ven amenazados a la luz de las orientaciones de técnicos y expertos que deciden sobre qué semilla sembrar, qué proyecto ejecutar, qué actividad realizar o qué prácticas deben incorporar con la promesa de hacerlos más productivos y rentables; algunos elementos externos son eventualmente incorporados, y pese a la presión externa, los saberes se conservan y se transmiten de generación en generación ya que hacen parte de su acervo cultural demostrando que estos son funcionales a sus necesidades y pueden representar alternativas al desarrollo. Se trata pues de incorporar lo que llega de afuera sin que se destruya lo propio, “conservarse cambiando, cambiar para permanecer y perdurar” (Esteva, 2015, p. 185; Esteva & Guerrero, 2018).

La población campesina ha enfrentado históricamente la expropiación de sus tierras y recursos, así como la marginación y discriminación por parte de los sistemas, sociales, culturales, políticos y económicos dominantes, a través de los cuales se despliega el patrón mundial de poder. La construcción de la subjetividad campesina como sujeto vergonzante ha contribuido a que en la sociedad mayoritaria haya un desprecio hacia lo campesino, en tanto se impone la razón hegemónica anglo-eurocéntrica según cual esta población se sitúa en el atraso. Por lo tanto, se vuelve imperativo su transformación hacia la modernidad y hacia el “desarrollo”, a la vez que se invisibiliza y se subvalora el modo de vida campesina.

Históricamente ha habido una falta de reconocimiento de la riqueza cultural, emocional y comunitaria que se encuentra en la vida rural campesina debido a la imposición del proyecto colonial, la lógica capitalista y los dispositivos a través de los cuales se refuerza el patrón mundial de poder que excluye, subordina, margina, construye subjetividades subalternas — “pensábamos que éramos pobres” —, imponiendo un ideal de progreso, de desarrollo.

La fuerza de esos dispositivos tecnológicos, culturales, políticos, económicos e institucionales es tal que los sujetos terminan asimilando y creyendo que son pobres y que deben emprender la transformación hacia el desarrollo y aspirar a ser lo que no son. La colonialidad del ser, anclada en la idea de una diferenciación natural entre sujetos, es decir, en la idea de raza y la inferiorización de la cultura humana colonizada (Maldonado-Torres, 2007), ha provocado que la población campesina -como muchos otros sujetos oprimidos y subalternizados- interiorice en lo más profundo de su ser una subjetividad construida desde afuera que es útil a la dominación (Guerrero, 2010), imponiendo en sus imaginarios estereotipos que terminan reforzando y reproduciendo la colonialidad en todas sus dimensiones. De este modo, la subjetividad campesina ha sido construida como inferior y subordinada a la del hombre blanco-urbano-moderno-desarrollado, y su conocimiento y formas de vida han sido desvalorizadas e invisibilizadas.

La región del oriente antioqueño ha enfrentado una presión creciente desde el fin de la conflictividad armada, con la expansión de la agroindustria, la explotación de servicios ecosistémicos y el extractivismo minero energético (Pineda & Valencia, 2022) Recientemente, el municipio de Granada ha visto la llegada de inversores en busca de tierras para establecer fincas productoras de aguacate Hass para la exportación. Es así como en la vereda Tafetanes, vecina de El Tabor, el 50% de las tierras han sido adquiridas por solo dos personas con este propósito. Muchos temen que esto pueda ser catastrófico, ya que pone en riesgo el entramado comunitario.

Afortunadamente, en la vereda El Tabor, todavía existe un arraigo a la comunidad y se reconoce el valor de la tierra para el bienestar común, “porque uno coge y le dice venga ¿y usted porque no vende su finquita? No, no, no porque es que mi finquita vale oro por la comunidad, expresiones que a uno lo dejan [...] mejor dicho, *por la comunidad*” (L. Quintero, comunicación personal, 3 de octubre de 2022); ello da cuenta de que el vínculo del campesino con la tierra es principalmente una relación social que se teje en comunidad. Las formas de producción basadas en la familia y la comunidad tienen como objetivo la reproducción de la vida en comunidad y están centradas en los valores de uso y no de cambio.

El arraigo -el vínculo profundo de las personas con su tierra y su comunidad- fue lo que hizo que muchas familias se resistieran a abandonar su forma de vida, incluso en los momentos más difíciles y de zozobra a causa del conflicto; y así como la caña que aguanta, resiste y se adapta, la comunidad reactualizó sus prácticas productivas y a través del trabajo colaborativo, promovido desde la organización comunitaria y el deporte, ha logrado la reconstrucción del tejido social y de sus modos de vida. Cuidar, defender y reivindicar su modo de vida se ha convertido también en un acto emancipatorio y como una forma de descolonizarse a sí mismos en la manera de autonombrarse –“éramos ricos y no lo sabíamos”-, el afrontamiento de los efectos del conflicto, experimentar el desplazamiento y el desarraigo ha contribuido a romper el imaginario del campesino empobrecido, carente y necesitado de ayuda.

La violencia y el conflicto armado que afectó a la comunidad de El Tabor tuvo profundas consecuencias en la vida cotidiana de sus habitantes. Las relaciones comunitarias se vieron dañadas, las prácticas productivas sufrieron y la transmisión de conocimientos intergeneracionales se vio interrumpida. Incluso los espacios para la socialización y el encuentro, como los convites, los juegos y las celebraciones, se vieron resquebrajados. Transitar esta experiencia ha llevado a los habitantes de El Tabor a valorar y reconocer sus saberes, prácticas y formas de vida; a resignificar la noción de riqueza y comprenderla más allá de la acumulación y del tener, situándola más en el plano del ser y de la experiencia. Allí la riqueza es el vínculo entre las personas y la relación con la naturaleza, el aire puro, el agua, y lo que les da el campo para vivir dignamente; por eso es por lo que en la expresión “éramos ricos y no lo sabíamos y nosotros pensando que éramos pobres” (H. de. J. Álvarez, comunicación personal, 14 de agosto de 2022) se advierte el cimiento para transgredir el imaginario que ha impuesto el paradigma moderno colonial.

Sin duda el espejismo de la modernidad a la que se enfrentan los jóvenes de la vereda es y seguirá siendo un reto para la comunidad. Una de sus preocupaciones es que los jóvenes migren hacia las ciudades por no encontrar posibilidades para su realización dentro del campo. Algunos de los jóvenes y adultos que se fueron siendo niños durante el desplazamiento perdieron su relación con el modo de vida campesina, aunque sus padres hayan retornado y persistan vínculos con el territorio, no son un grupo que vaya a continuar el legado de sus padres. Sin embargo, hay un grupo significativo dentro de la comunidad que experimentaron la vida por fuera de la vereda, ya sea por el desplazamiento o por tratar de labrarse un destino diferente,

Uno como joven, a usted lo convidan [...] un primo me convido para trabajar en la ciudad, teniendo yo 20 años, trabaje tres meses. Pero la verdad, no, yo vi que eso no fue la vida para mí [...] me volví para el campo [...] la verdad viene uno con más ganas. (R. Ríos, comunicación personal, 24 de abril de 2022)

O porque experimentaron ambas realidades, el desplazamiento y la ilusión de una vida mejor en la ciudad, haciendo reafirmar el arraigo y la pertenencia al territorio. De las 45 familias que habitan actualmente la vereda, 18 están conformadas por padres y madres jóvenes con hijos en edades entre los 1 y 15 años, que decidieron continuar y permanecer allí. Esto abre un horizonte esperanzador para las personas más adultas de que su legado no se pierda; de ahí que en el marco de este trabajo recuperar la historia de la vereda y fomentar las prácticas comunitarias se convirtieron en una estrategia para promover en los más jóvenes el vínculo con la comunidad y el sentido de pertenencia. A través de estos esfuerzos, se espera que los jóvenes aprendan a valorar y respetar la riqueza de la vida rural y decidan continuar el legado de sus padres y abuelos.

Adicionalmente, en el taller realizado con los niños y las niñas de la escuela para indagar cómo y dónde se imaginaban cuando fueran mayores fue significativo que la gran mayoría se visualizara habitando su vereda y ejerciendo en ella los sueños de ser veterinario, maestra y “estar entre los animales en el campo”. Esta visión de futuro un tanto esperanzadora contrasta con la mirada que tienen las personas adultas y el desafío que representa la permanencia de los jóvenes en el campo. Sostienen que cada vez es más difícil encontrar trabajadores y ya no se produce tanta y variada comida como antes. Sin embargo, también saben leer el contexto y reconocen que los cambios de la sociedad actual -representados en el alto precio de los alimentos, los abonos, los

efectos del calentamiento global, entre otros que se aúnan a la crisis civilizatoria- harán que necesariamente se vuelva la mirada al campo y a lo comunitario, no sólo como categoría sino como una realidad empírica.

El confinamiento al que estuvo sometido la humanidad a causa de la pandemia del Covid-19 exacerbó las desigualdades y evidenció el hambre que padecen las personas en las ciudades. La experiencia de la pandemia fue llevadera en la vereda, si bien hubo algunos meses en que no se hicieron encuentros en la cancha y la escuela por temor al contagio, el miedo fue rápidamente superado y primaron las ganas de estar reunidos como comunidad. No se sintieron afectados porque en la vereda no falta la yuca, el plátano, el fríjol y la panela: “tenemos un pedacito de cielo en la tierra”, “la tierra nos lo da todo” y “acá nos sentimos libres, seguros y rodeados de naturaleza” (Conversación personal grupal, noviembre 15 de 2020); razones por las cuales no sintieron el confinamiento. Por el contrario, muchas familias se sumaron solidariamente en la recolección de alimentos producidos en la vereda para enviar a las familias más necesitadas del pueblo (A.I. Giraldo, comunicación personal, enero 13 de 2023). Ante esta situación, creen que volver a sembrar, guardar en el zarzo e intercambiar con los vecinos como hacían los abuelos podría ser una solución para enfrentar la crisis. Así pues, el modo de vida campesina “es el único camino que le queda a la sociedad mundial, sociedad que ha perdido toda integridad natural en sus modelos de vida” (Martínez Luna, 2015, p. 107).

En este sentido, recuperar la convivencialidad (Illich, 1978), volver a lo simple, y reencontrar nuevamente la dimensión comunitaria hará posible la reproducción de lo social; se trata de reconocer la capacidad autónoma del ser humano de relacionarse con su entorno, satisfacer sus necesidades de manera proporcional y en compañía con otros para enfrentarse al mundo, encontrando “los límites a lo necesario y deseable en un entorno natural y social que también es limitado” (Alonso, 2022, p. 653). La pandemia también generó que aquellos que se fueron y que aún conservan algún vínculo con la vereda, reformaran casas de padres y abuelos o compraran lotes para la construcción de viviendas nuevas destinadas al descanso y la recreación; lo que puede ser un riesgo potencial para la vocación agrícola de la vereda, pero que también puede ser aprovechado para que quienes llegan, o vuelven, participen y se vinculen a los encuentros deportivos y comunitarios.

En este sentido, es importante valorar y respetar la riqueza de la vida rural y reconocer que la permanencia de los jóvenes en el campo es fundamental para asegurar el futuro de estas

comunidades. Por eso la educación y transmisión de conocimientos en esta comunidad es más que la simple reproducción de un oficio, es la trascendencia hacia otros espacios de la vida diaria. Desde la familia, se empeñan en transmitir haceres y saberes a través del ejemplo, cimentando vínculos comunitarios en cada actividad que realizan.

La práctica del deporte no solo fomenta la actividad física, sino que también incentiva la sociabilidad y el trabajo en equipo, valores fundamentales para la construcción y la reproducción de una vida en comunidad. Por consiguiente, la educación no solo es responsabilidad de las escuelas y maestros, sino también de las familias y comunidades que se esfuerzan por enseñar a las nuevas generaciones el valor del trabajo, el compromiso y la solidaridad,

téngalo por seguro que a uno los hijos, ven al papá jugando, eso es algo de que mientras el hijo está pequeño, uno está jugando en la cancha, el niño está por ahí viendo, va a crecer, siguen el ejemplo de uno, porque es algo de que uno ve que como que ejemplo arrastra. Aquí en esta vereda queda muy fácil para uno retomar eso, que vayan cultivando, ya uno va llegando la hora de que ya, los años van llegando, pero los hijos si Dios quiera vuelven a retomar esas tradiciones que no se pierdan. (R. Ríos, comunicación personal, 24 de abril de 2022)

No se trata solo de un relevo generacional sino también de la vinculación intergeneracional a una serie de prácticas que permiten la reproducción de la vida en común, de una vida digna, donde para la comunidad de El Tabor “vivir bien es tener tranquilidad y tener salud, y si tiene salud, se tiene la mayor riqueza” (A. de J. Quintero, conversación personal, 5 de junio de 2022), donde la paz se vive “jugando, charlando [la paz] es tener tranquilidad espiritual. Es venir a la cancha, eso nos hace sentir bien y tranquilos” (Y.L. Quintero, conversación personal, 5 de junio de 2022).

Las practicas comunitarias cotidianas en torno al deporte, al cultivo, a la integración, entre otras, en su reiteración, configuran la producción de la comunidad donde no sólo se reconstituyen los vínculos que afectó la violencia (Castillejo-Cuéllar, 2019; Ramírez, L. 2021), sino que se reactualizan y afianzan los lazos comunitarios constitutivos de la comunidad de El Tabor. Es así como la paz se crea y recrea en los escenarios a pequeña escala, en lo cotidiano, en el “picado”, en el convite, en la misa, en el paso al río, en la ramada, en consecuencia,

la paz también se configura con la producción de espacios, proyectos sociales a pequeña escala donde se recupera la proximidad del otro, perdida en la confrontación. Son en estas microescalas donde se situarán las esperanzas de cocrear una idea de futuro, por supuesto, encuadradas por instituciones concretas y prácticas diversas” (Castillejo-Cuéllar, 2017, p. 6).

Desde la perspectiva decolonial e intercultural, que cuestiona las ideologías modernas, capitalistas, patriarcales y coloniales, se plantea la existencia de una mirada sesgada que desconoce, subestima e invisibiliza procesos materiales y simbólicos que ocurren en el ámbito comunitario. En este contexto, se destaca la importancia de reconocer y valorar los procesos comunitarios que se desarrollan bajo situaciones de presiones y amenazas externas. Un ejemplo de ello es la persistencia de las comunidades campesinas, que han resistido y adaptado sus modos de vida a pesar de las presiones del modelo de desarrollo neoliberal basado en la explotación minero-energética y en la expansión de la agroindustria, así como del conflicto armado. Es importante señalar que la mirada hegemónica ha pronosticado el fin del campesinado, pero éste sigue siendo relevante, puede aportar mucho a la crisis civilizatoria actual y sobre todo sigue existiendo como una realidad social y política de la sociedad moderna (Rincon, 2020).

En consecuencia, se sugiere la necesidad de superar las visiones sesgadas que se enfocan únicamente en la producción y acumulación de capital, y en su lugar, valorar y fortalecer los procesos comunitarios, así como los valores de solidaridad y lo colectivo que los sustentan. Al hacerlo, se fomentaría una visión más amplia y justa de la sociedad, que tenga en cuenta las diversas realidades y potenciales transformadores que existen a nivel comunitario.

La pacificación del Oriente antioqueño por la vía militar tuvo un costo humano altísimo; y aunque hoy se goza de cierta tranquilidad, el problema de la seguridad y la violencia no está resuelto, y menos las causas estructurales de dicha violencia. De ahí que la comunidad se esfuerza por construir y mantener relaciones armónicas, por recrear formas de vivir dignamente y en paz. Para la comunidad de El Tabor el bienestar está más allá de lo que el desarrollo impone. Aquí la noción de riqueza se resignifica y trasciende el enfoque de la acumulación. La economía no es el centro de la vida, son los vínculos que se construyen en comunidad conectándose los unos a los otros y “conformando una gran familia” (A.I Giraldo, comunicación personal, 14 de agosto de

2022). Son formas de ser, estar, vivir y convivir de manera pacífica a partir de sus prácticas y haceres comunitarios.

Para los habitantes de El Tabor, la paz está profundamente ligada a la comunidad; es una construcción que sólo es posible en el ámbito de lo comunitario “la paz la construimos todos [...] desde la vereda, [desde la comunidad, y] estar en comunidad es trabajar juntos, ser solidarios, compartir y sentir el dolor del otro” (Conversación personal grupal, noviembre 15 de 2020). “La paz es una práctica diaria” (Courtheyn, 2019, p. 302), de trabajo solidario, familiar y comunitario, que se crea y recrea en la cotidianidad (Richmond, 2011).

La noción de la paz para la comunidad no necesariamente se limita al establecimiento del orden y la seguridad que brinda el Estado con su fuerza pública ni a la ausencia de conflicto armado. Se trata de una paz que abarca la reconciliación entre las personas y la naturaleza, la recuperación de las relaciones comunitarias y la valoración de la vida campesina y de los saberes y prácticas ancestrales. Esta forma de comprender la paz conlleva el reconocimiento de “subjetividades y materialidades de y para la paz” en contraste con las representaciones coloniales y hegemónicas sobre la paz; se trata de pensar la paz desde una perspectiva intercultural y decolonial que incluye y valora las variadas y creativas formas de construir pazes otras en los territorios (Vásquez Arenas, 2020).

Es una paz que promueve la inclusión y la equidad, donde los jóvenes, las mujeres y las nuevas generaciones tienen un papel importante en la construcción de un futuro y en la continuidad de las prácticas y modos de vida campesina. La promoción de estos valores y formas de vida puede contribuir de forma significativa a la construcción de alternativas al modelo colonial y extractivista que ha caracterizado la historia de la región. En un mundo donde se impone el individualismo, se ha mercantilizado la vida y la naturaleza -con consecuencias irreparables para el planeta poniendo en riesgo incluso nuestra propia existencia-, se vuelve un imperativo recomponer los vínculos sociales y reivindicar los ámbitos de lo comunitario y reconocerlos como una forma concreta de existencia (Torres, 2003; Esteva & Guerrero, 2018).

El retorno a la comunidad (Torres, 2013) que para este caso particular se expresa en los modos de vida campesina, implica reconocer el proceso intersubjetivo que se gesta a partir del ser con otros - “se puede estar junticos, así las diferencias no separen a veces” (Y.Y. García, comunicación personal, 24 de abril de 2022)- y generar desde allí valores e intereses comunes, pero sobre todo una proyección de futuro. Los habitantes de El Tabor desean ver poblada su vereda,

anhelan la llegada de más familias para que se unan a la gran comunidad que construyen día tras día. Buscan rescatar los valores y tradiciones que los han definido y que las futuras generaciones puedan mantener su legado de unión, integración y trabajo comunitario.

El mantenimiento del modo de vida campesina se constituye a la vez en un acto de resistencia y en un desafío para sus habitantes en un escenario que tiende a complejizarse por las condiciones de seguridad y el reacomodamiento de estructuras criminales y de autodefensa que están haciendo presencia en la región. Por esta razón, se esfuerzan en mantener los vínculos comunitarios y reforzar las relaciones de solidaridad, reciprocidad y trabajo colectivo. El reto es

(...) para las líderes de cada comunidad, que promuevan el deporte, incentiven el deporte, los juegos de mesa, los juegos donde integren los niños, los jóvenes. Que creen espacios donde ellos se sientan seguros, que se sientan tranquilos. El deporte les genera salud y cosas nuevas que les puede aprovechar mucho más. A las nuevas generaciones que se integren, que no se sientan esquivos, ni ajenos a estos espacios que son de ellos, que se apropien más de ellos para que los disfruten y ayuden a los adultos a seguir adelante y aprender de ellos también. (Y.Y. García, comunicación personal, 24 de abril de 2022)

La aspiración es vivir de manera digna, tranquila y en paz, sin la angustia de tener que abandonar su territorio nuevamente. Su apuesta es hacer todo lo posible por alcanzar esta visión y asegurar el futuro de su querida vereda, por eso el llamado a los jóvenes

es que amen su tierra, que se sientan orgullosos de pertenecer a esta vereda, que ha sido un ejemplo en el municipio, nos llena de alegría que todo el mundo hable bien de El Tabor, de la unión, entonces que rico que ellos sigan nuestros pasos del trabajo comunitario, [y] vean un referente bonito de sus padres y abuelos, que las cosas se pueden hacer bien y que hay grandes oportunidades también en el campo. (A.I. Giraldo, comunicación personal, 14 de agosto de 2022).

Para la comunidad de El Tabor lo más importante es poder seguir siendo quienes son y que se reconozca el modo de vida campesina como una forma de vida posible.

5 Las prácticas comunitarias como formas de *inter-versión*

En lo recorrido hasta ahora podemos observar como la vereda El Tabor se halla inmersa en un contexto que ha sido objeto de múltiples intervenciones agenciadas por diferentes actores de diversa naturaleza. Entre ellas, se destacan las intervenciones estatales a través de megaproyectos para el desarrollo, así como las acciones humanitarias en el contexto del conflicto armado. Igualmente, se han llevado a cabo intervenciones producidas desde el orden local, nacional e internacional con el fin de acompañar a las personas víctimas del desplazamiento y en la restitución de sus condiciones de vida, así como de brindar apoyo psicosocial después del desescalamiento del conflicto. Simultáneamente a lo anterior, también es importante destacar las prácticas y acciones que la comunidad ha mantenido a lo largo de su historia, con o sin el acompañamiento institucional. En este sentido, este apartado busca analizar dichas intervenciones y resaltar las prácticas comunitarias de la vereda El Tabor como formas de *inter-versión*, concepto que se explorará al final de este capítulo, y cómo éstas se constituyen en estrategias que dignifican la vida y aportan a la construcción de pazes otras.

5.1 Las intervenciones de desarrollo, de los actores armados y en respuesta al conflicto

Durante décadas, el Oriente antioqueño ha sido escenario de la implementación de diversos megaproyectos de infraestructura, como la zona franca, el aeropuerto José María Córdova, la autopista Medellín-Bogotá, la explotación minera de calizas y sobre todo de proyectos para la generación de energía. Estas iniciativas, promovidas tanto por entidades gubernamentales como por el sector privado, se presentaron como estrategias para impulsar el desarrollo y la integración de la región a la economía nacional. Sin embargo, lejos de generar bienestar para la región y sus habitantes, estos proyectos han exacerbado la desigualdad en el territorio y han beneficiado mayoritariamente al capital empresarial. En lugar de reducir las brechas sociales, han contribuido al surgimiento de conflictos armados que han acentuado la división entre el Oriente cercano y el Oriente lejano (García, 2007; García, 2008; Sánchez & Hincapié, 2021). Es evidente que la lógica detrás de estos proyectos se centra en el crecimiento económico y la expansión del capital, en lugar de priorizar el bienestar y el desarrollo equitativo de la región. Esta situación ha generado un

aumento en la desigualdad y ha perpetuado la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, en detrimento de la comunidad en general.

Las intervenciones institucionales para el desarrollo, basadas en la implementación de megaproyectos de infraestructura, fueron direccionadas desde la banca mundial (López, 2003; Gómez & Espinal, 2010). Estos organismos impusieron directrices que condicionaron la asignación de recursos para la construcción de dichos proyectos, especialmente aquellos relacionados con la explotación del recurso hídrico. Estas directrices se materializaron en marcos jurídicos y la creación de instituciones que contribuyeron a la reconfiguración del territorio.

En consecuencia, se promulgó la Ley 56 de 1981, que aseguraba la estabilidad jurídica de las intervenciones al declarar áreas de utilidad pública e interés nacional para la construcción de los proyectos. La Ley también estableció tasas retributivas e impuestos que deben pagar las empresas, entre otras disposiciones. Además, esta legislación dio origen a la creación de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE (García , 2007), una entidad encargada de administrar el territorio en función de la disponibilidad de los recursos para su ordenación y explotación.

En principio, la referida Ley ordenaba el pago del 4% de las ventas de energía en bloque, el cual debía invertirse en programas de reforestación y protección de las cuencas hidrográficas que abastecen los embalses. Actualmente, la Ley 99 de 1993 y sus modificaciones posteriores, como el artículo 222 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 644 de 2021, constituyen el marco jurídico que regula las transferencias del sector eléctrico. De acuerdo con estas regulaciones, el 6% de las ventas de energía en bloque debe distribuirse de la siguiente manera: un 3% para las corporaciones autónomas o parques nacionales, o ambas, según su participación en el área de influencia de la central de generación, y un 3% para los municipios ubicados en la cuenca que aporta al proyecto (Celsia, 2023). La finalidad de estos recursos no ha cambiado desde su motivación inicial, ya que deben destinarse a proyectos de agua potable, saneamiento básico, reforestación y protección de la cuenca aportante al proyecto. Además, solo el 10% de los recursos transferidos pueden ser utilizados por las entidades para gastos de funcionamiento.

Paradójicamente, los municipios ubicados aguas abajo de las cuencas hidrográficas, que son los más afectados por cambios en los niveles de los ríos y otras consecuencias, no reciben transferencias del sector eléctrico como sí ocurre con municipios como Marinilla y Guarne, donde no están localizados los proyectos hidroeléctricos. Sorprendentemente, a pesar de que las

generadoras más grandes del país, como EPM e ISAGEN, aportaron más de 54.330.874.012 de pesos a CORNARE en el año 2022, y han estado operando proyectos hidroeléctricos en el Oriente antioqueño durante más de 30 años, todavía hay áreas sin acceso a saneamiento básico, agua potable y con un déficit en infraestructura comunitaria, especialmente en vías terciarias. Esto revela que el interés principal no es contribuir al "desarrollo" de los territorios y sus habitantes, sino proteger la fuente de generación de riqueza que, en el caso de los proyectos de generación de energía, es el agua.

Además, las promesas de empleo que acompañaban a los grandes proyectos no han favorecido realmente a las poblaciones del territorio, sino que generaron problemas sociales y culturales debido a la llegada masiva de trabajadores foráneos a los municipios. Aquellos residentes locales que lograron conseguir empleo lo hicieron en puestos de baja categoría, lo que llevó a muchos a abandonar su vocación campesina. Sin embargo, en la etapa de operación, los empleos generados actualmente por estas empresas no son tan significativos, aunque haya representado para algunas familias mejorar sus condiciones de vida.

También dentro del contexto de la escalada del conflicto armado en el Oriente antioqueño, los actores armados se convirtieron en agentes de intervención en el territorio. Sin embargo, esta intervención se caracterizó por la coacción y la coerción hacia la población civil. Además de las situaciones ya mencionadas, como restricciones a la movilidad, confinamientos, vigilancia sobre la cantidad de alimentos por familia y control del orden social (CNMH, 2016), también se sumaron acciones en las que los habitantes fueron obligados a trabajar en la apertura y mantenimiento de vías y caminos (Cardona, Arroyave, & Ramírez, L. 2019; P.E. Giraldo, comunicación personal, 24 de abril de 2022), Asimismo, se impusieron restricciones en el uso de los recursos naturales, como la caza y la pesca indiscriminada, en aras de la protección ambiental. De ahí que vastas zonas del país hayan logrado mantenerse al margen de la explotación de recursos y por consiguiente conservarse.

Por otro lado, una de las consecuencias de la presencia generalizada de los actores armados y su impacto en la población es lo que García (2008) ha denominado la construcción subjetiva de la región¹⁸. En este proceso, los actores que anteriormente estaban en conflicto, como los

¹⁸ En su extenso estudio del Oriente antioqueño, Clara Inés García destaca que la acción armada emerge como un elemento clave que articula y cohesiona el territorio, contribuyendo a su reconfiguración a través de la construcción subjetiva y simbólica de la región por parte de los actores institucionales y de la sociedad civil que se oponen a la guerra (García, 2008).

movimientos sociales de base y el sector institucional y empresarial, se unen para formar un frente común y llevar a cabo una resistencia organizada contra los grupos armados y las situaciones límite, como la destrucción de pueblos, desplazamientos, secuestros y en general la crisis humanitaria generada por el conflicto. Estos esfuerzos contaron con el apoyo y la colaboración de la Diócesis de Sonsón Rionegro y la Gobernación de Antioquia (García y Aramburo, 2011; PNUD, 2010; CNMH, 2016; PRODEPAZ, 2023). Estos actos de resistencia colectiva posicionaron a los actores del territorio en una actitud de neutralidad, exigiendo la humanización del conflicto y logrando acercamientos y diálogos regionales con el ELN, guerrilla que redujo su accionar y liberó secuestrados como resultado de estos acercamientos.

Es así como en el ámbito regional, se consolidaron dos fuerzas representativas: por un lado, un movimiento conformado por alcaldes, asambleas locales y la Asamblea Provincial de Paz; por otro lado, la empresa privada, especialmente del sector eléctrico, en colaboración con la Diócesis de Sonsón Rionegro, dio origen en 1999 a la Corporación Programa de Desarrollo para la Paz PRODEPAZ (García & Aramburo, 2011). Estas acciones conjuntas de actores civiles e institucionales confluyen en una apuesta regional de carácter social, político y económico. Además de buscar la paz, también se enfocaron en el desarrollo del territorio. Sin duda, uno de los mayores logros de esta convergencia de diversos actores en el territorio y la apuesta regional fue el Laboratorio de Paz.

La Unión Europea UE respaldó al país en su búsqueda de la paz y superación de la pobreza y presentó un paquete de ayuda de 330 millones de euros para un período de cinco años. Este apoyo se enfocó en cuatro estrategias clave: la recuperación económica y social, el fortalecimiento institucional y desarrollo social (incluyendo atención humanitaria y desarrollo alternativo integral), el proceso de paz y la lucha contra el narcotráfico (Ramírez, A. 2004). El concepto de Laboratorio de Paz que promovió la UE en Colombia emergió de las experiencias y movimientos ciudadanos quienes a partir de las herramientas del Estado de derecho fomentaron el diálogo, la convivencia y encontraron en estrategias pacíficas de resistencia y protección de la población civil en medio del conflicto armado. Estas iniciativas, impulsadas por organizaciones sociales locales, buscaron abordar las causas fundamentales del conflicto y promover un desarrollo socioeconómico sostenible lo cual se encontraba alineado con las orientaciones que la UE quería promover en el marco de sus relaciones internacionales y la cooperación para el desarrollo sustentadas en la promoción de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el desarrollo humano

sostenible y los objetivos de desarrollo del milenio, (Castañeda, 2009) hoy Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.

Es así como en el 2003 se formaliza entre La Unión Europea y el gobierno de Colombia un convenio para financiar el II Laboratorio de Paz con un aporte de 33 millones de euros y 8.400 millones de euros, respectivamente, para desarrollarse en tres zonas del país: Pamplona, Cúcuta y Catatumbo en el Norte de Santander, Macizo Alto de Patía en el norte de Nariño y sur del Cauca y el Oriente antioqueño. En esta última región fue PRODEPAZ la entidad designada por la UE para operar el Laboratorio “por ser el actor regional no involucrado en la política partidista en que sí están los alcaldes y por tener la vena empresarial que garantiza capacidad de gestión” (García & Aramburo, 2011, p. 139). PRODEPAZ trabajó articuladamente en alianza con Municipios Asociados de la Subregión de Embalses Rionegro-Nare MASER, Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño MASORA y Municipios Unidos del Sur de Antioquia MUSA, y se ejecutaron proyectos entre el 2004 y el 2009. Como ya se anotó en el capítulo 2 de este informe, en parte la capacidad de movilización y acción colectiva de los actores del territorio fue minimizada por el gobierno guerrillero de la época que aprovechó el apoyo financiero de la UE flexibilizando su relación con esta entidad en aras de cooptar las iniciativas locales y la cooperación internacional desviando el interés a la ejecución de los proyectos priorizados por las comunidaes. El inicio del Laboratorio de paz marcaría un punto de inflexión en la manera como fue objetivada la subregión del Oriente antioqueño.

5.2 El boom de las intervenciones y la búsqueda de la paz

Durante los momentos más críticos del conflicto armado, las primeras acciones se dirigieron, de manera justificada, hacia la atención humanitaria. Específicamente en Granada, estas iniciativas fueron llevadas a cabo por el Comité Interinstitucional, la Iglesia, la Cruz Roja y el Departamento Administrativo de Prevención de Desastres DAPARD. Estas organizaciones suministraron mercados y alimentos cuando las comunidades quedaban confinadas, brindaron elementos de aseo y frazadas a los desplazados que llegaban a la cabecera municipal, y ofrecieron servicios de salud. No obstante, el mayor respaldo provino de los propios habitantes y comerciantes del municipio, así como de aquellos que se encontraban en las colonias granadinas de Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá, motivados por el espíritu solidario arraigado en la identidad granadina.

Lo cierto es que la agudización del conflicto, así como su internacionalización trajo consigo la subsecuente intervención de múltiples y diversos actores. A las acciones emprendidas localmente se sumaron acciones de variadas organizaciones de orden departamental, nacional e internacional en pro de aportar a la atención humanitaria y en la restitución de los derechos de las víctimas. Una vez que se pone en marcha la política de seguridad democrática, baja la intensidad del conflicto y se generan marcos jurídicos que facilitan la inversión de recursos públicos en el territorio (Ley de Justicia y paz, Ley de Desplazados, Ley de Víctimas, entre otras) se da un despliegue de proyectos de intervención en el Oriente antioqueño sin precedentes en la región.

Durante la ejecución del II Laboratorio de Paz, se respaldaron 35 iniciativas financiadas por la Unión Europea, y como contrapartida, el gobierno nacional, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), financió otros 111 programas con préstamos del Banco Mundial, bajo la coordinación de PRODEPAZ (PRODEPAZ, 2023).

Este periodo fue denominado por los propios pobladores como "el desfile de chalecos", en alusión a la gran cantidad de instituciones que llevaban a cabo programas que iban desde capacitaciones hasta proyectos productivos. La posibilidad de captar recursos de cooperación internacional influyó en la proliferación de organizaciones que se involucraban en diversas causas para atender las necesidades del territorio tras la disminución de las acciones bélicas.

Las consecuencias resultantes de esta situación, como señaló García (2007, 2009 y 2011) y se mencionó anteriormente, incluyen la despolitización de la acción colectiva de los actores regionales. Su enfoque de interés se desplazó de lo político hacia lo económico, ya que:

El cúmulo de las formalidades incrustadas en formatos y requisitos jurídicos y organizativos que todo actor debe llenar para competir por los recursos absorbió las energías colectivas en la elaboración de propuestas, que la mayoría de las veces no pasaron de ahí. En segundo lugar, los euros también fueron percibidos por los líderes del proceso social como el factor que cambió las prioridades del proyecto regional: ellas pasaron de políticas a económicas. Lo que ahora prima en el panorama del "proyecto regional" son los programas de seguridad alimentaria y de producción de ingresos para los desplazados por parte del Estado nacional, así como los proyectos puestos en marcha en los ámbitos del "desarrollo", de la "gobernabilidad" y de la "cultura de paz", que muchas veces se perciben como

oportunidades para la irrigación de actividades e ingresos de los municipios. (García & Aramburo, 2011, p. 183).

Es así como la racionalidad técnica instrumental se apoderó de las intervenciones de paz y desarrollo cuya lógica se orientó a cumplir metas, captar y ejecutar recursos y adelantar proyectos no siempre sostenibles. Sumado a esto, la cantidad de requisitos, trámites y formalismos exigidos por los donantes generaron frustraciones en los pobladores por retrasos en desembolsos y tiempo invertido en las diferentes iniciativas que no siempre cumplieron sus expectativas. La perspectiva de crear región se diluye en la dependencia de recursos de cooperación internacional por parte de las iniciativas locales convertidas en cazadoras de rentas mientras que la institucionalidad pública -municipal, departamental y nacional- direccionan su accionar a la consecución y aprobación de recursos más que al empoderamiento de los pobladores (Castañeda, 2009).

De otro lado, la región se perfiló como referente nacional por los diferentes programas de retorno implementados desde las instancias municipales, departamentales y nacionales como Retornar es Vivir, las Alianzas Medellín – San Carlos y Medellín – Granada y Familias en su Tierra. De hecho, fue el corregimiento de Santa Ana en Granada donde se lanzó en el 2009 la Política Pública de Retornos para la Población en Situación de Desplazamiento que recoge los lineamientos para la atención a la población retornada o reubicada. El boom publicitado como referentes de éxito desde los estamentos públicos desbordó la capacidad de respuesta de las entidades al punto de que los municipios de San Carlos, Granada y San Francisco tuvieron que declararse en emergencia por retornos y generando que las familias y personas retornadas lo hicieran sin las garantías constitucionales de voluntariedad, seguridad y dignidad; muchos de quienes ingresaron a los programas sufrieron las trabas del andamiaje burocrático que impedía respuestas y acompañamientos oportunos; esto significó que muchas familias retornaran sin ningún tipo de acompañamiento institucional; un retorno por su cuenta y riesgo pues muchas familias no tenían más opción que regresar a sus lugares de origen frente a las vicisitudes que debían afrontar en los lugares receptores de población desplazada y más grave fue que muchos de los retornos se efectuaron aun el marco de las confrontaciones armadas (Posada, Pabón, & Bahamón, 2013; Valderrama & Lopera, 2015; Ramírez, L. 2015; CNMH, 2016).

Como sostiene Gloria Quintero integrante de ASOVIDA “a muchas familias les tocó volver, retornar es otra cosa. Es tener todo integralmente, educación, salud, vivienda digna, pero

no lo tienen, porque somos números, eso somos” (Citada En: Echeverry, 2023); y en los casos en que se logró surtir el protocolo, las medidas de reparación se limitaron a la entrega de indemnizaciones e incentivos económicos a los cuales ni siquiera se les hizo seguimiento y acompañamiento. La percepción de los campesinos de Granada frente a las intervenciones orientadas al acompañamiento de la población retornada es que éstas han sido descoordinadas, no tienen continuidad, no cumplen con las expectativas ni son coherentes con las realidades de las comunidades “y en algunas oportunidades implican para ellos dedicación de tiempos y recursos que no se compensan con lo que realmente reciben” (Valderrama & Lopera, 2015, p. 117). En este caso, las expectativas de lo que ofrecía el Estado frente a la realidad y efectividad de los programas dejó un alto grado de insatisfacción en la población (Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, s.f.).

En el marco de la Ley 1148 (Ley de víctimas y restitución de tierras) se crea la Unidad de Restitución de Tierras URT cuya misión es restituir los predios despojados durante el conflicto como una forma de reconocer los derechos y de reparar a las víctimas. Entre 2014 y el 2019, la URT ha emitido 134 sentencias de restitución de tierras en Granada y en la cuenca de San Matías, donde se localiza la vereda El Tabor, hay pendientes por resolver 384. Las veredas de esta cuenca hacen parte directa o indirecta de las PCH San Matías, El Molino, La Cascada y Granada. Para la construcción de esta última, se requieren predios que fueron restituidos y que han sido objeto de proyectos productivos financiados por la URT, poniendo en riesgo la permanencia de las familias quienes se sienten amenazadas ante la posibilidad de un nuevo desplazamiento y para la cual CORNARE otorgó Licencia Ambiental desconociendo el fallo del juzgado especializado en restitución de tierras (Echeverry, 2023).

Así mismo, a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV muchos de los procesos de reparación colectiva desencadenaron en la construcción de obras de infraestructura como la vía Granada – San Carlos, arreglos de vías terciarias, construcción de salones comunales, entre otros. Esta tendencia ha llevado a que se confunda la justicia distributiva que le compete al Estado en la provisión de bienes y servicios en el marco de un estado social de derecho con la justicia restaurativa propia de la justicia transicional (Ramírez, L. 2022a; Ramírez, L. 2022b). A muchos proyectos de infraestructura les asiste un interés económico propio del proyecto desarrollista basado en la explotación de recursos naturales que ha caracterizado la reconfiguración histórica de la región. Tal es el caso de la pavimentación de la vía San Esteban –

La Cascada, la cual se realizó con recursos de la venta de ISAGEN y coincidentalmente los 7.5 k.m de vía pavimentada llegó justo hasta el acceso a las obras de la PCH La Cascada, de la cual es socia el municipio. Recientemente la Gobernación de Antioquia con recursos del Sistema General de Regalías, y aportes del municipio adelantó la pavimentación de 1.2 k.m. entre las veredas La Cascada y El Tabor.

Lo cierto es que muchas de las intervenciones realizadas en el Oriente antioqueño a partir del desescalamiento de la conflictividad armada, resultaron generando acción con daño, entre otras cosas, por la falta de coordinación entre las entidades y continuidad en muchos de los procesos. En el marco del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PASPSIVI, que también se originó en el marco de la Ley 1148 de 2011 y el cual tiene por objetivo la rehabilitación física, emocional y mental de los individuos, familias y comunidades (Ministerio de la Salud y Protección Social, 2023), se iniciaron acompañamientos psicosociales masivos y talleres colectivos que no permitieron abordar situaciones particulares para tramitar el daño y el dolor y que, por el contrario, resultaron revictimizando y abriendo heridas en quienes participaron de estos espacios (Holguin, 2018), que aunado al cambio constante de profesionales y operadores del programa, a la ejecución rígida de protocolos en los procesos de intervención psicosocial y falta de presupuesto, dificultó cumplir con el propósito y espíritu de éste (Villa, 2016). Situaciones como las descritas han sido recurrentes en las conversaciones con muchos pobladores de diferentes municipios de la región con las cuales he tenido cercanía desde el año 2013 en el marco de mi ejercicio profesional, quienes además anotan que la cantidad de programas, proyectos y recursos ha generado que muchas personas “se vuelvan perezosas” por estar sólo esperando la ayuda del Estado.

La cantidad abrumadora de programas, proyectos y operadores trabajando simultáneamente también ha tenido un impacto negativo en los líderes comunitarios, quienes se enfrentan constantemente a múltiples citaciones para eventos, talleres y capacitaciones. Esta situación ha llevado a muchos líderes a optar por apartarse de sus roles. Además, la competencia desenfrenada entre las organizaciones por acceder a recursos ha fracturado en muchos casos el tejido comunitario. Es evidente que el andamiaje burocrático inherente a las intervenciones estatales no contribuye a la reconstrucción del tejido social, ni a la dignificación y reparación integral de las personas y comunidades. En cambio, victimiza y subestima el potencial transformador que poseen. A menudo, las propuestas con intenciones nobles y prometedoras quedan solo en el papel, sin materializarse. Luego, se presentan como indicadores de éxito, reduciendo los procesos y las

personas a meros números y cifras. Esta situación contradice el propósito fundamental de generar un impacto positivo y duradero en las comunidades.

En este sentido, se evidencia una imposición de metodologías descontextualizadas y desarticuladas por parte del Estado y sus políticas públicas. Estas metodologías desconocen en muchas ocasiones los avances y propuestas generadas desde las comunidades locales. Son precisamente estas últimas las que se construyen de manera más coherente y en mayor conformidad con las necesidades identificadas en el territorio (Ramírez, L. 2015, p. 451).

En el Oriente antioqueño, se ha observado un aumento significativo de intervenciones, generando múltiples escenarios de acción. Sin embargo, es importante reconocer que las intervenciones a nivel local han mostrado mayor efectividad y éxito en comparación con las de orden nacional. Los movimientos sociales y los procesos organizativos locales pusieron el énfasis en la búsqueda de una solución negociada al conflicto, centrándose en la verdad, la justicia y la reparación. Estas iniciativas han logrado dignificar a las víctimas al enfocarse en la reconciliación y la construcción colectiva de la memoria.

Este valioso capital social fue potenciado gracias a la sinergia entre la Corporación para la Participación Ciudadana CONCIUDADANÍA, una ONG regional con trayectoria de trabajo en el territorio, la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño AMOR, colectivo social de base y el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús CINEP. A través de la transferencia de conocimientos y metodologías para el acompañamiento a las víctimas entre el 2004 y el 2006, surgió el programa Promotoras de Vida y Salud Mental PROVISAME (Corporación para la Participación ciudadana, Conciudadanía, Programa para la Paz de la Compañía de Jesús - CINEP, Asociación de mujeres de oriente antioqueño (Amor), 2007; Idárraga & Núñez, 2014; CNMH, 2016). Mediante este programa, principalmente las mujeres, quienes también fueron víctimas, se convirtieron en promotoras que brindaban apoyo social, emocional y afectivo a sus comunidades.

Un ejemplo destacado de este proceso se encuentra en Granada, donde se formó la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (ASOVIDA), la cual ha liderado los procesos organizativos de las víctimas y ha trabajado incansablemente en la reconstrucción de la memoria y la dignificación de estas. El Salón del Nunca Más representa la expresión más emblemática de este proceso el cual fue apoyado por el PNUD. Este espacio museístico cuenta con una exposición permanente que incluye numerosas fotografías de las víctimas del conflicto en Granada, especialmente de aquellos que fueron asesinados o desaparecidos. El objetivo de esta exhibición

es reconstruir y visibilizar la memoria del conflicto, honrar y dignificar a las víctimas y a sus familias a través de sus historias de vida (Idárraga & Núñez, 2014). Esta apuesta ha hecho del reconocimiento colectivo del dolor y la puesta en escena del sufrimiento como estrategia para elaborar el duelo (Rubiano, 2017). ASOVIDA, al igual que muchas otras asociaciones de víctimas en el Oriente antioqueño, se ha convertido en un escenario crucial para el reconocimiento de las víctimas como sujetos políticos que demandan derechos ciudadanos y ejercen influencia en las políticas públicas y los planes de desarrollo.

También ha sido la institucionalidad local la que ha promovido escenarios para el acompañamiento social y psicológico a la población granadina. En una alianza interinstitucional entre el municipio de Granada, la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOGRANADA y la Universidad de Antioquia, se adelanta desde el año 2009 el Programa de acompañamiento psicosocial a la familia, la niñez, la juventud y la tercera edad afectada por conflicto armado en el municipio de Granada. Los lugares de intervención son priorizados de acuerdo con las necesidades y criterios de la administración municipal. Durante más de diez años, se han llevado a cabo diversas intervenciones con el objetivo de mejorar las condiciones psicosociales de la población. Estas intervenciones se han enfocado en fortalecer la colaboración entre instituciones, promover la recuperación de la salud mental y emocional de distintos grupos poblacionales, reconstruir el tejido social fragmentado por la guerra, empoderar a nivel social y territorial, resolver conflictos a través del diálogo, consolidar la organización comunitaria y potenciar nuevos liderazgos. Además, se han implementado procesos productivos que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria, empoderar a las mujeres rurales y fortalecer la economía familiar en zonas rurales (Ríos & Jaramillo, 2017).

En la revisión documental de las diferentes intervenciones realizadas en el Oriente antioqueño, en particular en el municipio de Granada, se pueden identificar dos tipos de intervenciones. En primer lugar, se encuentran las intervenciones de carácter más asistencialista, las cuales corresponden, por lo general, a programas del orden nacional. Estas intervenciones se caracterizaron por su enfoque en la ejecución de recursos, el cumplimiento de metas e indicadores, así como por la desarticulación y descoordinación entre los programas y operadores que trabajaban con la misma población. Además, presentaron limitaciones en términos de disponibilidad de recursos y en la continuidad de las iniciativas a lo largo del tiempo. Muchas de estas intervenciones

se formularon desde teorías y modelos estandarizados que desconocían las particularidades del territorio, lo que en muchas ocasiones generó acciones que resultaron perjudiciales.

Por otro lado, se identifican otras intervenciones de mayor duración, que generalmente fueron promovidas por organizaciones y actores locales, y contaron con la participación de líderes y profesionales del territorio. Estas intervenciones se han esforzado en reconocer el contexto y las expectativas de la población objetivo, llevando a cabo procesos de acompañamiento más amplios y sostenidos en el tiempo.

5.3 La institucionalidad llegó a El Tabor después del conflicto

En el caso de El Tabor, la presencia institucional en la vereda se estableció después del año 2005. Durante mucho tiempo, la intervención estuvo a cargo del municipio, la Gobernación de Antioquia y la Federación de Cafeteros. Estas instituciones fueron el blanco de la gestión comunitaria de diversos proyectos, como la construcción del puente y la escuela, los cuales marcaron el inicio de la vereda. Es importante destacar que la realización de estas intervenciones surgió de la necesidad de la comunidad y de la decidida gestión de los líderes locales. La comunidad también gestionó el acueducto y la vía de acceso a la escuela, con el respaldo de la administración municipal en la década de los noventa. Asimismo, la iglesia desempeñó un papel fundamental al impulsar y acompañar diferentes procesos, como la apertura de la vía del sector de El Cebadero a El Edén, y promovió la creación de la Junta de Acción Comunal JAC.

Antes de la implementación de las intervenciones institucionales, la comunidad de El Tabor sufrió dos oleadas de desplazamiento. La primera ocurrió en el año 2000, asociada a los actos perpetrados por grupos paramilitares y la guerrilla en el casco urbano. La segunda tuvo lugar en 2002, cuando se produjo un desplazamiento masivo junto con otras veredas de la cuenca de San Matías y el corregimiento de Santa Ana. Según la evaluación realizada por la consultora Econometría S.A. (2008) para Acción Social en el informe "Factores de éxito y retos en los procesos de retorno de la población desplazada", el retorno de la comunidad de El Tabor en 2002 fue forzado debido a las presiones ejercidas por las FARC-EP, quienes ya no contaban con la población civil como escudo. Sin embargo, durante el trabajo de campo, la comunidad manifestó que la decisión de desplazarse no obedeció a una orden directa de desalojo, y el retorno tampoco se debió a intimidaciones para regresar, sino que estuvo motivado por el arraigo a la vereda. De

todas formas, el retorno se produjo sin ningún tipo de acompañamiento institucional. La única ayuda recibida fue la entrega ocasional de algunos mercados por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (Econometría, 2008).

Así, como en muchas comunidades del Oriente antioqueño, el retorno en El Tabor no cumplió con los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. El regreso por cuenta propia, sin declarar su condición de desplazados y en medio de confrontaciones armadas, se sumó a la ya difícil situación económica provocada por el deterioro de las viviendas y los cultivos. En estas circunstancias, durante tres años, fue la solidaridad y las redes de vecindad de los habitantes de la vereda las que, a través de convites y colaboraciones entre fincas, ayudaron a sus vecinos a recuperarse de sus pérdidas.

En relación a lo sucedido en la región, y según lo indicado por la comunidad, fue a partir del año 2005 que comenzaron a llegar los proyectos e instituciones a la vereda. En un principio, dado que la comunidad no había declarado su condición de desplazada, la ayuda y el acompañamiento institucional se brindaron en el contexto de procesos de apoyo a población vulnerable y no necesariamente dentro de los programas y protocolos destinados a la atención de las víctimas (Econometría, 2008). Posteriormente, en jornadas de caracterización, inscripción y declaración ante la Unidad de Víctimas, el 95% de los habitantes se registraron como víctimas ante la UARIV (Unidad para las Víctimas) y se formalizaron los procesos de acompañamiento.

Las intervenciones realizadas en la vereda pueden clasificarse principalmente en tres tipologías. En primer lugar, se encuentran las intervenciones de carácter humanitario, que consistieron en la provisión de ayudas de emergencia, tanto materiales como económicas, dirigidas a la población en condición de desplazamiento y durante los primeros meses de retorno. Estas acciones fueron lideradas por el municipio, el Comité Interinstitucional, las colonias granadinas residentes en otras ciudades, la Cruz Roja Colombiana y el CICR.

En segundo lugar, se llevaron a cabo intervenciones enfocadas en la infraestructura, las cuales son las más recurrentes. Entre ellas se destacan los mejoramientos y construcción de viviendas, así como las adecuaciones de la infraestructura comunitaria, como la escuela y el salón comunal. Estas intervenciones contaron con la participación de instituciones como el Programa de Vivienda de Antioquia (VIVA) de la Gobernación de Antioquia, el Banco Agrario, Asocomunal, las Cooperativas y el municipio de Granada. Además, la comunidad también contribuyó con su trabajo en la realización de estos proyectos. Por ejemplo, en el caso de los mejoramientos de

vivienda, la familia debía brindar alojamiento y alimentación al personal encargado, mientras que la ayuda provista incluía los materiales necesarios y garantizaba que la familia pudiera colaborar como mano de obra auxiliar suministrándole el mercado. También, se llevaron a cabo intervenciones de reconstrucción, como la del puente que conecta las veredas El Tabor y El Edén, el cual resultó afectado por la ola invernal de 2011. Este proyecto fue financiado por la Unidad de Víctimas y el municipio.

Figura 34

Vivienda Familia López Giraldo.



Figura 35

Puente reconstruido por la Unidad de Víctimas.



Nota. Fuente: https://prezi.com/gnhh6ssnrh_e/problema-constructivo/

En tercer lugar, se cuentan las intervenciones asociadas a proyectos productivos los cuales se han desarrollado principalmente a través de Acción Social, ahora conocida como Departamento

de la Prosperidad Social (DPS), el Ministerio de Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, en colaboración con el municipio, Asocomunal y diversas asociaciones productivas del municipio, como los paneleros, lecheros y ganaderos. En el marco de estos proyectos, se han proporcionado insumos, semillas de maíz, frijol y café, así como herramientas y abonos.

Paralelamente a las intervenciones mencionadas, se han llevado a cabo acciones de capacitación por parte de diferentes entidades, como el SENA y la UMATA. Estas capacitaciones se han centrado en la formación en artes y oficios como una alternativa económica para las familias que regresaron a la vereda, así como en la asistencia técnica y la enseñanza de buenas prácticas agrícolas y el manejo de cultivos. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna intervención psicosocial con los habitantes de la vereda (A. de J. Quintero, comunicación personal, 5 de marzo de 2023).

Con relación a los proyectos productivos, especialmente con los primeros incentivos proporcionados por Acción Social cuando la población retornó, existe una decepción generalizada, ya que "no nos preguntaron ni nada, simplemente nos dieron estas semillas y este fertilizante y este maíz que no sirvió fue para nada, todo se perdió" (A.I. Giraldo, taller de actores, intervenciones y cartografía social, 3 de abril de 2022). Estos proyectos no fueron consultados con la comunidad, desconociendo las características del terreno y el clima, lo que resultó en una pérdida de tiempo y recursos invertidos en el proyecto. Se les presentó la opción de "lo toman o lo dejan". Sin embargo, otros proyectos han tenido mejores resultados y han contribuido a mejorar las unidades productivas de las familias, ayudando a paliar su situación.

En la última década, diversas entidades han adelantado intervenciones en la vereda El Tabor en cumplimiento de su objeto misional. CORNARE, en el marco de su programa de Intercambio de Servicios PRISER, ha desarrollado proyectos como la siembra de árboles, la instalación del parque y el quiosco de madera ecológica en la escuela por un valor aproximado de \$20.000.000 de pesos, así como la construcción de pozos sépticos en las viviendas y obras de control y estabilización de taludes mediante la construcción de trinchos.

EPM, a través de su fundación y como parte de su gestión de responsabilidad social empresarial alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), llevó a cabo el proyecto "Agua para la Educación, Educación para el Agua", que incluyó la construcción de un tanque de potabilización de agua para la escuela.

El municipio también realiza acciones puntuales dentro de su competencia, como el mantenimiento de la infraestructura pública, mejoras en las viviendas y la entrega de insumos para proyectos productivos. Muchas de estas acciones son el resultado de promesas electorales. Dado que los recursos del municipio son limitados, muchas de las acciones que se llevan a cabo en colaboración con otras instituciones públicas y privadas, de manera particular las Cooperativas CREAMAM y COOGRANADA resultan ser aliados estratégicos del municipio. Dentro de las alianzas público-privadas se destaca la placa huella de acceso a la escuela que adelantó el municipio en conjunto con HMV Ingenieros cuando se construía la PCH Los Molinos.

Los habitantes de la vereda también se han beneficiado de múltiples intervenciones del orden municipal y regional. Una de ellas es el Programa +Campo+Sostenible, financiado por EPM, ISAGEN y algunos municipios, que ha brindado apoyo a alrededor de 750 familias de nueve municipios de la subregión. Este programa tiene como objetivo fortalecer las unidades productivas mediante la entrega de insumos, asistencia técnica y acompañamiento psicosocial, promoviendo el manejo sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, en el caso de la vereda El Tabor, solo una familia ha participado en este programa. El panorama es similar con otras iniciativas de capacitaciones, formaciones e incentivos productivos impartidas por PRODEPAZ, TEJIPAZ y Asocomunal con aportes de las Cooperativas, el DPS y recursos de cooperación internacional.

En el caso específico de la vereda, el proyecto más reciente fue "Salvaguarda", que consistió en la mejora de la captación, almacenamiento y distribución de agua en uno de los acueductos veredales por un valor de \$21.081.331 millones de pesos. Este proyecto fue llevado a cabo por CONCIUDADANÍA y Horizonte3000, con el apoyo financiero de la Unión Europea, DKA y la Agencia Austriaca de Cooperación al Desarrollo (Conciudadanía, 2022) y en el que la comunidad también aportó trabajo.

Recientemente, la comunidad recibió herramientas como parte del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Sin embargo, la implementación total del PIRC de Granada, formulado desde 2012, ha enfrentado desafíos debido a obstáculos en su financiación y a intentos de reducir las 20 acciones contempladas en el plan por parte de la UARIV, razón por la cual hasta el año 2021 sólo se había implementado el 60% del Plan. (ASOVIDA, 2021). Aunque se construyó con la participación de las asociaciones de víctimas y la comunidad, no todas las comunidades, como en el caso de El Tabor, tienen claridad y una información precisa sobre qué acciones forman

parte del plan, además de que estas acciones no cumplen con sus expectativas y necesidades (A.I. Giraldo, conversación personal, 6 de junio de 2023).

En el taller de actores, intervenciones y cartografía social, la comunidad destacó la intervención realizada por ISAGEN en el marco del Programa de Desarrollo Comunitario (PDC). Es importante aclarar que la vereda El Tabor no forma parte del área de influencia de esta empresa, lo que significa que no se experimentan impactos por la construcción y operación de la central Calderas.

Las circunstancias que permitieron la participación de la vereda en el programa están asociadas a la solicitud realizada por los mandatarios locales de finales de la primera década del 2000 de los siete municipios del Oriente antioqueño, donde ISAGEN tiene presencia, para ampliar el programa a otras veredas. Esto se hizo en aras de promover la equidad, dado que muchas veredas también recibían programas de otras instituciones en el territorio, como ISA y EPM (Giraldo, 2010). Además, se buscaba que el programa sirviera como un estímulo para las comunidades que estaban en procesos de retorno. De esta manera, la vereda El Tabor tuvo la oportunidad de iniciar su participación en el PDC en 2010.

El origen del PDC se remonta al año 2000, cuando ISAGEN realizó una evaluación de su gestión en el territorio, que hasta entonces se había centrado en actividades operativas y asistencialistas, sin una planificación que orientara la gestión. Esto se reflejaba en el apoyo a proyectos comunitarios a solicitud y la entrega de recursos a las administraciones municipales para la ejecución de proyectos, así como en algunas formaciones. Esto generó una dependencia de las comunidades con respecto a dichos recursos (Giraldo, 2010). El objetivo del PDC es formar comunidades que sean partícipes y autogestoras de su desarrollo humano sostenible. Esto se logra a través de la formación en una escuela de desarrollo comunitario consistente en tres núcleos temáticos: humanidades, proyectos y empresarismo. La metodología se basa en una estrategia de aprender en el hacer, mediante la formulación y ejecución de proyectos a lo largo de un periodo de 10 años. Esta propuesta se enmarca en la gestión estratégica voluntaria o de responsabilidad social empresarial, alineada con los objetivos de desarrollo humano sostenible y los ODS de las Naciones Unidas.

Para la comunidad, este programa fue muy significativo, ya que los espacios de formación se convirtieron en oportunidades para recuperar espacios de encuentro y socialización que habían sido afectados por el conflicto. La metodología de los módulos de formación era asequible para

todos, incluso para aquellos que no tenían habilidades de lectoescritura. La participación en el programa era voluntaria, aunque se requería un número mínimo de 10 personas en la escuela de formación para mantenerse en este, y se debían cumplir ciertos criterios para la ejecución de los proyectos, como la cofinanciación por parte de la comunidad y el municipio, así como la participación y el beneficio comunitario.

Sin duda lo más importante para ellos fue que los proyectos fueron iniciativas formuladas y ejecutadas en su totalidad por la misma comunidad, aunque con el acompañamiento del operador del programa. En total ejecutaron cinco proyectos: dos proyectos productivos y tres proyectos enfocados en la dotación y adecuación del salón comunal, adecuación de la placa polideportiva y el fortalecimiento de procesos deportivos y culturales. Estos proyectos tuvieron un valor total de \$204.514.720, entre aportes en dinero y especie de la organización comunitaria, la administración municipal e ISAGEN¹⁹.

Al formular y ejecutar el primer proyecto productivo, la comunidad mostró cierta resistencia debido a que uno de los requisitos para su aprobación era que cada participante debía retornar el 50% de los aportes de ISAGEN para destinarlo a un fondo rotatorio conformado y administrado por la comunidad, con su propio reglamento. Algunos miembros de la comunidad expresaron dudas y temores, creyendo que la gente no devolvería los recursos y que el proyecto fracasaría, “eso no va a funcionar, la gente no va a devolver el recurso, ese proyecto se va a caer, la gente está acostumbrada a que todo se lo den” (A. de J. López, personal, 11 de julio de 2014). Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, la comunidad formuló y ejecutó el proyecto. Un año y medio más tarde, el mismo líder reconoció que la estrategia del fondo rotatorio resultó ser una gran alternativa para la comunidad. A pesar de la incredulidad inicial, la comunidad devolvió el capital y actualmente el fondo rotatorio cuenta con recursos significativos que han sido utilizados para apalancar préstamos y satisfacer las necesidades de los habitantes de la vereda.

¹⁹ Los proyectos priorizados y ejecutados por la organización comunitario son los siguientes: a) Aseguramiento y dotación del salón comunal por un valor total de \$14.090.600 formulado en el año 2010 y ejecutado en el 2011. b) Mejoramiento de la placa polideportiva de la vereda El Tabor del municipio de Granada por un valor total de \$26.892.926, formulado en el 2012 y ejecutado en el 2013. c) fortalecimiento integral de los cultivos de caña y frijol de la vereda El Tabor del municipio de Granada (Antioquia) por un valor total de \$79.407.071, formulado en el 2014 y ejecutado en el año 2015. d) Fortalecimiento integral entorno al deporte, recreación y cultura para construir vínculos de unión en la comunidad de la vereda El Tabor del municipio de Granada Antioquia por un valor de \$32.314.600, formulado en el 2016 y ejecutado en el 2017. y e) Transformando el campo a través de la fertilización de caña y siembra de frijol en la vereda El Tabor del municipio de Granada Antioquia por un valor total de \$39.030.523, formulado en el 2018 y ejecutado en el 2019.

Uno de los impactos más significativos del PDC en la vereda está estrechamente ligado a la pasión y la vocación que la comunidad tiene por el deporte. El comité de deportes de la JAC se ha convertido en un verdadero motor de integración, participación y fortalecimiento del tejido social a través de la práctica deportiva, tal como se mencionó en el capítulo 4. Los proyectos de recreación y cultura formulados y ejecutados en el marco del PDC se han adaptado perfectamente a las necesidades e intereses de la comunidad, potenciando así los encuentros y las actividades culturales y deportivas.

En el ámbito municipal, se ha brindado apoyo a los procesos deportivos. No solo se han cofinanciado los proyectos del PDC, sino que también se ha acompañado los procesos deportivos con el respaldo de un promotor financiado en diferentes ocasiones por COOGRANADA e ISAGEN. Con esta última entidad, en una línea de inversión denominada alianzas territoriales, el municipio de Granada ha priorizado el desarrollo de procesos culturales y deportivos.

El comité de deporte de El Tabor se ha fortalecido a lo largo del tiempo “llevamos mucho tiempo con él, somos poquitos, pero ahí vamos, nunca lo hemos dejado caer, nos integramos mucho, hacemos actividades, festivales y nos va súper bien” (M.L. Giraldo, comunicación personal, 14 de agosto de 2022).

Figura 36
Torneo relámpago.



Esto ha sido gracias al liderazgo de sus integrantes, a la pasión que sienten por el deporte, “porque mientras se está en la cancha no se piensa sino en el jugar, en el balón, se le olvidan los problemas, muchas cosas, uno piensa muchas cosas cuando está de balde, de estrés” (M.L. Giraldo, comunicación personal, 14 de agosto de 2022). Pero sobre todo porque reconocen que en los encuentros “la gente participa, viene, se encuentra y se fortalece los lazos de amistad, de trabajo en grupo, de trabajo en la comunidad” (Y.Y. García, comunicación personal, 24 de abril de 2022). Esta es la manera que tiene la comunidad de El Tabor de vivir, convivir y construir pazes otras.

El trabajo del comité se ha mantenido gracias a la autogestión de la comunidad, pero también al apoyo de las instituciones locales y otras iniciativas presentes en el territorio. Una de ellas es el Club Santa Ana, "Desde el Deporte Hacia La Paz", que ha logrado articular diferentes comités de deporte en las veredas de la cuenca de San Matías y el corregimiento de Santa Ana.

El club Santa Ana tiene sus orígenes en la propuesta que surgió de un líder del corregimiento en el año 2010 interesado en promover el deporte en los jóvenes como alternativa al reclutamiento forzado y una apuesta por construir paz. Esta iniciativa contó con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una estrategia denominada "+ Deporte – Minas" hasta 2013, lo que permitió la formación del comité de deporte y la institucionalización del torneo "Desde el Deporte Hacia La Paz". Durante el torneo, se implementó la tarjeta blanca como un estímulo para promover y reconocer las conductas deportivas positivas. En 2016, el Club recibió el reconocimiento deportivo municipal y en 2019 obtuvo su personería jurídica. Desde sus inicios, el club ha sido financiado con aportes de cooperación internacional, COOGRANADA y en ocasiones, la administración municipal. Recientemente, ha recibido apoyo de la Alcaldía de Medellín y la Unidad de Víctimas. Sin embargo, el verdadero mérito recae en los jóvenes del corregimiento, quienes con sus propios recursos, tiempo y trabajo voluntario han mantenido viva esta propuesta. Además de los torneos, el Club cuenta con un programa de liderazgo juvenil, una escuela de iniciación y formación deportiva, un cuerpo de árbitros, programas de enriquecimiento motriz y brinda apoyo y promoción a los comités de deportes. La trayectoria y experiencia de más de 20 años del Club ha sido reconocida y ha permitido que compartan su propuesta en otras regiones de Antioquia y Chocó (E.A. Giraldo, comunicación personal, 5 de febrero y 6 de junio de 2023). Esta apuesta originada en lo local, aunque ha contado con apoyo institucional, se constituye en iniciativas endógenas de intervención comunitaria.

5.4 De la intervención a la *inter-versión*

En este breve análisis general de las intervenciones realizadas en la región y particularmente en la vereda El Tabor podemos evidenciar las diferentes lógicas que subyacen a las acciones emprendidas por diversos actores a la hora de realizar sus intervenciones.

Para empezar, es necesario reconocer que la intervención social como campo de práctica y conocimiento emergió en la modernidad. Una modernidad caracterizada por la prelación del conocimiento científico, el cual se erigió como una verdad autorizada y se consolidó como un dominio legitimado para imponer una concepción universal acerca de cómo debería organizarse, regularse y controlarse la cuestión social. Así pues, el pensamiento moderno adoptó a Occidente y sus categorías como punto de referencia universal desde el cual interpretar el mundo y prescribir cómo éste debe configurarse.

El marco contextual en el que se inscribe la intervención social está dado por los cambios que representó la instauración de la sociedad moderna como el desarrollo industrial y la incorporación de diferentes sectores sociales a la producción capitalista y el advenimiento de los derechos sociales, políticos y civiles (Saénz, 2007). En esta perspectiva histórica la crisis desatada por el establecimiento de la sociedad moderna da lugar al surgimiento de la intervención social como categoría emergente de las ciencias sociales a través de la cual y desde el discurso hegemónico y la tradición normativa se busca corregir y normalizar aquello que aparece disfuncional en aras de mantener el sistema social.

En este sentido, la intervención social hace alusión a una gran variedad de prácticas profesionales del ámbito social que buscan dar solución a algún problema generando bienestar para diferentes individuos, grupos o comunidades; se entiende como una acción organizada, sistemática e intencionada de un conjunto de individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la sociedad. La intervención social implica desde un enfoque sociopolítico, además de una intencionalidad transformadora, el reconocimiento de la capacidad técnica para llevar a cabo acciones en atención a unas demandas sociales específicas y donde cuya intervención puede estar a favor de las políticas de Estado o como crítica a las mismas, de tal manera la intervención siempre implica asumir una postura orientada a la transformación, ya sea para el mantenimiento del statu quo o en un horizonte emancipador. La intervención se fundamenta en paradigmas que a su vez

están anclados en los ideales de la modernidad, el progreso, el desarrollo y la modernización (Corvalán, 1996; Carballeda, 2002; Saavedra, 2015).

El campo de conocimiento sobre la intervención social ha transitado desde paradigmas clásicos de las ciencias sociales hasta otros de corte más heterodoxos o críticos, desde estos últimos enfoques y teorías se apela a un concepto de intervención social que supera la visión instrumental y se centra en el proceso, comprende la importancia de situarse, de analizar el contexto, establece una relación dialógica y permite la participación de los sujetos desde el reconocimiento de sus saberes, exige organización, planeación y se orienta a la transformación en un horizonte de derechos.

Sin embargo, en el análisis de las intervenciones realizadas en el contexto anteriormente referido, encontramos que las intervenciones institucionales, en su gran mayoría, adolecen de este enfoque. En este sentido, se evidenció intervenciones donde los agentes institucionales se apresuraron a desarrollar programas y proyectos, cumplir metas y ejecutar recursos generando descoordinación y duplicidad de esfuerzos. Así mismo, todos reparos a nivel operativo resultaron en muchas ocasiones generando más daño, revictimizando a la población y fracturando aún más aquello que intentan recomponer.

Ahora bien, persisten obstáculos epistemológicos (Bello & Millán, 2006) y lo que subyace a la racionalidad técnica instrumental de las intervenciones es la reproducción de discursos de saber/poder donde se le asigna al “otro” cualidades de incapacidad, debilidad, carencia como parte del carácter pasivo que se le atribuye a los beneficiarios frente al carácter activo y poderoso del Estado y sus instituciones (Montero, 2012). Esta subjetivación del “otro” a intervenir como pobre, víctima o desplazado, está atravesado por formas de representación social que implican relaciones de poder. Así pues, “las intervenciones institucionales, que parten de proyectos estandarizados, que buscan universalizar nociones de desarrollo, orden y bienestar, incurren en nuevas formas de exclusión y dominación” (Bello & Millán, 2006, p. 259).

El riesgo que subyace a esta clasificación estereotipadora que reduce al Otro a un estado negativo y sin matices, que no les reconoce ni la capacidad ni la existencia de un saber, para sólo señalar un aspecto en la tabla de dicotomías, reside en la posible pérdida de la situación de poder, aquella desde la cual se determina quien es Nosotros y quien es Otro (Montero, 2012, p. 68).

Detrás de las buenas intenciones hay intereses velados pues son portadoras del legado del pensamiento moderno/colonial. El relato único, el anglo europeo, no sólo se asume como superior, sino que ubica otras formas de saber y de ser como atrasadas, subdesarrolladas y carentes (Bello & Millán, 2006). “El relato único crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos” (Adichie, 2018, p. 22). El no reconocimiento de la subjetividad campesina en las intervenciones y asumir lo campesino como ignorante, atrasado y necesitado de ayuda descalifica y despotencializa otras formas de ser, estar, construir paz y vida digna.

La comunidad de El Tabor ha asumido en diversos momentos una posición estratégica y funcional incluso cuando se ha encontrado en condiciones de vulnerabilidad. La relación desigual que se establece frente a quienes ostentan el poder/saber y dirigen qué hacer, cómo hacerlo y con qué recursos no ha sido impedimento para que la comunidad despliegue su capacidad creativa para resignificar las intervenciones que han llegado a su territorio, sin importar el lugar de donde provengan.

Dado que el término intervención como categoría emergente de las ciencias sociales en el marco de la modernidad, tiene una connotación positivista que “está fundamentada en un imaginario ideológico que subordina la práctica profesional a visiones externalistas de manipulación, control o cosificación de las personas y situaciones” (Vélez, 2003, p. 54), como alternativa y en yuxtaposición a ello, se adoptará el término *inter-versión* propuesto desde la noción de la ciudadanía y la ecología de saberes y cuidados; mientras “que en la intervención se aplica un plan prefijado y desde afuera de la comunidad “receptora” o “beneficiaria”, se asume la *inter-versión* como un modo de “ligarnos a la comunidad y junto con ella y a partir de todas las versiones crear los modos adecuados para el cuidado”, (Najmanovich, 2021, p. 264) para relacionarnos y construir modos de vida posible entre muchos mundos posibles.

En este horizonte de *inter-versión* es importante reconocer que muchas prácticas comunitarias como el convite, el trueque, la mano prestada, los encuentros comunitarios aportan a cambiar y transformar la realidad de la comunidad, mucho antes de que apareciera las intervenciones institucionales. Así mismo, las formas organizativas en El Tabor basadas en relaciones de cooperación y reciprocidad estaban presentes mucho antes de que fueran promovidas por actores externos. Por su puesto que estas prácticas y formas de organización no son completamente puras, aisladas y al margen de la institucionalidad.

La presencia institucional en la configuración histórica de la vereda ha sido muy importante pero no porque ésta haya tenido el poder y control completo sobre el devenir de la comunidad sino porque la comunidad ha logrado establecer una acomodación pragmática usando incluso los mismos recursos que brinda la institucionalidad para mantener sus formas y modos de vida.

El hecho de que en la comunidad de El Tabor “no se le niega nada a nadie” (A. de. J. López, conversación personal, 24 de abril de 2022) no significa que asuman un rol pasivo frente a las intervenciones que llegan a su vereda. Pues a veces pareciera que la intencionalidad de las intervenciones fuera incuestionable por provenir de la institucionalidad además de asumirlas como necesarias, pertinentes y adecuadas (Bello & Millán, 2006). Por el contrario, la comunidad y sus líderes han asumido una capacidad crítica frente a los programas y proyectos que llegan y no temen manifestarlo ante los agentes externos.

La comunidad reconoce que los aportes y ayudas recibidas, especialmente en el momento de retorno, fueron importantes. Algunos proyectos y procesos más significativos que otros, pero siempre potenciando y aprovechando lo que a la comunidad le resulte funcional, semillas de buena calidad, formaciones, fondo rotatorio, entre otros. Pero sin lugar a duda fueron los repertorios y recursos diversos de la comunidad sustentados en su capacidad de acción, redes de vecindad y prácticas comunitarias las que más ayudaron en el momento más álgido del conflicto armado.

Aquí lo que se presenta es una amalgama de actores, intereses y una asimilación parcial, a veces total, de las propuestas que llegan. Un entramado complejo de relaciones con la institucionalidad basadas, en su mayoría, en relaciones de cooperación. Sin embargo, estas relaciones pueden ser potencialmente conflictivas cuando se está en juego el bien común.

Tal es el caso del municipio y de CORNARE quienes se negaron a intervenir el cauce de la quebrada Santa Bárbara, cuando en la ola invernal del 2011 se afectó la banca de la vía de acceso a la vereda, so pretexto de incurrir en una ilegalidad y en faltas ambientales al ocupar el cauce, permisos que son comúnmente concedidos a empresas para la construcción de proyectos. Ante esta situación y los perjuicios representados para los campesinos al estar incomunicados por semanas, la comunidad de El Tabor en conjunto con las veredas vecinas de la cuenca de San Matías y el corregimiento de Santa Ana, deciden por cuenta y riesgo, a pico y pala, realizar un convite y desviar el cauce de la quebrada para que no se continuara yendo la banca (Conversación grupal, taller de actores, intervenciones y cartografía social, 3 de abril de 2022), en él que participaron más de 600 personas pues "ante el bien común y una comunidad unida, no hay quien la pare, ¿y ya el municipio

que iba hacer? ¿Echase la comunidad encima?” (...) al municipio le tocó pagar el predio y enviar la maquinaria para terminar el trabajo sin sanciones por parte de la corporación (...) “y eso sí, desde que hicimos eso, santo remedio, no volvió a molestar ese derrumbe (A. de J. López, conversación personal, 20 de noviembre de 2022). Aunque se identifican intervenciones orientadas desde enfoques participativos, localizadas y largo plazo, estas no cuestionan ni contribuyen a cambiar las causas estructurales de inequidad en la región en tanto se sigue imponiendo un ideal de desarrollo.

En las intervenciones institucionales es recurrente la falta de información y conocimiento sobre el origen de los recursos y las intencionalidades que subyacen a los programas y proyectos por parte de la comunidad. Consientes o no del mercado alrededor de los dispositivos humanitarios y de la cooperación para el desarrollo, la comunidad no se opone a los proyectos de intervención pues de alguna manera se han beneficiado de éstos.

Muchas de las intervenciones enfocadas a la reparación de las víctimas y construcción de paz en el fondo están orientadas al restablecimiento del modelo de desarrollo económico basado en la explotación de recursos (Ramírez, L. 2022a). Así mismo, los programas y proyectos productivos para la población campesina centrados en la generación de excedentes y vinculación con las redes de comercialización muchas veces se vuelven en estrategias para incorporar las economías campesinas a las lógicas económicas del mercado promoviendo el campo como una empresa (Ramírez, L. 2022b). En general, persisten las lógicas que buscan mantener y reproducir el sistema moderno/colonial a través del despliegue del desarrollo y la construcción de paz como una manera de alcanzarlo.

Paradójicamente, lo que acontece es justamente lo contrario. La capacidad activa de la comunidad amalgamada con las intervenciones tanto internas como externas inciden en el mantenimiento y la reafirmación de sus modos de vida campesina constantemente amenazado o por el modelo de desarrollo o por el conflicto armado, o ambos.

Las intervenciones, cualquiera que sea su naturaleza, terminan reconfigurándose en las particularidades de los territorios donde se implementan. En consecuencia, se resignifican y se generan sentidos propios que distan de las lógicas originales. Estas transformaciones se sitúan en la vida cotidiana, dando lugar a la coexistencia de diversos entendimientos e interpretaciones de las experiencias de los actores en relación con los procesos globales. (Quintero et al, 2019).

Es así como en clave de *inter-versión*, se reconoce la capacidad creativa y la potencia transformadora de los sujetos, muchas veces invisibilizada, negada o subestimada para establecer

acuerdos y negociación permanente en un entorno por lo general institucional, a veces no, para la consecución de un bien común, pero, ante todo, para el mantenimiento del modo de vida campesina.

El acompañamiento del Club Santa Ana al comité de deportes de la vereda El Tabor ha sido fundamental dado que en ellos converge la visión del potencial integrador que es inherente a la práctica del deporte. A través de esta actividad, que se ha interiorizado y adoptado como parte fundamental de sus comunidades, se contribuye a la construcción de la paz, se fomenta la convivencia y se crea una vida que se expresa en la cotidianidad,

Contrario al lugar en el que se han situado muchas de las iniciativas de construcción de paz que se han vuelto parte del metarrelato sobre en el Oriente antioqueño y que se han centrado en reconocer el dolor, el daño y las consecuencias negativas como punto de partida para sus acciones, el enfoque del comité de deportes ha permitido visibilizar y valorar las formas cotidianas de promover y construir la paz sin necesidad de instalarse en el sufrimiento. Si bien es importante reconocer el proceso de transición de víctimas a ciudadanos, estas iniciativas han tendido a acaparar toda la atención y protagonismo, dejando en segundo plano e invisibilizando las formas cotidianas de hacer y construir pazes otras.

En consecuencia, las prácticas comunitarias simples, sencillas y cotidianas como el intercambio, la solidaridad, el trueque y la producción para el autoconsumo, junto con enfoques creativos basados en la integración y la práctica deportiva, han desempeñado un papel crucial en la construcción de una subjetividad propia en la comunidad. Estas acciones han permitido transformar y recrear su propia realidad, dignificando la vida y construyendo pazes otras, lo que Illich (2008) llamó “la paz de la gente simple, la paz popular” que se configura a partir de acciones cotidianas que tienen lugar en el ámbito de lo comunitario. Para la comunidad de El Tabor la salud y la tranquilidad son la mayor riqueza.

6 Para seguir conversando

Terminar este informe con un capítulo de conclusiones o consideraciones finales no es coherente con un trabajo que se situó en un horizonte decolonial e intercultural, en tanto asumimos que no buscamos comprobar nada, ultimar algo, ni lanzar generalizaciones. Por el contrario, asumimos que el conocimiento está siempre en movimiento, es inacabado y siempre da lugar a nuevas miradas. En su lugar, quisiera esbozar más bien algunas reflexiones que se suscitaron con la realización de este trabajo y que pueden aportar algunos elementos para ampliar la discusión sobre el desarrollo, la paz y la intervención social en el contexto abordado. Abordar la reconfiguración del Oriente antioqueño, así como las intervenciones que en nombre del desarrollo se han realizado allí, desde una mirada decolonial e intercultural, permitió comprender cómo el patrón mundial de poder se reproduce y sigue vigente.

Una vez más el desarrollo se convierte en un elemento central en este entorno históricamente marcado por los conflictos y la violencia, donde se ha dado prioridad a los intereses económicos. El desarrollo se presenta como un supuesto benefactor, universal e inevitable (Serje, 2010), cuyos proyectos, políticas y discursos que los acompaña normalizan y justifican la transformación de las formas de vida de comunidades y grupos. La primera embestida de los proyectos de desarrollo, contrario al bienestar y progreso que profesaron, terminaron acrecentando las desigualdades, generando impactos en los modos de vida de la población y propiciando las condiciones para la emergencia y recrudescimiento del conflicto armado. La construcción de infraestructura para los megaproyectos en la región, enmarcados en modelos de desarrollo basados en la explotación de bienes naturales (mal llamados recursos) a gran escala, generaron inequívocamente desigualdad para los pobladores, al transformar de manera decidida su entorno natural, paisajístico, económico, político y social. Y aunque en el municipio de Granada, el cambio dado por dicha situación no los tocó de manera directa, es evidente que tales hechos afectaron la población en los aspectos nombrados.

Hace un poco más de una década, el Oriente Antioqueño se convirtió en un escenario de transición del conflicto hacia la paz. En este se han llevado a cabo intervenciones tendientes a la reparación de las víctimas y la construcción de paz, muchas de las cuales se han concentrado en la provisión de infraestructura, que a la larga ha permitido el despliegue nuevamente de proyectos de desarrollo (Ramírez, L. 2022b).

En este escenario, las intervenciones de variada naturaleza no solo han sido transversales sino también funcionales al dispositivo del desarrollo. La persistencia del desarrollo ha generado tensiones y disputas entre el modelo neoliberal y los modos de vida campesina. En este sentido, “las acciones políticas desplegadas luego del control militar no han significado un retorno a lo campesino, por el contrario, han derivado en la producción de un tipo de territorio funcional” (Pineda & Valencia, 2022, p. 139) al modelo económico neoliberal. En dichas tensiones, la conflictividad se ha reactualizado y se pone en riesgo nuevamente la permanencia y los modos de vida de quienes en el pasado debieron abandonar su territorio a causa de la guerra.

El desarrollo cumple un rol muy potente en la sociedad en la medida en que coadyuva a la modernidad en la dominación de las subjetividades de las personas, los despoja de recursos y contribuye a su subordinación a través de políticas estatales; este rol se actualiza o reaviva incluso en el contexto de posconflicto donde la ayuda humanitaria, la cooperación internacional, los programas multilaterales de construcción de paz, y la responsabilidad social empresarial hacen parte de un retorno a la agenda del desarrollo justificándose como elemento primordial para la consolidación de la paz.

Respecto a la paz, se observa en este escenario que hubo una búsqueda legítima de la sociedad civil para encontrar una salida negociada al conflicto en el momento más crítico. En esa búsqueda de la paz ha confluído los intereses del modelo neoliberal mediante el cual la paz se obtiene por la vía del desarrollo, reforzando una relación que, como ya anotamos en el primer apartado, es engañosa. La paz liberal, aparejada con el desarrollo, ha marginado e invisibilizado comprensiones diferentes que están teniendo lugar en los espacios cotidianos y que nos muestran los trazos para concebir y concretar pazes otras.

Así mismo, a partir del análisis de las intervenciones realizadas en la subregión y de manera particular en la vereda El Tabor, las intervenciones institucionales, tanto públicas como privadas, refuerzan la relación entre paz y desarrollo so pretexto de que estas aportan a la construcción de paz, mientras que lo que subyace es el interés de generar condiciones para la expansión del capital. Sin embargo, no se trata tampoco de satanizar lo que desde diferentes instancias y con buenas intenciones se ha aportado para mitigar y resarcir el efecto del conflicto en la población, pero sí de reconocer que la recepción de estas intervenciones y recursos no implica necesariamente que la comunidad asuma un rol pasivo o que interiorice las subjetividades que están implícitas en ellas y a partir de las cuales los pretenden cosificar.

Frente a las intervenciones externas, y a partir de los repertorios propios de la comunidad, se da una acomodación pragmática, lo que hemos denominado *inter-versión*, en tanto la comunidad tiene la capacidad de adaptarse, tomar y resignificar aquello que llega para su propio beneficio, pero también despliega el inventario de prácticas comunitarias que le son constitutivas, estableciendo un campo de negociación con la institucionalidad.

En otras palabras, la *inter-versión* otorga un lugar activo a las comunidades locales y cambia los términos de la conversación en la relación con los otros, perfilando además un entramado de relaciones de cooperación y conflicto entre lo instituido y lo instituyente con el que la comunidad se enfrenta cotidianamente. De igual manera, las prácticas cotidianas que tienen lugar en el ámbito de lo comunitario cuestionan la universalización de la modernidad mediante la materialización de formas de ser y estar en el mundo que no se corresponden con la lógica moderna/colonial. Es así como, en los escenarios rurales, donde la economía es parte de la vida social y lo comunal es el centro de la vida, puede rastrearse rasgos que son disfuncionales al capitalismo, que se apartan de los discursos institucionalizados del desarrollo y la paz.

En efecto, las prácticas comunitarias sustentadas en el modo de vida campesina aportan elementos para entender otras maneras de vivir con dignidad, donde la salud y la tranquilidad son la mayor riqueza. Así, la paz no es algo que alguien trae u otorga, sino algo que se activa -y se construye- a través del encuentro, el juego, el estar con otros, constituyendo condiciones mínimas para una convivencia pacífica, para la emergencia de pazes otras.

Asumir este ejercicio de investigación/intervención en clave decolonial e intercultural permite generar algunas reflexiones para la práctica profesional. Lo primero es que se comprendió que la investigación y la intervención social son inherentes al mismo proceso que, en este caso en particular, partió del deseo de los sujetos de contar su propia historia.

Esto se hizo a través del reconocimiento y articulación a un proceso significativo para la comunidad -como lo es el comité de deporte- y de la claridad con la que todos y todas intervenimos en él. El acompañamiento en la reconstrucción de la historia permitió reflexionar y responder preguntas del campo de la investigación. Dado que las historias globales y universales son siempre apropiación y silenciamiento de lugares locales de enunciación, este ejercicio de investigación /intervención permitió situar una microhistoria frente al metarrelato del Oriente antioqueño, que no es más que una representación hegemónica de la subregión, y ubicar en ella cómo la comunidad de El Tabor ha afrontado el desarrollo, el conflicto armado y cómo intenta vivir en paz y mantener

sus formas de vida. También permitió dar cuenta de las particularidades de los habitantes de la vereda.

Durante el proceso, más que certezas, siempre hubo reflexividad. Especialmente en el principio, cuando se inició el trabajo desde el enfoque propuesto con la comunidad, que en apariencia se encuentra integrada a la sociedad mayoritaria y que no presenta rasgos contrahegemónicos, sino que coexisten de manera ambigua y contradictoria con las lógicas capitalistas (Gutiérrez, 2018a). Sin embargo, a medida que se fue compartiendo y conociendo las prácticas comunitarias, desde adentro comenzaron a emerger rasgos que claramente distan de la lógica moderna racional. Posiblemente si se hubiera optado por una metodología disciplinada esto hubiese pasado desapercibido. En todo caso, se logró visibilizar formas diferentes de gestionar la vida a través de relaciones de reciprocidad, solidaridad y prácticas económicas de subsistencia.

Así mismo, a partir de este ejercicio también surgen reflexiones que pueden aportar elementos para áreas de las ciencias sociales que se ocupan de la intervención social. En primer lugar, la potencia que tiene la intervención en clave decolonial e intercultural para reconocer otros sentidos. Esto requiere apertura, atención, presencia en la situación y estar alerta frente a lo que acontece, sobre todo cuando se interviene desde modelos y protocolos. Y, en segundo lugar, hay que reconocer que las experiencias siempre son situadas, contextualizadas y que en clave de *intervención* siempre existe la posibilidad de vincularnos de múltiples maneras más dialógicas, respetuosas y creativas con la comunidad. El abordaje particular de este trabajo puede ofrecer elementos para futuras investigaciones que involucren los intereses de las comunidades, la participación de estas en todo el proceso y el reconocimiento de este grupo como generador de conocimiento; así mismo, se abre un horizonte para continuar problematizando la relación naturalizada entre la paz y el desarrollo en escenarios de transición política.

Una investigación/intervención en clave decolonial e intercultural partió de reconocer las subjetividades que han sido históricamente marginadas y negadas y que permiten cuestionar las bases del eurocentrismo. Es así como en este trabajo siempre se tuvo el cuidado de valorar a las personas a través de una relación cercana y afectuosa. También de acompañar su expectativa de movilizar la participación comunitaria y promover los lazos comunitarios; esto es acompañar la transformación desde adentro para adentro. Reconocer y visibilizar sus saberes y su conocimiento como un acto cotidiano y a la vez trascendente. Y finalmente, facilitar la reconstrucción de los hechos que han configurado su historia con relación a procesos socio históricos en diferentes

escalas y la posibilidad de que se narren a sí mismos porque “cuando rechazamos el relato único, cuando comprendemos que nunca existe una única historia sobre ningún lugar, recuperamos una especie de paraíso” (Adichie, 2018, p. 29).

Referencias

- Acosta, O., Duarte, C., Fajardo, D., Ferro, J., Gutiérrez, F., Machado, A. & Saade, M. (2020). Conceptualización del campesinado en Colombia. Documento técnico para su definición, caracterización y medición. *Conceptualización del campesinado en Colombia. Documento técnico para su definición, caracterización y medición*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia [ICANH]. M.S. Editorial. pp., 13-53.
- Adichie, C. N. (2018). *El peligro de la historia única*. Literatura Random House.
- Alcaldía de Granada. (2020). *Alcaldía de Granada*. <https://bit.ly/3unzAAE>
- Alonso, A. (2022). Contra el evangelio del desarrollo o por qué volver a leer a Iván Illich. *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*, (198)805. <https://doi.org/10.3989/arbor.2022.805001>
- Asociación de Víctimas de Granada [ASOVIDA]. (2021). *Asamblea ASOVIDA*. <https://bit.ly/49pkGZx>
- Becerra, S., & Rojas, J. (2015). Buscando los rostros campesinos de por acá. Una aproximación desde la noción de vida campesina. *Revista controversia*(205) 41-60. <https://doi.org/10.54118/controver.vi205.390>
- Bello, M., & Millán, C. (2006). La intervención institucional en contextos culturalmente distintos: lógicas en tensión y contradicción. *Revista Palimpsesto*. 250-259.
- Betancur, A., Rodas, C., & Vásquez, S. (2020). Movilización social en el Oriente antioqueño: del pasado al presente. Los casos del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño y el Movimiento Social por la Vida y la Defensadel Territorio (MOVETE). (F. d. Colombia, Ed.) *AINKAA Revista de Estudiantes de Ciencia Política*, 4(7), 13-30. <https://bit.ly/3SLNRPR>
- Boisier, S. (2003). ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? *Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales*, XXXV(138), 565 - 587.
- Bonilla, E., & Rodríguez, P. (1997). *La investigación en ciencias sociales. Más allá del dilema de los métodos*. Uniandes.

- Botia-Carreño, W. H. (2019). Unidad Agrícola Familiar (UAF), instrumento de política pública agropecuaria en Colombia. *Pensamiento y Acción*. <https://bit.ly/492qtnN>
- Carballeda, A. (2002). *La intervención en lo social: exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales*. Buenos Aires: Paidós.
- Cardona, J., & Grisales, M. (2011). La recuperación de la memoria y el camino hacia la dignidad humana en escenarios de conflicto armado. El Caso del salón del Nunca Más en Granada Antioquia. *Euphorion*(6), 53 - 63.
- Cardona, N., Arroyave, O., & Ramírez, L. (2019). Procesos de reparación, entre la reparación estatal y la recuperación comunitaria. *El Ágora USB*, 387-304.
- Castañeda, D. (2009). ¿Qué significan los Laboratorios de Paz para la Unión Europea? *Colombia Internacional*(69), 162-179. <https://bit.ly/3w3VoSb>
- Castillejo-Cuéllar, A. (2017). Introducción. Dialécticas de la fractura y la continuidad: elementos para una lectura crítica de las transiciones. En A. Castillejo-Cuéllar, *La ilusión de la justicia transicional: perspectivas críticas desde el sur global* (pp. 1-56). Bogotá: Ediciones Uniandes. <http://dx.doi.org/10.7440/2017.25>
- Castro-Gómez, S. (2010). *La hibrys del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Universidad Pontificia Javeriana.
- Celsia. (2023). *Celsia*. <http://bit.ly/4bsLhqr>
- CNMH. (2016). *Granada: memorias de guerra, resistencia y reconstrucción*. CNMH - Colciencias - Corporación Región.
- CNMH. (2016). *Memorias de una masacre olvidada. Los mineros de El Topacio, San Rafael (Antioquia), 1988*. CNMH - Colciencias - Corporación Región.
- Cogollo, S., & Durán, N. (2021). Situación sociopolítica de los campesinos del altiplano del Oriente antioqueño. *Revista Colombiana De Ciencias Sociales*, 12(1), 193-207. <https://doi.org/10.21501/22161201.3420>
- Conciudadanía. (2015). *Crónica "Por la Defensa del Territorio, la Vida y la Paz"*. Conciudadanía: <https://bit.ly/3OuWmNK>

- Conciudadanía. (2022). *Conciudadanía*. Conciudadanía ya inició obras para el mejoramiento de 11 acueductos comunitarios del Oriente, Suroeste y Occidente antioqueño que beneficiarán a más de 5.000 personas: <https://bit.ly/3OujreM>
- Corporación para la Participación ciudadana, Conciudadanía, Programa para la Paz de la Compañía de Jesús [CINEP], Asociación de mujeres de oreinte antioqueño [AMOR]. (2007). *Entre pasos y abrazos. Las promotoras de vida y salud mental, Provisame, se transforman y reconstruyen el tejido social del oriente antioqueño. Sistematización de la experiencia del modelo formativo 2004 - 2006*.
- Corvalán, J. (1996). *Los paradigmas de lo social y las concepciones de intervención en la sociedad*. CIDE.
- Coscione, M., & García, V. (2014). TLCs, paro nacional agrario y movimiento social en Colombia. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Questions du temps présent*. <http://journals.openedition.org/nuevomundo/67127>
- Courtheyn, C. (2019). Territorios de paz: otras territorialidades en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia. *Territorios 40*, 291-318.
- Cuadros, L. (2019). *Modos y espacios de vida campesina campesinos. Entre la recuperación, la (re)producción y defensa de la vida digna del campesinado en el Oriente antioqueño*. [Tesis pregrado], Universidad de Antioquia. <https://hdl.handle.net/10495/13542>
- Cuestas-Caza, J. (2019). El discurso del desarrollo en las políticas públicas: del postdesarrollo a la crítica decolonial. *TranHs Trayectorias Humanas Trascontinentales(4)*, 53-67. doi:<https://doi.org/10.25965/trahs.1561>
- Dejusticia. (2019). *Dejusticia*. Obtenido de ¿En qué va la sentencia que pide medidas para contar al campesinado?: <https://bit.ly/3OqPykk>
- Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2020). *Terridata*. <https://bit.ly/4bsLCJJ>
- Duarte, C., & Montenegro, C. (2020). Campesinos en Colombia. Un análisis conceptual e histórico necesario. En M. Saade, *Conceptualización del campesinado en Colombia. Documento*

- técnico para su definición, caracterización y medición* (pp. 119-171). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.
- Duque, H. (2021). *Análisis de los impactos sociales de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) en las comunidades del oriente antioqueño: caso PCH el popal, municipio de Cocorná*. Antioquia. [Tesis pregrado], Universidad de Medellín. <http://hdl.handle.net/11407/6409>
- Dussel, E. (1994). *1492. El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad*. Plural editores.
- Echeverry, J. A. (30 de mayo de 2023). "Lo mejor sería que nos dejaran así como estamos". En Tierra cruzada: <https://bit.ly/3OuFabh>
- Econometría. (2008). *Evaluación de procesos de retorno para la generación de recomendaciones que permitan identificar variables de éxito y retos para una respuesta más efectiva. Estudio de caso retorno El Tabor Municipio de Granada - Antioquia*. Unidad Técnica Conjunta (UTeC) – ACNUR y Acción Social.
- El Colombiano. (2022). Dos homicidios en Granada agudizan crisis de seguridad en el oriente antioqueño. En *El Colombiano*. <https://bit.ly/49gVSTa>
- El Colombiano. (2022). En el Oriente Antioqueño no quieren más pequeñas hidroeléctricas. En *El Colombiano*. <https://bit.ly/3SpS8YW>
- El Tiempo. (2022). Asesinan a líder ambiental integrante del Pacto Histórico en Antioquia. En *El Tiempo*. <https://bit.ly/3ukYd0J>
- El Tiempo. (2022). Grupo ilegal declara objetivo militar a varios jóvenes de Granada. En *El Tiempo*. <https://bit.ly/3Uu08Lc>
- Escobar, A. (2012). *La invención del desarrollo*. Universidad del Cauca.
- Escobar, A. (2016). Sentipensar con la tierra: Las Luchas Territoriales y la Dimensión Ontológica de las Epistemologías del Sur. *Revista de Antropología Iberoamericana*, 11(1), 11-32. <https://bit.ly/3w3fNXD>

- Esteva, G. (1996). Desarrollo. En W. Sachs (Ed.), *Diccionario del Desarrollo. Una Guía del Conocimiento como Poder* (pp. 52 - 78). PRATEC. <https://bit.ly/49nfd58>
- Esteva, G. (2015). Para sentipensar la comunalidad. *Bajo El Volcán*, 15(23), 171-186. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28643473010>
- Esteva, G., & Guerrero, A. (2018). Usos, ideas y perspectivas de la comunalidad. En R. G. (Coord.), *Comunanilidad, tramas comunitarias y producción de lo común. Debates contemporáneos desde América Latina* (pp. 31-50). Colectivo Editorial Pez en el Árbol. Editorial Casa de las Preguntas.
- Falla, U. (2019). Investigación social e intervención profesional: categorías centrales en la praxis del trabajo social. *Tabula Rasa*(31), 271-288. <https://doi.org/10.25058/20112742.n31.11>
- Fleitas, K., Paz, M., & Valverde, S. (2020). Aportes de Alexander Chayanov a los estudios de la antropología económica y rural. *Papeles de trabajo - Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural*, 73-92. <https://bit.ly/482X9wc>
- Galeano, E. (2014). *Investigación cualitativa introducción*. Universidad Cooperativa de Colombia UCC. <https://bit.ly/492gyPb>
- García, C. (2007). Conflicto, discursos y reconfiguración regional. El oriente antioqueño: de la Violencia de los cincuenta al Laboratorio de Paz. *Controversia*(189), 129-145.
- García, C. (2008). Territorio y conflicto. Tensiones y tendencias de la transformación regional. En F. G. (Editor), *Hacia la reconstrucción del país: Territorio, Desarrollo y Política en Regiones afectadas por el conflicto armado* (pp. 173-194). CINEP-ODECOF.
- García, C., & Aramburo, C. (Edits.). (2011). *Geografías de la guerra el poder y la resistencia. Oriente y Uraba antioqueños. 1990 - 2008*. CINEP - INER.
- Ghiso, A. (2013). Investigación social comunitaria en contextos conflictivos. *Revisata colombiana de ciencias sociales*, 4(1), 121-134.
- Giraldo, M. I. (2010). *La gestión social de ISAGEN y el enfoque sensible al conexto conflictivo*. tesis de posgrado, Universidad Nacional de Colombia. <https://bit.ly/488Myjo>

- GMH. (2011). *San Carlos : memorias del éxodo en la guerra*. (G. Sánchez, Ed.) Ediciones Semana.
<https://bit.ly/42qPxIX>
- Gómez, E., & Vásquez, G. (2009). *Vivir bien frente al desarrollo. Procesos de planeación participativa en Medellín*. (Esperanza Gómez, & Gerardo Vásquez, Edits.)
- Gómez, L. A., & Espinal, J. (2010). *Desarrollo social con energía. La central hidroeléctrica Guatapé, factor de desarrollo*. Fundación Codesarrollo.
- Gómez-Hernández, E. (2007). Crítica al desarrollo entre lo tangible y lo intangible. *Porik An*(12), 61 - 81. <http://hdl.handle.net/10495/3810>
- Gómez-Hernández, E. (2016). Investigación decolonial desde el Trabajo Social. *Cambio Social*(1), 162-175. <https://bit.ly/3SuPmSf>
- González, F. (2011). El espacio y el tiempo en los conflictos del Oriente y Urabá antioqueños. En C. García, & C. Aramburo, *Geografías d ela guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños 1990 - 2008*. CINEP - INER.
- Grosfoguel, R., & Mignolo, W. (2008). Intervenciones decoloniales: una breve introducción. (U. C. Cundinamarca, Ed.) *Tabula Rasa*(9), 29-37. <https://bit.ly/4bor198>
- GSN. (2020). *Granada Siempre Nuestra*. <https://granadasiemprenuestra.org/>
- Guerrero, P. (2010). Corazonar el sentido de las epistemologías dominantes desde las sabidurías insurgentes, para construir sentoidos otros de la existencia. *Calle 14: revista de investigación en el campo del arte*, 4(5), 80-94. <https://bit.ly/3UuwZj2>
- Gutiérrez, R. (2018). Producir lo común: entramados comunitarios y formas de lo político. En R. Gutiérrez, *Comunalidad, tramas comunitarias y producción de lo común. Debates contemporaneos desde América Latina* (pp. 51-72). Colectivo Editorial Pez en el Árbol, Editorial Casa de las Preguntas.
- Gutiérrez, R. (2018a). Producir lo común: entramados comunitarios y formas de lo político. En R. G. (Coord.), *Comunalidad, tramas comunitarias y producción de lo común. Debates contemporáneos desde América Latina* (pp. 51-72). Oaxaca, México: Colectivo Editorial Pez en el Árbol. Editorial Casa de las Preguntas.

- Gutiérrez, R. (2018b). Comunalidad, producción de lo común y tramascomunitarias: la apertura de una conversación. Estudio Introductorio. En R. G. (Coord.), *Comunalidad, tramas comunitarias y producción de lo común. Debates contemporáneos desde América Latina* (pp. 7-30). Colectivo Editorial Pez en el Árbol. Editorial Casa de las Pregunta.
- Gutiérrez, R., & Salazar, H. (2019). Reproducción comunitaria de la vida. Pensando la transformación social en el presente. En VV.AA, *Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida* (pp. 21-44). Traficante de sueños.
- Haber, A. (2011). Nometodología Payanesa: Notas de metodología indisciplinada. *Revista Chilena de Antropología*(23), 9-49. <https://bit.ly/3SpCDjx>
- Harvey, D. (2007). Notas hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual. *GeoBaires. Cuadernos de Geografía*(54).
- Heying, K. (1982). Principales enfoques sobre la economía campesina. *Revista de la CEPAL*(16), 115-142. <https://doi.org/10.18356/b5448774-es>
- Holguin, J. (2018). *Sentidos en torno a la intervención psicosocial para algunos sobrevivientes del conflicto armado colombiano en Granada, Antioquia*. [Tesis pregrado]. Eafit. <https://bit.ly/491f73A>
- Idárraga, M., & Núñez, M. (2014). *Granada : prohibido olvidar (Monografía)*. Universidad Católica de Pereira. <http://hdl.handle.net/10785/1992>
- Illich, I. (1978). *La convivencialidad*. México. <https://www.ivanillich.org.mx/convivencial.pdf>
- Illich, I. (2008). Por un desacoplamiento de la paz y el desarrollo. En I. Illich, *Obras Reunidas Volumen II* (pp. 429-439). Fondo de Cultura Económica.
- Iner. (1990). *Granada. Colección de estudios de localidades*. INER - CORNARE.
- Jaime-Salas, J. R. (2019). Descolonizar los Estudios de Paz un desafío vigente en el marco de la neoliberalización epistémica contemporánea. *Revista de Paz y Conflictos*, 12(1), 133-157. <http://dx.doi.org/10.30827/revpaz.v1i1i2.8307>

- Lander, E., Castro-Gómez, S., Coronil, F., Dussel, E., Escobar, A., López, F., . . . Quijano, A. (1993). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- Latouche, S. (2009). *Sobrevivir al desarrollo. De la decolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad alternativa*. Icaria Mas Madera.
- Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la colonialidad del ser. Aportes al desarrollo de un concepto. En A. S. (Coordinadoras), *Antología del pensamiento crítico puertorriqueño contemporáneo* (pp. 565–610). CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctvnp0jr5.23>
- Martínez Luna, J. (2015). Conocimiento y comunalidad. *Bajo El Volcán*, 15(23), 99-112.
- Massey, D. (2012). Un sentido global del lugar. En N. Benach, & A. Albet, *Doreen Massey. Un sentido global del lugar* (pp. 112-129). Barcelona: Icaria.
- Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño. (s.f.). *Procesos de retorno al oriente antioqueño. "Retornar dignamente o volver sin derechos". Estudio de caso*. Corporación Jurídica Libertad: <https://bit.ly/3w137Au>
- Ministerio de la Salud y Protección Social. (2023). *Ministerio de la Salud y Protección Social*. <https://bit.ly/48Zf6NG>
- MiOriente. (2022). Ataque sicarial deja un muerto y un herido en Granada. En *MioOriente*. <https://bit.ly/4922G7J>
- Montaña, V. (2016). Etnogénesis, desindigenización y campesinismos. Apuntes para una reflexión teórica del cambio cultural y las relaciones interculturales del pasado. *Revista Colombia de Antropología*, 52(1), 63-90.
- Montero, M. (2012). El Concepto de Intervención Social desde una Perspectiva Psicológico-Comunitaria. *MEC-EDUPAZ*(1), 54-76.
- Montón, D. (2019). *Vía Campesina*. En *Vía Campesina* <https://bit.ly/4blkYCh>
- Múnera, M. (2007). *Resignificar el desarrollo*. Escuela del hábitat CEHAP - Universidad Nacional de Colombia.

- Najmanovich, D. (2021). "Cudadanía" Ecología de saberes y cuidados. En E. Duering, & L. Cufre, *El tejido social en las calles sin nombre. Reflexiones sobre un acompañamiento en el abordaje de las violencias cotidianas* (pp. 236-264). Tirant Lo Blanch.
- Núñez, M. (2013). *Restaurando a Granada*. La cola de rata: <https://bit.ly/3SHVjfm>
- Olaya, C. (2017). El exterminio del Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia. *El Ágora USB*, 17(1), 128-144.
- Ortiz, A., & Arias, M. I. (2019). Hacer decolonial: desobedecer la metodología. *Hallazgos*, 16(31), 147-166. <https://bit.ly/3UnhMQF>
- Peña, L. (2001). Teorías del Desarrollo. *Cuadernos de Geografía*, X(1 - 2), 205 - 235.
- Pérez, E. (2018). El lenguaje comunal como aproximación metodológica decolonial. *Avá. Revista de Antropología*, 33, 141-164. <https://bit.ly/3UuUZIU>
- Pineda, H., & Valencia, S. (2022). Territorialidad campesina, ausente en proyectos políticos para el Oriente antioqueño. *Bitácora Urbano Territorial*, 1(32), 135-148. <https://bit.ly/3HNIP1i>
- Ploeg, J. D. (2010). *Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios*. España: Icaria.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2010). *Oriente Antioqueño: análisis de conflictividad*. <https://bit.ly/482XgrC>
- Posada, D., Pabón, N., & Bahamón, M. (2013). Territorios en contexto de retorno: lecturas desde las representaciones sociales de los retornados de las veredas Galilea y El Roble del municipio de Granada, Antioquia. *Tendencias y Retos*, 18(2), 79-92.
- Programa de Desarrollo para la Paz [PRODEPAZ]. (2020). *Programa de Desarrollo para la Paz*. <https://www.programadesarrolloparalapaz.org/>
- Programa de Desarrollo para la Paz [PRODEPAZ]. (2023). *Programa de Desarrollo para la Paz*. <https://programadesarrolloparalapaz.org/historia/>
- Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En D. C. (Editor), *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (pp. 777-832). Buenos Aires: CLACSO.

- Quintero, J., Charao, F., & Zuluaga, C. (2019). Caña, campesinos y panela: la emergencia del "territorio dulce" del Oriente antioqueño (Colombia). *Eutopía, Revista de Desarrollo Económico Territorial*, 101-120. <http://doi.org/10.17141/eutopia.15.2019.3876>
- Ramírez, A. (2004). El papel de la comunidad internacional en Colombia. *Revista Controversia*, 80-85. <https://doi.org/10.54118/controver.v0i0.384>
- Ramírez, L. (2015). Revisión a la implementación de los programas de retorno. Una mirada a partir de tres estudios de caso en el oriente antioqueño. *El Ágora USB*, 5(2), 325 - 585. <https://bit.ly/3umoxHO>
- Ramírez, L. (2021). La juntadera: recuperación de prácticas comunitarias cotidianas como forma de reparación en Palmirita, municipio de Cocorná, Antioquia. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 45, 79-100. <https://bit.ly/485xPpx>
- Ramírez, L. (2022a). El dispositivo humanitario y transicional de la atención y reparación a víctimas del conflicto armado colombiano en procesos adelantados en la subregión del Oriente antioqueño. *Oñati Socio-Legal Series*, 12(5), 1153–1177. <https://bit.ly/47XKiLO>
- Ramírez, L. (2022b). Concurrencia de acuerdos y visiones en la provisión de infraestructuras como forma de reparación a víctimas y de construcción de paz en el Oriente antioqueño. *Revista Colombiana de Antropología (RCA)*, 58(2), 77-104. <https://bit.ly/47Y9Zfn>
- Reverón, C. (2010). *Acción sin daño, desarrollo y derechos humanos : dificultades y aprendizajes*. Universidad Nacional de Colombia. Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC). <http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/653>
- Richmond, O. (2011). Resistencia y paz postliberal. *Relaciones Internacionales*(16), 13-46.
- Rincon, J. J. (2020). La lucha por el reconocimiento del campesinado. Una discusión a propósito del concepto de la comisión de expertos. En M. S. (Editora), *Conceptualización del campesinado en Colombia. Documento técnico para su definición, caracterización y medición* (pp. 57-102). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.

- Ríos, J., & Jaramillo, E. (2017). *Sostenibilidad de los retornos. Recuperación del tejido social a través de proyectos productivos con mujeres : análisis de caso, municipio de Granada - Antioquia* [Tesis pregrado]. Universidad de Antioquia. <https://hdl.handle.net/10495/14003>
- Rubiano, E. (2017). Memoria, arte y duelo: el caso del Salón del Nunca Más de Granada (Antioquia, Colombia). *HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local*, 9(18), 313-342. <https://doi.org/10.15446/historelo.v9n18.59106>
- Saade, M. (2020). *Conceptualización del campesinado en Colombia. Documento técnico para su definición, caracterización y medición*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Saavedra, J. (2015). Cuatro argumentos sobre el concepto de intervención social. *Cinta Moebio*(53), 135-146. <https://bit.ly/3ukOdo8>
- Sachs, W. (1996). Introducción. En W. S. (Editor), *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento* (pp. 1-7). PRATEC. <https://bit.ly/3uveGzn>
- Saénz, J. (2007). Temas de reflexión en la intervención social. *Revista CS*(1). <https://www.redalyc.org/pdf/4763/476348365007>
- Sánchez, C., & Hincapié, Á. (2021). Prácticas de Resistencia En Territorios De Conflicto Armado. Resistencia en el Oriente Antioqueño entre 1998 y 2004, durante las confrontaciones armadas entre las FARC-EP y los paramilitares. *Revista de Estudios Psicosociales Latinoamericanos*, 4, 56-78. <https://bit.ly/3ukNVh2>
- Sandoval-Forero, E., & Capera, J. J. (2020). Una mirada anti-hegemónica y descolonizadora de los estudios de paz en Nuestra América. En U. d. Venezuela, *Espistemologías decoloniales para la paz en el Sur - Global* (pp. 19-50). LISYL- Red CoPaLa - Red de Pensamiento Decolonial - Revista FAIA Argentina - Fondo Editorial “Mario Briceño - Iragorry”.
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad*. Planeta.
- Serje, M. (2010). Desarrollo y conflicto. En M. S. (coordinadora), *Desarrollo y conflicto. territorios, recursos y paisajes en la historia oculta de proyectos y políticas* (pp. 1-27). Universidad de los Andes.

- Suárez Krabbe, J. (2011). En la realidad. Hacia metodologías de investigación decoloniales. *Tabula Rasa*(14), 183-2004.
- Asociación Tejiendo Territorio para la Paz [TEJIPAZ] (2020). *Tejiendo territorio para la paz. Desde el ser para poder hacer*. <https://tejipaz.org/home/>
- Torres, A. (2003). Los nuevos sentidos de lo comunitario etos a la pedagogía social. *Praxis pedagógica*, 3(4), 6-23.
- Torres, A. (2013). *El retorno a la comunidad. Problemas, debates y desafíos de vivir juntos*. Bogotá: CINDE- Editorial El Búho.
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas [UARIV] (2020). <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones>
- Uribe, M. T. (2015). Notas preliminares sobre resistencias de la sociedad civil en un contexto de guerras y transacciones. En M. T. Uribe, *La voz dulce de la verdad amarga. Selección de textos* (pp 111 - 137). Universidad de Antioquia.
- Valderrama, M., & Lopera, J. (julio 2012 - julio 2013 de 2015). Lineamientos para intervención social en el marco de la política pública de retornos rurales en Antioquia. *Revista Trabajo Social*(16 y 17), 95-138.
- Vásquez Arenas, G. (2020). La paz en Colombia: interpelaciones desde las pazes decoloniales e interculturales. En *Epistemologías decoloniales para la paz en el Sur-Global Homenaje al filósofo del pensamiento antihegemónico Álvaro Ballardo Márquez- Fernández* (pp. 88-118). Fondo de Publicaciones LISYL Universidad de los Andes (Venezuela), Red CoPaLa (México), Red de Pensamiento Decolonial, Fondo Editorial MarioBriceño Iragorry (Argentina) y Revista FAIA (Colombia) Universidad de Los Andes Venezuela.
- Vásquez, G., & Muñoz, N. (2020). Interpelaciones a los social desde una ética intercultural y decolonial. En e. a. Gómez-Hernández, *Ética intercultural y decolonial de Trabajo Social* (pp. 68-78). Pulso y Letra.

-
- Velasco, M. (2014). *Quines son hoy los/las campesinos/as: Un acercamiento al proceso de construcción de identidad campesina en el marco del conflicto armado colombiano*. [Tesis doctorado] Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso.
- Vélez, O. L. (2003). *Reconfigurando el trabajo social. Perspectivas y tendencias contemporáneas*. Espacio.
- Verdad Abierta. (2018). Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño: una persecución que será resarcida. *Verdad Abierta*. <https://bit.ly/3HMwJEg>
- Villa, J. D. (2016). Intervenciones psicosociales en el marco de acciones de reparación a víctimas del conflicto armado colombiano. *ECA Estudios Centroamericanos*, 71(744), 81-104.
- Walsh, C. (2005). *Pensamiento crítico y matriz (de) colonial: reflexiones latinoamericanas*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.
- Yie, S. (2022). Aparecer, desaparecer y reaparecer ante el estado como campesinos. *Revista Colombiana de Antropología*, 58(1), 115-152.

Anexos

Anexo 1. Consentimiento informado

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGEN NIÑA, NIÑO Ò ADOLESCENTE

Yo, Bertha Lucia Arias Ríos, identificado(a) con la cédula N° 43.644.886 de Granada Am a través del presente documento y en pleno uso de mis facultades, aptitudes y capacidades mentales, de manera libre y espontánea, y actuando como representante del niño, niña o adolescente, autorizo a Lina María Vélez y/o al Comité de Deporte de la JAC de la vereda El Tabor, para que en cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 (normativa de protección de datos personales), realice las siguientes actividades:

- (a) Captar imágenes personales (total o parcialmente), tomar fotografías, realizar videos, audios (voz) o a través de cualquier otro medio conocido o por conocerse y similares del niño, niña o adolescente mencionado en el presente documento, a través de cualquier medio físico, electrónico o de otra naturaleza. Estas imágenes, que para efectos de este documento se entienden por el nombre, seudónimo, voz, firma, iniciales, figura, fisonomía total o parcial del cuerpo y/o cualquier símbolo que se relacione con la identidad del niño, niña o adolescente.
- (b) Grabar su voz, cualquier interpretación artística, su nombre e información recolectada en entrevistas sobre y/o de él o ella.
- (c) Divulgar y publicar estas imágenes a través de cualquier medio físico, electrónico, virtual o de cualquier otra naturaleza, pública o privada.
- (d) Hacer uso ilimitado de estas imágenes.
- (e) Utilizar estas imágenes en cualquier lugar de Colombia o el mundo, sin límite de tiempo.
- (f) Modificar, adaptar, arreglar, manipular y alterar estas imágenes para uso publicitario y otros fines lícitos de cualquier forma, entendiéndose que lo anterior, en ningún momento constituya una violación a los derechos morales del niño, niña o adolescentes y de quien firma este documento.
- (g) Utilizar las imágenes, el nombre del niño, niña o adolescente y su historia de vida personal y/o familiar, y/o referirse a éste o ésta en materiales del trabajo de recuperación de la historia de la vereda El Tabor. Las fotografías y/o videos podrán reproducirse en parte o enteramente en todo soporte (papel, numérico, magnético, tejido, plástico, etc.) e integrados a cualquier otro material (fotografía, dibujo, ilustración, pintura, video, animaciones etc.) conocidos y por conocer. Las fotografías o videos podrán explotarse en todo el mundo y en todos los ámbitos (publicidad, edición, prensa, empaquetado, diseño etc.) por Lina María Vélez y/o El Comité de Deporte de la JAC de la vereda El Tabor o por quien estos consideren pertinente sin ánimo de lucro.

Las sesiones donde se captaron las imágenes fueron realizadas bajo total consentimiento y en ningún momento se trasgredió dignidad o se violó derecho alguno en especial el de honor, intimidad, buena imagen y buen nombre del niño, niña o adolescente.

La captación de estas imágenes e interpretaciones se hace con el fin de reconstruir la historia de la vereda El Tabor haciendo un video que promueva el sentido de

pertenencia para Lina María Vélez y/o al Comité de Deporte de la JAC de la vereda El Tabor.

Reconozco (reconocemos) que esta autorización que estamos impartiendo a favor de Lina María Vélez y/o al Comité de Deporte de la JAC de la vereda El Tabor, se realiza en forma gratuita y por tanto manifiesto (manifestamos) que no se nos adeuda suma alguna por concepto de este documento. En consecuencia, me (nos) comprometo (comprometemos) a no reclamar valor alguno, por concepto de la utilización que hiciera Lina María Vélez y/o al Comité de Deporte de la JAC de la vereda El Tabor o cualquier otra persona, natural o jurídica, o que haya sido autorizada por estos para la utilización de estas imágenes.

Estoy realizando esta autorización a mi nombre y a nombre del niño, niña o adolescente, de quien soy padre o tutor legal y a nombre de quien estoy autorizado para firmar este documento.

Firma: vBertha Lucía Arias Ríos C.C. 43.644886

Nombre: Bertha Arias, en mi capacidad como padre o tutor legal de:

TF 1041203978 (nombre del niño, niña o adolescente)

Doris Jacinta García Arias (documento del niño, niña o adolescente)

Teléfono 3148753607

Correo electrónico no tiene

Anexo 2. Memoria de trabajo de campo (recoge acuerdos éticos)

| “Comité-ando” Reunión comité de deporte vereda El Tabor | |
|--|--------------------------------------|
| Fecha: 7 de noviembre de 2021 | Visita de campo No. 5 |
| Hora de inicio: 3:30 p.m. | Hora de finalización: 6:00 pm |
| Lugar: Escuela vereda El Tabor | Ciudad: Granada |
| Participantes | |
| Alba Irene Giraldo | |
| Liliana Quintero | |
| Alcides Quintero | |
| Lucelly Giraldo | |
| Walter Arias | |
| Claudia Aristizábal | |
| Marisol Quintero | |
| Brayan Quintero | |
| Mery Ocampo | |
| Lina María Vélez Sepúlveda | |
| Objetivo | |
| <p>Participar de la reunión periódica del comité de deportes de la vereda El Tabor y presentar la propuesta de investigación en articulación con el comité a través de la estrategia de Comité-ando</p> <p>Orden del día</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oración 2. Llamada a lista 3. Lectura del acta anterior y aprobación 4. Informe 5. Propositiones y varios. | |
| Desarrollo del encuentro | |
| <p>La oración estuvo a cargo de Lucelly, así como el llamado a lista. Liliana leyó el acta de la reunión anterior la cual fue aprobada. William presentó el informe financiero con los gastos e ingresos a los fondos del comité y recogió el aporte de cada uno de los asistentes a la reunión periódico del comité. También se informa que la final del torneo Inter veredal se realizará el 5 de diciembre.</p> <p>En el espacio de las proposiciones y varios tuve la oportunidad de intervenir; para encuadrar mi intervención hice un recuento de los acercamientos que había realizado un año atrás cuando les conté del interés de hacer el trabajo de investigación con la comunidad; al terminar el encuadre compartí con el comité unos acuerdos éticos que consideré importantes tales como:</p> <p>Reconocer y visibilizar el conocimiento, las expectativas y emociones de las personas que participan en el proceso de investigación/intervención.</p> <p>Enfatizar en el conocimiento práctico que emerge en la comunidad en aras de fortalecer o recuperar sus vínculos sociales y comunitarios.</p> <p>Vincular la investigación/intervención con la producción de la vida en común para buscar creativamente procesos de interacción que beneficien a todas las personas participantes.</p> <p>Respetar la voluntad de las personas participantes de continuar o abandonar el proceso de investigación/intervención, así como si desean que se publique o no los datos o materiales concernientes a su participación. Respetar las formas como las personas deseen nombrarse.</p> <p>Reservar un espacio de devolución de resultados y de convalidación de estos en presencia de la comunidad. No perder de vista que el hecho de compartir y de cooperar solidariamente en un proceso de investigación/intervención es también motivo de alegría y festejo; la alegría y el festejo de una vida dignificada a través de la unión y la solidaridad.</p> <p>Y solicité autorización para grabar la sesión del comité y tomar fotografías no solo de este sino de los demás encuentros.</p> | |

Brevemente hice un balance de los temas que encontré eran de interés para ellos la historia de la vereda, cómo viven en la vereda, las tradiciones que se han perdido como las jornadas marianas, las celebraciones culturales y de la familia. Irene propone que pueden empezar con uno de los temas e ir abordando e indica que la pérdida de esas tradiciones y valores obedece no solo a la falta de interés actual de las personas, sino que después del desplazamiento se perdieron muchas tradiciones y que añoran volver a tener esos espacios.

Al respecto planteo que el trabajo de investigación puede ser un pretexto para que hagamos diversas actividades como chocolatadas, lunadas, etc. que nos puedan servir para indagar por la historia de la vereda, que se promueva la integración y responder a los intereses investigativos alrededor de la paz y el desarrollo. La idea de la chocolatada les gustó mucho con una fogata donde la gente venga, cuenta historias, etc. También les informé que teniendo en cuenta la relevancia del comité en la comunidad, en la propuesta que presenté en la universidad la denominé comité-ando para que este sea el lugar para conversar, proponer ideas, y concertar entre todos cómo hacer el trabajo.

Hay consenso entre todos en que se quiere reconstruir la historia de la vereda y que hay interés igualmente de motivar la participación y despertar el sentido de pertenencia de las personas de la comunidad a través de diferentes estrategias. Se aclara que la responsabilidad de hacer la tesis es mía y que no puedo delegar esa responsabilidad en la comunidad pero que ante todo es que el proceso sea participativo y que conjuntamente definamos las estrategias que ayuden a que se despierte el interés de la comunidad y a la vez sea pretexto para integrar a la comunidad y dejar algunos productos de como cartillas, audios cortos, imágenes con historias, entre otros. Liliana indica que le parece bien que yo los pueda ayudar a movilizar y acompañar el proceso y ellos a mí para hacer el trabajo que hagamos un gana-gana.

Hablamos del tiempo para hacer el proyecto; aclaré que tengo unos tiempos y cronogramas que pone la universidad, el proyecto ya fue entregado al asesor y está aprobado; el semestre siguiente sería para hacer trabajo de campo aunque este trabajo se ha venido realizando desde hace un año que estoy viniendo a la vereda, por eso la estrategia del comité-ando y que si me permiten participar de este espacio y de las reuniones mensuales que hacen para ir haciendo un trabajo que beneficie a ambas partes. La idea es concertar y ponernos de acuerdo en el comité respecto a los tiempos, fechas y tipo de actividades a realizar; así mismo, la idea es que en el comité se presenten los avances, se discuta y se haga retroalimentación de lo que se vaya logrando; también la idea es que se pueda gozar y disfrutar del proceso. El comité acepta que yo participe de este espacio y me agregaron al grupo de WhatsApp para estar al tanto de la información y poder hacer acuerdos.

Los miembros están de acuerdo con la propuesta y la idea de hacer la chocolatada es la que más los motiva por lo que se acuerda realizarla para el 28 de noviembre como bienvenida a la navidad; se habló de hacer natilla, buñuelos, chocolate. Se habló que la idea es invitar a toda la comunidad, especialmente a don Pedro y las personas que más tiempo llevan viviendo allí para hacer una tertulia, otro día podría hacerse un paseo de olla, un sancocho, entre otros. Los miembros quedaron bastante motivados con la propuesta de investigación/intervención.

Se hizo un listado de actividades que se deben hacer para la actividad del 28, la comida, la invitación.

Para finalizar se agradece la comunidad la disposición para recibirle, aceptarme e incluirme en el grupo de WhatsApp. Luego de la sesión nos quedamos compartiendo y viendo el partido.

Compromisos / Tareas:

| Tarea | Responsable | Fecha |
|--|----------------|-----------------|
| Hacer la invitación | Lina Ma. Vélez | 19 de noviembre |
| Por WhatsApp se coordinará la alimentación | Todos | |

Observaciones:

Desde la última visita a la fecha se conversó mucho con Irene sobre la posibilidad de que fuera a través del comité el espacio para hacer el trabajo de investigación e intervención por esta razón a la sesión del comité llegue con la propuesta metodológica la cual fue aprobada y acogida por los miembros del comité quienes se mostraron entusiasmados con la iniciativa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

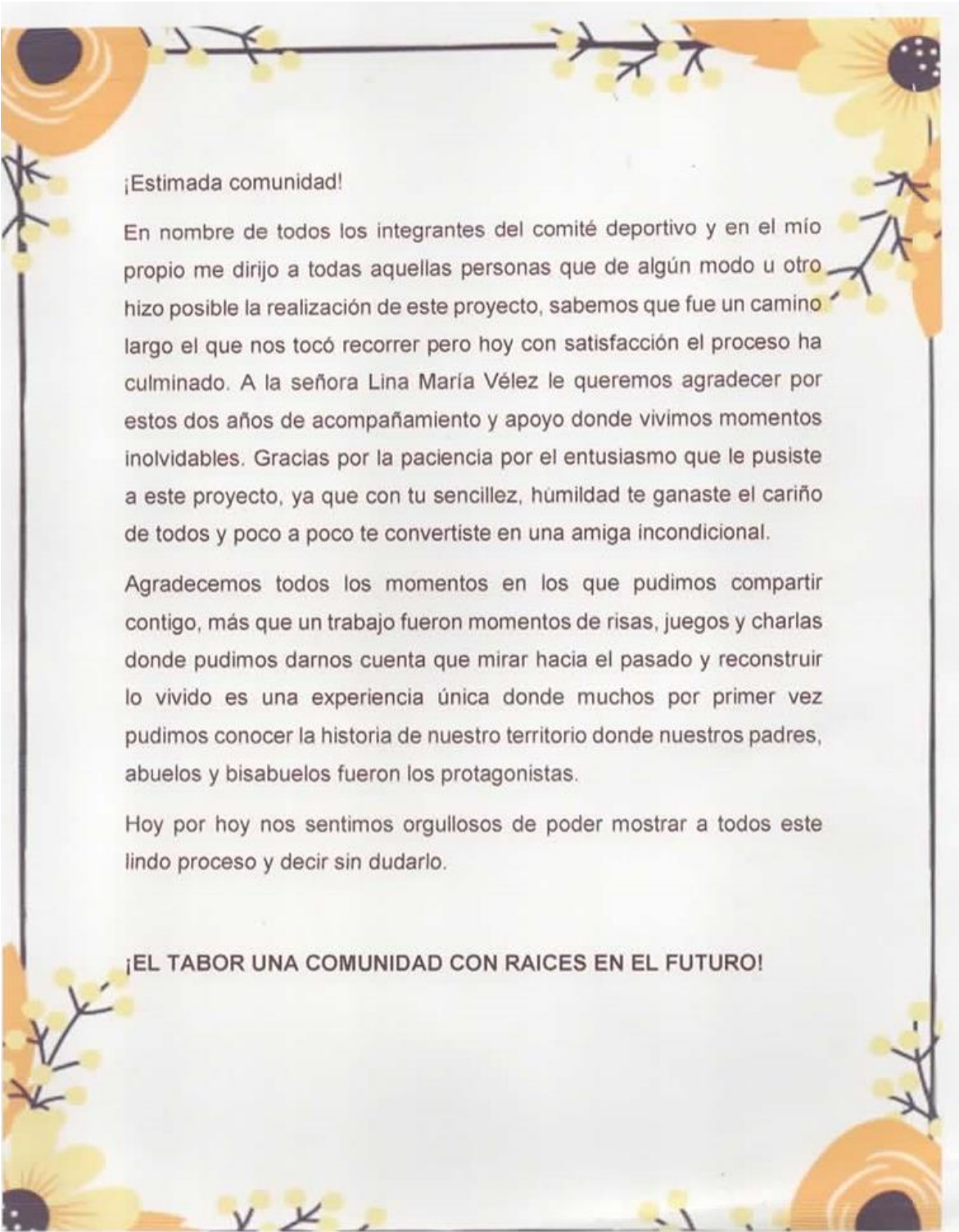
Anexo 3 Invitaciones para las actividades

| | |
|---|--|
| <p>Conozcamos nuestra historia</p>  <p>El Comité de Deporte invita a toda la comunidad de la vereda El Tabor para que el próximo domingo 28 de noviembre a las 6 p.m. nos encontremos en la escuela, compartamos una chocolatada y las historias de nuestra comunidad. ¡Los esperamos!</p> | <p>El Comité de Deporte de la vereda El Tabor invita a la comunidad a participar del tradicional paseo de olla.</p> <p>¡Recuperaremos nuestra historia y nuestras tradiciones!</p> <p>Fecha: Domingo 30 de enero de 2022 Lugar: Charco Vueltas Hora: 10 a.m. Puedes hacer tu aporte para el sancocho a través del Comité. Lleva tu plato, vaso y cuchara. ¡Te esperamos!</p> |
| <p>La JAC y el Comité de Deporte de la vereda El Tabor invitan a un torneo relámpago masculino el próximo domingo 24 de abril a partir de las 9:00a.m.</p>  <p>Inscripción: \$70.000 Se venderá sancocho a \$5.000 y otros comestibles</p> <p>1er puesto: \$500.000 2do puesto: \$250.000 3er puesto: Una anchetta Tendremos rifas sorpresa</p> <p>¡LOS ESPERAMOS!</p> | <p>¡VAMOS A CAMINAR! Te invitamos a recorrer nuestra hermosa vereda</p> <p>Cuándo: domingo 14 de agosto</p> <p>Punto de encuentro escuela vereda El Tabor 9:00 a.m. Llegaremos a Charco Vueltas pasando por el acueducto. Disfrutaremos de un rico sancocho</p> <p>¡Anímate a participar! Trae tu plato, vaso y cuchara. Invita Comité Deportivo vereda El Tabor</p> |
| <p>El comité de deporte invita a toda la comunidad a la presentación del video y exposición "El Tabor. Una comunidad con raíces en el futuro"</p>  <p>Domingo 4 de junio 4:00 p.m Escuela El Tabor ¡Los esperamos!</p> <p>PIC-COLLAGE</p> | <p>TORNEO RELÁMPAGO EL TABOR</p> <p>INSCRIPCIÓN: \$100.000</p> <p>18 de junio 9:00a.m Escuela el Tabor</p> <p>PREMIACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1- 600.000 \$ • 2-300.000 \$ • 3-150.000 \$ <p>VENTA DE COMESTIBLES</p> <p>MÁS INFORMACIÓN AL: 3136190206 INVITA: COMITÉ DE DEPORTES VEREDA EL TABOR Y EL CONCEJAL PEDRO ARISTIZÁBAL</p> |

Anexo 4 Manifestación de afecto

Anexo 5. Trovas, letanías y discurso

| Trovas | Letanías |
|--|--|
| <p>Buenas tardes para todos los queremos saludar y darles la bienvenida por venirnos a acompañar</p> <p>En este día tan especial para los habitantes del tabor en un encuentro social que damos por cerrado hoy</p> <p>La historia de la vereda que con ayuda hemos construido recorriendo lo que se hereda de nuestros viejos queridos</p> <p>Nos han dejado un legado a toda la comunidad de seguir encantando con amor a la sociedad</p> <p>A todos nuestros invitados les queremos agradecer por seguir nuestro llamado y esta vereda conocer</p> <p>A Lina la de ISAGEN que con amor y esmero nos ayudó a conocer las raíces los ancestros</p> <p>Este espacio es muy bonito y de mucha integración se reúnen los grupitos para conversar de corazón</p> <p>Ya con esta nos despedimos poniendo punto final y solo una cosa pedimos que nos vuelvan a visitar</p> | <p>En el nombre del pobre, del que no se baña y del que huele a mico</p> <p>-Santa Lina de ISAGEN necesita que la masajeen</p> <p>-Santa Claudia Aristizábal que llora a la madrugada</p> <p>-San Alcides Quintero que se levanta con el ternero</p> <p>-San Dubian Parra que se levanta con la parranda</p> <p>-Santa Marleny Giraldo que se come la gallina en caldo</p> <p>-Santa Marisol que a los hijos les da con el perol</p> <p>-San Albeiro calvete que en todas partes se mete</p> <p>-Santa Irene chiquita que parece una mosquita</p> <p>-Santa Liliana Quintero que le sirvan rápido el tetero</p> <p>-Santa Berta Lucía todo lo que se ponía no le lucía</p> |



¡Estimada comunidad!

En nombre de todos los integrantes del comité deportivo y en el mío propio me dirijo a todas aquellas personas que de algún modo u otro hizo posible la realización de este proyecto, sabemos que fue un camino largo el que nos tocó recorrer pero hoy con satisfacción el proceso ha culminado. A la señora Lina María Vélez le queremos agradecer por estos dos años de acompañamiento y apoyo donde vivimos momentos inolvidables. Gracias por la paciencia por el entusiasmo que le pusiste a este proyecto, ya que con tu sencillez, humildad te ganaste el cariño de todos y poco a poco te convertiste en una amiga incondicional.

Agradecemos todos los momentos en los que pudimos compartir contigo, más que un trabajo fueron momentos de risas, juegos y charlas donde pudimos darnos cuenta que mirar hacia el pasado y reconstruir lo vivido es una experiencia única donde muchos por primer vez pudimos conocer la historia de nuestro territorio donde nuestros padres, abuelos y bisabuelos fueron los protagonistas.

Hoy por hoy nos sentimos orgullosos de poder mostrar a todos este lindo proceso y decir sin dudarlo.

¡EL TABOR UNA COMUNIDAD CON RAICES EN EL FUTURO!

Anexo 6. Material gráfico

El Tabor Una comunidad con raíces en el futuro.

¿Dónde estamos?



Localizada en el núcleo zonal de San Matías

Limítando al Norte Vereda El Jardín

Oriente Vereda Tafetanes

Occidente Vereda La Cascaja

Al Sur con Veredas El Edén y Malpaso

El nombre de Nuestra Vereda

Hace honor al monte Tabor donde ocurrió la trasfiguración de nuestro señor Jesucristo y nos recuerda el sentimiento religioso que nos caracteriza.

Ubicada en el núcleo zonal de San Matías, municipio de Granada, zona de embalses en el oriente antioqueño. Está rodeada de hermosos paisajes incluyendo las quebradas Santa Bárbara, El Jardín y el río Tafetanes.

Nos convertimos en vereda gracias a la gestión de Tomasito y Jesús Antonio Aristizabal, quienes lideraron la construcción del puente sobre la quebrada Santa Bárbara y la escuela.

La escuela fue construida por nuestros ancestros y durante más de 30 años fue la escuela de tapia y teja de barro que acogió a nuestros padres, amigos y hermanos.



Junta de Acción Comunal



Vereda El Tabor

El Tabor Una comunidad con raíces en el futuro.

¿Quiénes somos?



Nosotros

Somos una comunidad de campesinos honestos y trabajadores que amamos nuestra tierra y valoramos el trabajo en equipo.

Hemos pasado por momentos difíciles debido al conflicto y tuvimos que desplazarnos, la mayoría de nosotros decidimos volver a nuestra tierra para vivir en paz y dignidad.

Somos colaboradores, solidarios y orgullosos de ser campesinos

Actualmente somos alrededor de 45 familias y 120 personas, pero en el pasado éramos más

La unión y la solidaridad que nos inculcaron nuestros ancestros nos ayudó a recuperar la confianza y reconstruir el tejido social que la violencia menguó.

Somos una comunidad unida que sabe vivir y convivir en armonía a pesar de nuestras diferencias.



Junta de Acción Comunal



Vereda El Tabor

El Tabor Una comunidad con raíces en el futuro.

¿Que nos une?



Pensar en el bien común

Nuestra comunidad es el ejemplo vivo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos por un bien común.

Gracias al trabajo mancomunado en mingas y convites hemos logrado importantes obras y proyectos para el beneficio de nuestra comunidad como la escuela, la vía de acceso a ella, el acueducto, el mejoramiento y mantenimiento de caminos, la construcción de la cancha, el enmallado y dotación del salón comunal.



A través de la Junta de Acción Comunal y los comités, especialmente el de obras y deportes, hemos dinamizado actividades sociales, deportivas y culturales que fortalecen nuestro sentido de comunidad.

Obtuvimos la personería jurídica en 1977 y seguimos trabajando día a día para mantener vivo el valor y sentido de lo comunitario.



Junta de Acción Comunal

Vereda El Tabor

El Tabor Una comunidad con raíces en el futuro.

¿Cómo vivimos?



Nos encanta estar integrados y compartir con los demás

La escuela y la Cancha son lugares sagrados, aquellos que nos acogen con los brazos abiertos y nos permiten sentirnos en casa

Es allí donde la pasión por el deporte nos une y nos hace más fuertes como grupo, además nos proporciona salud y una sana convivencia.

Juntos podemos hacer grandes cosas

Los domingos y los lunes son nuestros días de fiesta, porque es cuando la cancha se llena de risas, gritos y emociones. No hay nada que nos haga más felices que disfrutar juntos la vida. Las fiestas y las reuniones son parte de nuestra esencia como grupo, celebramos el día de la familia, el día del campesino la navidad comunitaria, entre otras y participamos activamente de los actos religiosos.

Los torneos interveredales son oportunidad perfecta para demostrar nuestra hospitalidad y recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que quieran compartir con nosotros.

La práctica del deporte se convierte en el pretexto perfecto para reunirnos, socializar y encontramos con nuestros seres queridos. Las fiestas y las reuniones son parte de nuestra esencia como grupo.



Junta de Acción Comunal

Vereda El Tabor

El Tabor Una comunidad con raíces en el futuro.

¿De qué vivimos?



Valoramos el trabajo en el campo

Cultivamos la caña y la transformamos en panela y sus derivados. La mayoría de nuestras familias cuenta con una ramada y cultivos de pan coger. Además unos sembramos frijol, tomate y café. Algunos tenemos ganado con fines doble propósito, otros trabajamos al jornal y apoyamos a nuestros vecinos con sus tareas.

En nuestra finca, el trabajo es arduo pero gratificante. Todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, aportamos con nuestro sudor y esfuerzo para mantener nuestras tradiciones y transmitir nuestros conocimientos de generación en generación.



Las mujeres no nos quedamos atrás, nos sumamos al trabajo del hogar y al trabajo en la finca, elaborando y vendiendo comidas, criando pollos, vendiendo huevos, elaborando artesanías y mermeladas.

Para nosotros, la finca es más que un lugar de trabajo, es un lugar de vida, un lugar donde nos sentimos libres y felices. Y es por eso que trabajamos con todo nuestro corazón y alma para que nuestra finca siga siendo nuestro orgullo y nuestra fuente de subsistencia.



El Tabor Una comunidad con raíces en el futuro.

¿Qué queremos?



Queremos ver nuestra vereda poblada, que lleguen más familias y que se sumen a esta gran comunidad que construimos cada día.

Queremos rescatar nuestros valores y tradiciones, que las generaciones futuras mantengan nuestro legado de unión, integración y trabajo comunitario.

Anhelamos vivir dignamente en paz y sin temor de tener que abandonar nuestro territorio de nuevo.



Es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para lograr esta visión y asegurar el futuro de nuestra querida vereda.